

24.12



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE:
TRAYECTORIA DE UNA LINEA POLITICA.
(1958 - 1985).**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA
P R E S E N T A N:
BARBARA DELANO AZOCAR
SERGIO REBOLLEDO MELERO



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCION

En este trabajo nos proponemos un acercamiento inicial al estudio de la evolución de la línea política del Partido Comunista de Chile (PCCh) durante las dos últimas décadas.

En la tradición histórica contemporánea la izquierda en Chile había constituido una fuerza importante, tanto por su arraigo en la sociedad, como por la influencia que llegó a tener en el Estado. Esto se debió a que desde los años 20 de este siglo, significativos sectores de la clase obrera se identificaron con las ideas del socialismo y a que, desde entonces, se conformaron dos poderosos partidos con arraigo en dicha clase: el Comunista en 1922 y el Socialista en 1933.

Ambos partidos -conocidos como "la izquierda histórica"- experimentaron desde sus inicios un crecimiento constante que les permitió ir desarrollando en mayor escala su influencia en el escenario político nacional. Esta tendencia culminó con el triunfo de la coalición izquierdista conocida como Unidad Popular en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970.

Durante todos estos años, la clase obrera especialmente y otros sectores de las fuerzas subalternas, habían logrado conquistar un espacio considerable en el marco de las referencias político-ideológicas nacionales. Sus posiciones -enmarcadas dentro de la tradición marxista- contaban con un importante apoyo en la sociedad civil y se expresaban con una contra-hegemonía muy rica y variada. Ejemplo de ella son, entre otros, el movi-

miento de la nueva canción chilena, la poesía de Neruda y de De Rocka y el que la abrumadora mayoría de las figuras intelectuales del país fueran militantes o simpatizantes de la izquierda.

El gobierno del presidente Allende sintetiza esta larga experiencia de lucha y su desenlace refleja con extraordinario dramatismo los límites que esta misma experiencia había contribuido a crear.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 marcó una honda ruptura en el conjunto de la vida societal y política chilena. La izquierda resintió especialmente este brusco desmoronamiento por haber sido -no sin cierto sentido paradójico- el único actor político comprometido en mantener la legalidad que los militares destruyeron. La izquierda -y con ello queremos decir no sólo la representación política cupular sino fundamentalmente la clase obrera y el conjunto de sujetos sociales que se sentían identificados con ella- constituía ahora el blanco principal si no único contra el cual se alzaba impaciente su enemigo de clase, unido ahora por la unánime ambición de asestarle una derrota estratégica.

Paralelamente al reflujo y al profundo desconcierto que experimentó la izquierda frente al golpe militar, se comenzó a abrir lentamente un debate sobre las causas de la derrota. Cuando la presencia relativamente prolongada de los militares en el gobierno dejó a un lado las ilusiones de una rápida recuperación,

se comenzaron a discutir las nuevas características del Estado y las nuevas tácticas y estrategias a seguir, tanto en función de la redemocratización del país, como del proyecto socialista truncado.

A lo largo de estos tristes años, la izquierda ha sufrido hondas transformaciones. Los partidos que en 1973 sostenían determinadas posiciones, en 1985 sostienen otras nuevas. Este proceso se ha ido decantando, y aunque aún está en marcha, ya podemos distinguir claramente lo que son -a *grosso modo*- dos posiciones: por un lado la emergencia en algunos partidos de la ex UP de las tendencias vagamente denominadas como "socialismo democrático" y, por otro, del surgimiento de la política de "rebelión popular" levantada por el PCCh. En el primer grupo se encuentran sectores de la más variada ideología (entre otras: cristianos de izquierda, socialdemócratas y marxistas eclécticos) y que se unifican en su crítica al socialismo real y su rechazo, en el plano táctico, a las formas violentas de lucha. En el segundo se agrupan quienes, en general, adscriben más claramente al marxismo y sostienen la necesidad de combatir a la dictadura por todos los medios, incluidos los violentos.

A pesar de que no se trata, obviamente, del único ni tampoco del más importante protagonista de la historia contemporánea de Chile, por el grado de influencia que el PCCh ha mantenido -y aún mantiene- en la política nacional, pensamos que investigar su historia más reciente podría contribuir a aclarar

las perspectivas que se abren para Chile a partir del inicio de la crisis de la dictadura (1983) y las posibilidades reales con que cuenta el proyecto popular que, junto a otras fuerzas de izquierda, impulsa para el futuro del país.

El planteamiento estratégico del PCCh comienza a perfilarse a partir de la década de 1930, una vez que ha salido de su primera etapa de clandestinidad (1927-1931, durante la dictadura ibañista), en el marco de la progresiva modificación del Estado oligárquico hacia formas más típicamente burguesas. En esta etapa se comienza a gestar la visión del período como una lucha entre la oligarquía y el resto del pueblo (incluyendo a sectores nacionales de la burguesía) que debía tender a ampliar la esfera de influencia del proletariado en la escena política, profundizar el sistema democrático representativo y negociar -vía presión de masas- las demandas económicas de los trabajadores.

De este modo, el proyecto del PCCh se va configurando como una salida nacional, que busca impulsar la industrialización del país, el fin de la dependencia del imperialismo norteamericano y la formación de un frente político amplio y pluriclasista. En dicha alianza debía jugar un rol primordial la izquierda histórica unida, con el doble objetivo de, por un lado, presionar a los sectores nacionales de la burguesía a profundizar los cambios antioligárquicos y antimperialistas, y por otro, de acumular fuerzas para un proyecto socialista futuro. Esta es la visión que predomina en la formación del Frente Popular que llevó

al triunfo al Presidente Aguirre Cerda en 1938.

Posteriormente a la segunda etapa de ilegalidad del PCCh (que va desde 1947 hasta 1958, cuando finaliza el segundo gobierno ibañista), el movimiento de masas prosigue un curso ascendente y logra negociar con efectividad sus demandas e insertarse en una poderosa organicidad legal de masas. Así, se funda la Central Unica de Trabajadores en 1955, consolidándose la unidad socialista-comunista. Al año siguiente se conforma una nueva alianza política, pero esta vez sin los radicales. Se trata del Frente de Acción Popular, FRAP, que representaría a la izquierda en las elecciones de 1958.

Hemos escogido este año como inicio de nuestra exposición pues se reúnen en él varios factores que permiten hacer un corte cronológico. El primero de ellos es que en 1958 se realizan elecciones presidenciales y por primera vez en mucho tiempo la izquierda unida obtiene una votación significativa (29%). En segundo lugar ese año se logra que el Congreso Nacional revocara la ley que mantenía al PCCh en la ilegalidad. Estos hechos -que marcaban una apertura política en el país- colaboran a que dentro del PCCh se ratifique y refuerze la concepción que planteaba impulsar la revolución antioligárquica y antimperialista mediante la aplicación de la vía pacífica.

Esta concepción -conocida públicamente por primera vez en 1956- se basaba en la posibilidad de impulsar exitosamente

la lucha legal con el fin de ir conquistando gradualmente mayores espacios democráticos para los sectores populares y será la que más tarde se intentaría aplicar bajo el gobierno del Presidente Allende.

El primer capítulo de nuestra investigación abarca, pues, desde 1958 hasta 1973. Hemos querido en él resumir apretadamente los rasgos esenciales de la línea política del PCCh de aquel momento. El conjunto de esos rasgos -es decir, la visión del período, las tareas, los modos de aplicarlas- conforman un proyecto que debió enfrentarse a la dura prueba de la realidad entre 1970 y 1973.

A pesar de la importancia que posee el estudio del período del gobierno de la UP, hemos querido centrarnos sólo en aquellos puntos del análisis en que la relación entre la línea política del PCCh y el proceso histórico propiamente tal, nos aclara ba los aciertos y las limitaciones del proyecto que el partido había elaborado. Por otra parte se trata de una etapa profusamente estudiada de la historia de Chile; nosotros sólo quisimos ver en qué medida y de qué forma afectó la concepción del PCCh -como uno de los protagonistas del proceso- al desarrollo y desenlace de los acontecimientos. El intento por sintetizar estas cuestiones permite una mejor comprensión de la forma en que el PCCh enfrenta el período que se abre en septiembre de 1973.

A partir del golpe militar el PCCh inicia un proceso muy

prolongado de elaboración de la crítica y autocrítica de los años del gobierno allendista. Se trata de un proceso dificultoso y que no siempre se expresa organizadamente pero que tiende a formar un cuerpo interpretativo coherente. Durante estos años se mantiene el proyecto político anterior sin modificaciones sustanciales y con fuertes señales, incluso, de reafirmación. Sin embargo, la instauración de una cruenta dictadura que, pasando el período inicial puramente represivo, comienza a transformar profundamente la sociedad chilena y su escenario político, plantea al PCCh nuevos desafíos.

Adaptarse a esta nueva situación, responder creativamente a las cuestiones planteadas por la derrota y levantar una alternativa realista y movilizadora son los problemas que intenta resolver el PCCh entre 1973 y 1980. Durante estos años, el PCCh se estrella con una realidad que exige cada vez mayores y más profundos esfuerzos de comprensión que comienzan a implicar el desligamiento -mayor o menor- del inadecuado marco para analizar la realidad que se tenía hasta entonces.

Este proceso, que intentamos abordar en el segundo capítulo, se refleja claramente en 1977, año en el cual se realiza el primer Pleno del partido bajo la dictadura y en que comienzan las primeras -aunque tímidas y aisladas- señales públicas de oposición. Este año marca el inicio de una etapa en que las viejas formas de hacer política se comienzan a mostrar anacrónicas e insuficientes. En 1980 este hecho, que estaba siendo cap

tado por el PCCh, pasa a ser central cuando el régimen impone su Constitución. La institucionalización de la dictadura, mientras la oposición aún pugnaba infructuosamente por articularse, provoca un sacudimiento ideológico que acelera el surgimiento de las nuevas propuestas.

Tomamos esta fecha como punto de partida del tercer capítulo pues surge por primera vez a la luz pública un replanteamiento político del PCCh que pretende responder a la nueva situación creada y que, sin duda, determina profundas modificaciones no sólo al interior del partido sino en el conjunto de la escena política nacional: nos referimos a la política de "rebeldión popular". Este nuevo planteamiento -que obliga a una redefinición del conjunto de la oposición en torno al problema de la recuperación democrática- recoge y reelabora crítica y propositivamente las principales cuestiones de fondo planteadas por la derrota de 1973 y por los siete años que llevaba entonces la dictadura. Se trata de una revaloración del proyecto popular como alternativa de poder y del abandono oficial de la ortodoxia de la "vía pacífica".

El debate que se abrió a partir de la difusión de estos nuevos planteamientos se vio bruscamente enfrentado a la práctica política a partir del inicio de la crisis de la dictadura en 1983. Desde este momento la política de rebeldión popular comienza a ser implementada verificándose una serie de indefiniciones y dificultades que obstaculizan el avance de esta línea.

Los problemas fundamentales que surgen en el desarrollo de este proceso tienen que ver con la relación entre aparato armado, partido y lucha de masas y, por lo tanto, con el binomio lucha política de masas-lucha político militar. La tendencia predominante en el PCCh durante el período que analizamos es la mantención de un aparato armado como fuerza de apoyo de una lucha de masas ascendente donde lo predominante sigue siendo el factor político.

Sin embargo, las peculiaridades del caso chileno hacen muy difícil prever los cambios que se producirán hacia adelante como no sea en términos de probabilidades. Las principales interrogantes que se derivan de este análisis -sobre el destino de la lucha armada, las posibilidades de derrotar al régimen mediante una movilización general y prolongada de masas y, sobre todo, la resolución de la pugna entre los dos proyectos de democracia que se enfrentan al interior de la oposición- son preguntas que, dada la limitación de nuestro trabajo, no intentamos responder. Estas y otras interrogantes serán resueltas por la historia.

CAPITULO PRIMERO

**EL PROGRAMA DEL PCCh Y LA CUESTION DEL PODER
(1958-1973)**

1. Los Planteamientos Programáticos del PCCh

Cuando un partido con profundas raíces históricas y sociales define los rasgos y las dimensiones de su proyecto, está contribuyendo, en un sentido proporcional a su peso en la sociedad, a darle una dirección a la historia. Es en este sentido que un pueblo no camina ciego por una senda ya trazada sino que, al contrario, puede abrir su propia brecha. Por eso, si queremos comprender ese camino es indispensable interrogar a sus propios gestores.

El Partido Comunista Chileno, PCCh, no es -ni mucho menos- el único "responsable" de la historia reciente de Chile, pero constituye sin duda uno de sus actores principales y, por lo tanto, en la dialéctica entre su decisión política y las condiciones que escapan a ella, encontraremos algunas guías para entender este período.

Fundado en 1922, nace el PCCh estrechamente ligado al movimiento obrero chileno cuyo origen se encuentra en las minas salitreras del norte del país. Tiene pues, en 1958, más de 36 años de existencia. Sus raíces obreras se mantienen firmes y se ha fogueado en las luchas de esa clase. En especial, los últimos 20 años le han servido al PCCh para definir con mayor claridad su proyecto político. En 1938 había participado en el Frente Popular, alianza electoral que llevó a la presidencia de la República al miembro del Partido Radical Pedro Aguirre Cerda. Luego, en 1946, formó parte de la Alianza Democrática, que condu

ce al triunfo a otro candidato radical, González Videla. Esta experiencia fue particularmente instructiva para el PCCh pues la alianza al poco tiempo se quebró y en 1947 se promulgó la ley No. 7 897 -llamada por el gobierno de "Defensa de la democracia-, que lo condenó a la clandestinidad y restringió severamente la actividad sindical y los derechos de los trabajadores.

Estas experiencias le permiten al PCCh elaborar una serie de conclusiones críticas de dichas alianzas, enfatizando ahora la necesidad de que la clase obrera consiguiera la preponderancia sobre los demás sectores con el fin de asegurar el curso revolucionario de los hechos. El liderato de la burguesía nacional y la carencia de una política obrera autónoma e independiente, habían sido los principales errores. Ya en el X Congreso, realizado en 1956, durante la clandestinidad, se señalaba: "no supimos dirigir a la clase obrera en forma de transformarse en la fuerza hegemónica del movimiento popular", lo que la hizo marchar a la zaga de la burguesía. (1)

Las causas fundamentales de este error se encontraban, para el PCCh, en primer lugar, en la falta de unidad de la propia clase (que en el plano político adquiría la forma de unidad socialista comunista) y, en segundo lugar, en la carencia de una política precisa y vigorosa de unidad obrero-campesina.

El gobierno de González Videla terminó en 1952, pero no fue sino hasta 1958 (bajo la presidencia de Carlos Ibáñez) que se consiguió la derogación de la mencionada ley. Gracias a una intensa y prolongada lucha de masas, el PCCh volvió otra vez a

la arena política pública. Si bien en términos numéricos no emergía con la misma fuerza, ⁽²⁾ el PCCh había conseguido una mayor definición política y sobre todo una gran unidad ideológica y orgánica, lo que le otorgaba un gran espíritu de cuerpo en la acción.

En 1958 el PCCh convoca a su XI Congreso Nacional en el cual caracteriza el proceso que desembocaría, en 1970, con la experiencia de la Unidad Popular. El análisis de las fracasadas alianzas con partidos de la burguesía y pequeña burguesía no conduce, sin embargo, a la cancelación de la política que impulsaba un frente amplio pluriclasista. Debían, eso sí, superarse los errores del pasado.

La posibilidad de lograr una amplia alianza que abriera paso a profundos cambios sociales y económicos el PCCh la deducía de su caracterización de la revolución. A fines de los cincuenta se la define como antioligarquica, antimperialista y anti feudal; a lo largo de la siguiente década, sin embargo, estos conceptos se modifican y en el programa de 1969 se establece que "la revolución chilena, por su esencia y objetivos, es antimperialista, antimonopolista y agraria y con vista al socialismo". ⁽³⁾

De este modo se definen los enemigos principales: el imperialismo y la oligarquía. Los monopolios norteamericanos poseían por entonces las más importantes riquezas naturales del país: cobre, salitre y hierro. Además "manejan el comercio exterior, dictan, por intermedio del F.M.I. y de otros organismos financieros internacionales, normas de política económica.

Dominan un vasto sector de la industria y el comercio externo a través de compañías filiales, empresas y sociedades mixtas, agrupaciones y convenios de carácter regional. Son dueños del servicio telefónico y de la distribución de energía eléctrica en las zonas de mayor población y desarrollo industrial..."⁽⁴⁾ En este cuadro la soberanía nacional está seriamente afectada, pues fuerzas extranjeras imponen o influyen en la determinación de políticas estrictamente internas.

A la oligarquía la define el PCCh como "un grupo de ávidos capitalistas (que) ha asumido en Chile el control de la mayor parte de la industria, de la banca, de los seguros y el comercio, estructurando una oligarquía financiera monopolista".⁽⁵⁾ Para graficar esta situación, el mismo programa apunta que el 46% de las acciones de las sociedades anónimas está en manos del 1% de los accionistas que, a su vez, posee el 35% de las acciones de los bancos y compañías de seguros.⁽⁶⁾ Estos verdaderos planes económicos tenían su expresión política más acabada en el Partido Nacional (PN), aunque también mantenían posiciones en un sector del Partido Demócrata Cristiano, PDC o DC.

El problema agrario estaba marcado por la necesidad de expropiar a la clase terrateniente su monopolio sobre la mayor parte de la tierra cultivable. El Partido Comunista propone una reforma agraria profunda que cuente con la participación de los representantes de las organizaciones campesinas⁽⁷⁾ y que "propicie el desarrollo preferente de una agricultura cooperativa y colectiva".⁽⁸⁾

La revolución así caracterizada no se entendía separada de las transformaciones socialistas. Según esta concepción, la revolución socialista es la segunda fase de un proceso único, que se iniciaría una vez que el cumplimiento de las tareas de la primera fase permitiera ampliar la base social y consolidar las posiciones del bloque popular.

El PCCh concibe a la clase obrera como el impulsor principal de este proceso revolucionario y centro de una alianza con "el sector avanzado del campesinado, los estudiantes, la intelectualidad y vastos sectores de las capas medias".⁽⁹⁾ Dado el carácter de la revolución, la política de alianzas del PCCh consistía en unir en torno al proletariado al conjunto de las clases y capas que apoyaran o se vieran favorecidas por las medidas antimperialistas y antioligárquicas de la revolución.

Ya en 1952 el PCCh se unió al Partido Socialista, PS, formando el Frente del Pueblo que presentó a las elecciones al candidato Salvador Allende.⁽¹⁰⁾ Cuatro años más tarde, al ampliarse la alianza, se fundó el Frente de Acción Popular, FRAP, que volvió a presentar a Allende en las dos elecciones posteriores (1958 y 1964) y que estaba integrado por los partidos socialistas, Socialista Popular, Democrático, del Trabajo y Comunista. Más tarde, el fracaso del proyecto de la Democracia Cristiana, que impulsara -en el sexenio 1964-1970- una reforma capitalista modernizante, llevó a la incorporación de nuevos sectores a la izquierda, planteando la posibilidad de constituir la alianza más amplia hasta entonces conocida. Son los casos de

las fracciones que se desprendieron de la DC (el MAPU, en 1969, y la Izquierda Cristiana en 1971) y de los sectores socialdemócratas que experimentaron una evolución hacia la izquierda.

El PCCh pensaba que en las nuevas alianzas que se establecieran sería indispensable lograr la hegemonía obrera como el único modo de garantizar el carácter revolucionario del proceso. De ahí que el centro de su actividad estuviera constituido por una serie de esfuerzos tendientes a mejorar la organización de la clase obrera, elevar su conciencia política y aumentar su influencia en la sociedad. Junto al otro partido de izquierda genuinamente obrero, el Socialista, debía conformar el eje político central de las nuevas alianzas. (11)

En cuanto a la cuestión de la vía de la revolución, el PCCh la hace, por un largo período, un problema teórico central. En 1956 -todavía vigente la ley de "Defensa de la Democracia"- el entonces secretario general, Galo González, señalaba la "vía pacífica" de acceso al poder como "la más probable". Esta apreciación arrancaba de un postulado del XX Congreso del PCUS y tomaba en cuenta principalmente el cambio en la correlación de fuerzas a nivel internacional. Se basaba, en el plano nacional, en la posibilidad de apertura de espacios democráticos por medio de la lucha de masas.

La idea de que el desarrollo pacífico de la revolución era posible, partía también de una particular apreciación del Estado chileno, al cual las luchas populares habían logrado imprimirle formas cada vez más democráticas. La conquista del poder

por medios electorales aparecía como algo factible dado el régimen de libertades públicas (uno de los más avanzados de América Latina) y la creciente influencia de la izquierda en la sociedad. (12)

Es importante hacer presente que el PCCh siempre se guió, al menos teóricamente, por una concepción marxista-leninista del Estado que ve a éste como un instrumento de dominación de clases, pero entendía que sus formas están íntimamente ligadas a las tradiciones históricas nacionales y a la correlación de fuerzas entre las clases. (13) Subyace aquí una idea del Estado con partes, instituciones o formas, utilizables por el movimiento popular y otras, que corresponden más plenamente a su carácter burgués, que deben ser neutralizadas por la presión de las masas. Esta concepción del Estado condiciona tanto el programa del partido como su política concreta ya que le impide visualizar, por un lado, la posibilidad del desarrollo violento de la revolución y, por otro, el problema del poder como una cuestión que debe resolverse, entre otras cosas, con la destrucción del viejo Estado.

La experiencia política posterior avalaría esta concepción del "desarrollo pacífico de la revolución" y del Estado utilizable y/o neutralizable. En 1961, el nuevo secretario general, Luis Corvalán (elegido en 1958), señalaba tres hechos fundamentales que, según él, ratificaban el planteamiento de Galo González en relación a que en Chile la vía más probable de acceso al poder sería la pacífica. El primero de ellos era la derogación de la ley de "Defensa de la democracia", que se logró

finalmente por la aprobación del Congreso en 1958. El segundo hecho era el perfeccionamiento de la ley electoral realizado en 1960 y que terminó con el cohecho. El tercero era la alta votación alcanzada por el candidato del FRAP en las elecciones de 1958. A estos factores se sumaba el fortalecimiento del campo socialista a nivel mundial, el fin de la guerra fría y el comienzo de la coexistencia pacífica entre la URSS y los EE.UU., lo que colaboraría a fortalecer la autodeterminación de los pueblos en sus procesos internos. (14)

La vía pacífica, lejos de ser considerada como parlamentarismo o legalismo, debía basarse en la acción revolucionaria de las masas y en una aguda lucha de clases que "sólo excluye la guerra civil o la insurrección armada". "En cualquiera de sus formas -se decía- la revolución es una lucha de masas (...) no es sólo la toma del poder. Con la conquista del poder culmina la primera parte de la revolución, que es todo un proceso de lucha de clases en el terreno económico, político e ideológico. Sin organizar tal proceso de lucha de clases no hay revolución por ninguna de las vías, ni por la pacífica, ni por la violenta". (15)

En realidad, lo que aquí parece priorizar Corvalán es la hegemonía de las fuerzas revolucionarias por sobre la cuestión de la vía. El mismo sentido tiene la insistencia en la necesidad de estar preparados para un cambio de vía en caso de que la reacción desatara la violencia. Según este planteamiento, definir la vía no debía significar atarse de manos. Pero en realidad -como lo demostrarían posteriormente los hechos- era esto

lo que se hacía, pues al excluir la guerra civil o la insurrección armada se ponían límites innecesarios al desarrollo del proceso revolucionario. Nada exigía esta autolimitación teórica de las posibilidades de desenlace de una futura situación revolucionaria. Excluir a priori una alternativa de lucha revolucionaria significa atarse de manos, aunque se diga lo contrario. La insistencia en la preparación idcológica -no práctica- para un posible cambio de vía pierde sentido al partir del supuesto de su improbabilidad y al no preverse, por lo tanto, la posibilidad real de un cambio en tal sentido.

Después de la derrota del FRAP y del triunfo del candidato democristiano, Eduardo Frei, se plantea por primera vez cambiar la denominación de la vía a "no armada", para evitar las confusiones que surgían en torno al concepto de pacífica. Para entender este cambio de denominación, se debe tener presente también el contexto internacional. Después del planteamiento del XX congreso del PCUS el triunfo de la revolución cubana pone nuevamente en el tapete la cuestión de las vías como un problema estratégico. Así lo entienden al menos los numerosos grupos que surgen a comienzos de los años sesenta, que impulsan la lucha armada y se sitúan a sí mismos a la izquierda de los partidos comunistas latinoamericanos. Desde esta posición levantan la acusación de reformistas a quienes plantean la posibilidad de una "vía pacífica" en la lucha contra el enemigo de clase.

La denominación "no armada" pretende, pues, dejar establecido que el proceso de una ascendente lucha de clases, como

la que se daba en Chile, si bien no alcanzaba formas armadas, constituía un enfrentamiento real y permanente. Sin embargo, se seguía excluyendo de antemano determinadas formas de lucha, contribuyendo a disminuir la flexibilidad táctica que se precisa en la conducción de un proceso revolucionario.

Cabe aquí discutir acerca de la necesidad o no de fijar programáticamente la vía de la revolución y hacer de ésta casi una cuestión de principios. Sin pretender entregar una definición, podemos decir que el problema de la vía guarda relación con dos aspectos centrales: a) formas de lucha como medios de acumulación de fuerza, y b) formas de lucha para lograr el acceso al poder; fundamentalmente, empleo o no de la lucha armada para su captura.

Hacemos esta distinción aunque, como ha resultado cierto en la experiencia histórica, ambas cuestiones se confunden. Es decir, la forma de acceso al poder parece ser una prolongación de las formas de lucha predominantes. Sin embargo, el caso chileno demostró lo erróneo de hacer una traslación semejante en forma automática.

Definir las formas de lucha resulta indispensable en el planteamiento táctico cuando se trata de una cuestión contingente y cotidiana y que debe permitir una transformación favorable de la correlación de fuerzas. Pero es más discutible la necesidad de definir la forma de acceso al poder en condiciones en que la situación revolucionaria no se ha creado y parece aún lejana.

El carácter táctico (esencialmente flexible y que cambia de acuerdo a las condiciones políticas concretas) de la vía, indica la imposibilidad e inconveniencia de hacerlo, como no sea de manera general, elaborando la estimación de las condiciones que la hacen posible y sus probabilidades de cambio.

¿Por qué este problema adquirió tanta importancia para el PCCh a finales de los cincuenta y durante los sesenta? Nos parece que hay tres factores que pueden explicar esto:

- a) El PCCh se sentía fuertemente ligado al movimiento comunista internacional y al sistema socialista, lo cual lo hacía particularmente sensible a los planteamientos de ambos. Los postulados del XX Congreso del PCUS, referentes a la necesidad de la coexistencia pacífica y a la importancia que tenía el sistema socialista mundial como freno de las políticas imperialistas, así como las declaraciones de los Partidos Comunistas del mundo de 1957 y 1960, ⁽¹⁶⁾ tuvieron enorme repercusión en el PCCh. Estas declaraciones fueron criticadas por algunos dirigentes (como por ejemplo R. Arismendi, secretario general del PC uruguayo) ⁽¹⁷⁾ pues convertían a la vía pacífica en la posibilidad general y no excepcional. Estos planteamientos del movimiento comunista internacional de la época suponían una subestimación de los factores internos y de la capacidad de las clases dominantes de frenar por la violencia los procesos revolucionarios.
- b) Sin embargo, estos postulados parecían verse confirmados por la experiencia histórica chilena. Esta demostraba la posi-

bilidad de introducir reformas por la vía legal. Las libertades públicas (de asociación, propaganda, organización, etcétera) habían sido conquistadas una a una por la lucha de masas, la que seguía caminos no armados. El grado de democracia alcanzado permitía mayor organización y fuerza de los sectores oprimidos y la explotación de esta situación no parecía guardar relación alguna con una cuestión militar.

- c) Al reactivarse, después de la revolución cubana, el debate en torno a las formas de lucha y al surgir en el continente las tendencias foquistas, el PCCh ratifica su posición por dos razones. La primera de ellas es que en el Chile de la época, donde las posibilidades de avance dentro del sistema democrático no sólo no estaban agotadas sino que parecían abrirse más -por el crecimiento electoral de la izquierda y el fracaso del reformismo burgués en conseguir apoyo mayoritario- , la lucha armada significaba objetivamente aislarse de las masas. Esto no sólo por las tradiciones de lucha de los trabajadores sino también por las esperanzas que se cifraban en los cambios por medios pacíficos. En segundo lugar, el principal interlocutor de los llamados "grupos de ultraizquierda" era la izquierda tradicional a la que le disputaban su militancia y su base social (en gran medida estos grupos se formaron con ex militantes socialistas o comunistas). Por tanto, el énfasis en la cuestión de la vía respondía también a una necesidad didáctica frente a las bases del propio partido.

La cuestión de la vía recibe un planteamiento menos cate-
górico en 1969, durante el XIV congreso del PCCh, donde ya no se
plantea como un problema estratégico y sólo se señala que ésta
se determina "en conformidad a la situación histórica".⁽¹⁸⁾ La
particular coyuntura política con seguridad influyó en esta pos-
tura pues semanas antes del Congreso, en octubre de 1969 y cuan-
do no faltaba más que un año para que finalizara el gobierno de
Frei, se produjo un intento de golpe de estado por parte de una
facción militar.⁽¹⁹⁾ Si bien el cuartelazo tuvo como pretexto
problemas económicos en las Fuerzas Armadas, claramente era una
intentiona derechista contra el creciente movimiento de masas.⁽²⁰⁾
Así es comprendido por el PCCh que expresa su preocupación por
lo que parece ser el "comienzo del fin de la prescindencia polí-
tica de las FF.AA".⁽²¹⁾ En estas circunstancias, el XIV congre-
so parece comprender la necesidad de darle un tratamiento más
flexible al problema de la vía.

Posteriormente, sin embargo, en muchos documentos se si-
gue hablando de "vía no armada" o "vía pacífica" como válida
para el caso chileno. Independientemente de los matices del
término, el señalamiento sigue teniendo un status programático,
es decir que se asume como inseparable de los objetivos políti-
cos generales. El respeto al orden legal, por ejemplo, se con-
sideraba indispensable para conseguir el apoyo de las capas me-
dias y la neutralidad de las FF.AA. Por otro lado, si bien se
hablaba de la necesidad de estar en condiciones de cambiar de
vía y de formas de lucha en caso necesario, en la práctica se
operó sin preparación para ello, confiando excesivamente en las

posibilidades del desarrollo pacífico. Al conferírsele un peso programático fundamental a la vía, el planteamiento no pudo cambiarse cuando cambiaron radicalmente las condiciones como en el último semestre del gobierno de la Unidad Popular.

En relación a las Fuerzas Armadas podemos decir que es en 1964 cuando comienza a tocarse con mayor precisión el tema, es decir, cuando ya el imperialismo norteamericano ha emprendido una ofensiva de penetración en las instituciones armadas del continente. La participación de la Escuadra chilena en maniobras navales junto a la flota norteamericana; la asistencia de personal militar chileno a cursos de adiestramiento antisubversivo y la actividad de asesores militares estadounidenses en Santiago, son algunos de los hechos que motivan la preocupación de la izquierda. (22)

Frente a esto, el PCCh propugna por la ruptura de las relaciones militares entre EE.UU. y Chile ya que "es indudable -afirma después del intento de golpe de 1969- que aquella educación malsana ha hecho su efecto". (23) Aspiraba a unas FF.AA. que, como cuerpo, no tuvieran participación directa en la política partidaria y cuya preocupación fundamental fuera el resguardo de la soberanía nacional. En el programa de 1969 se planteaba la formación de los militares en torno a valores patrióticos y populares, se propugnaba por la solución de sus problemas económicos y por su derecho a voto. Con esto el PCCh aspiraba a romper la separación entre las FF.AA. y la sociedad civil. Pero es necesario decir que además de discursos (de por sí escasos) muy poco o nada se hizo por cambiar esta situación y se siguió

actuando con la esperanza de que las FF.AA. mantendrían la "prescindencia política" en la medida que el movimiento popular tuviera fuerza. Esta hipótesis (la posibilidad de "atar de manos" al enemigo mediante la presión de masas) se aplicaba también a las demás estructuras estatales que el pueblo no pudiese conquistar.

Consecuentemente con el principio del desarrollo pacífico de la revolución y su táctica de lograr una amplia alianza capaz de unir a la mayoría del país, el PCCh sostuvo siempre la posición de mantener el pluripartidismo y las libertades civiles en el gobierno popular. "Los comunistas chilenos -dice Corvalán- consideramos que en el régimen de gobierno popular y más adelante, en las condiciones del socialismo, todas las corrientes populares mantendrán sus propios perfiles, todas las creencias religiosas serán respetadas, existirá por lo tanto, pluralismo ideológico y político, sin perjuicio de la lucha de cada cual por sus propias ideas".⁽²⁴⁾ Por lo tanto, bajo el gobierno popular, señala el programa, toda oposición será permitida y gozará de los derechos que la ley le otorgue. La única que será proscrita -se dice- será aquella que atente contra el régimen constitucional al intentar derrocar al gobierno.

Estos planteamientos guardan relación con la lucha que por ampliar la democracia venía desarrollando el PCCh desde hacía muchos años. Como hemos señalado, el Estado chileno parecía permitir de manera indefinida las reformas, hasta el punto de poseer una de las democracias más avanzadas de América Latina.

Según Zavaleta, ⁽²⁵⁾ en Chile se encontraba el Estado con mayor autonomía relativa del continente, propia más bien de un país desarrollado. La autonomía relativa implica que es el Estado mismo el que responde a un determinado carácter de clase y no necesariamente los personeros de su administración. Ello le da la flexibilidad suficiente como para que en él se manifieste la correlación de fuerzas existente en la sociedad. Esto se expresa en lo avanzado de la democracia de este país. El respeto a las elecciones; las reformas que se pudieron implementar en distintos niveles de la vida social; la no intervención política de las FF.AA., etcétera, eran elementos que podían existir en este marco democrático.

El Estado aquí aparecía como un ente objetivo, separado en gran medida de las clases sociales, como un instrumento factible de ser utilizado por quien se apoderara de sus mecanismos. El PCCh, si bien planteaba la necesidad de transformación del aparato estatal, siempre confió en la posibilidad de utilizar una parte de él (el poder ejecutivo) como medio revolucionario mientras los demás órganos de poder permanecían intocados. Esto suponía una condición previa de neutralización política, por medio de la presión de masas, de los órganos que permanecían en manos del enemigo de clase.

La autonomía relativa del Estado queda convertida, por efecto de esta concepción, en absoluta, pues se esperaba que el mismo aparato estatal pudiera responder a distintos intereses de clase. Esto explica que la destrucción del viejo Estado no se

vislumbrara como un objetivo prioritario sino como una tarea imprecisa y lejana.

La amplia democracia burguesa constitutiva, es cierto, un arma de doble filo que en cualquier momento podía herir a su propio dueño. Pero la burguesía, como bien dice Zavaleta, está dispuesta a mantener esa democracia y ese Estado sólo en la medida en que no amenace su propia dominación: "La democracia debe estar por fuerza ligada históricamente a una clase u otra", (26) y esa ligazón será reclamada tarde o temprano al producirse una crisis. La capacidad del Estado para contener la "lógica de las clases subalternas" alcanza un límite en su esencia de clase. La no comprensión de esta cuestión fue la que llevó al PCCh a plantearse la estrategia que lo envolvería finalmente en un tejido superestructural que, de ser marco de desarrollo del movimiento popular, terminaría por convertirse en su trampa mortal.

Con estas posiciones fundamentales el PCCh trabaja por la unidad de todas las fuerzas progresistas con el fin de formar un Gobierno Popular, lográndose a fines de 1969 la formación de la Unidad Popular integrada por seis partidos (Comunista, Socialista, Radical, Socialdemócrata, MAPU y Acción Popular Independiente). Esta coalición triunfa en las elecciones de septiembre de 1970 con lo que Salvador Allende se convertirá en el primer presidente socialista de Chile.

La tesis según la cual la revolución -antimperialista, antioligárquica y agraria- se podría desarrollar en Chile de manera pacífica parecía confirmarse plenamente. La revolución se

guiría la vía "no armada" o, lo que se parece mucho, desarmada.

2. *La crisis nacional general y la irresolución del poder*

En el período de gobierno de la Unidad Popular (UP), la estrategia política que el PCCh ha sustentado revela sus limitaciones en forma dramática. Los casi tres años transcurridos entre el 4 de noviembre de 1970 -día en que Salvador Allende asume la presidencia- y el 11 de septiembre de 1973, se caracterizan por una aguda lucha de clases y por la crisis general (y final) del sistema político tradicional.

Desde el comienzo el tiempo histórico tendió a acelerarse y la sociedad entera comenzó a experimentar una metamorfosis. Los signos de los cambios no se hicieron esperar: en los primeros veinte días el gobierno de la UP emprendió más de 15 medidas en el terreno socioeconómico y diplomático tendientes a modificar la distribución del ingreso hacia los sectores populares y a establecer vínculos internacionales con el campo socialista. Estas iniciativas le otorgaron una rápida popularidad.⁽²⁷⁾ A partir de este momento, y aproximadamente hasta comienzos de 1972, se introducen las modificaciones socioeconómicas más importantes del proceso. A fines de ese año el Estado llegó a controlar las ramas más importantes de la economía, generando el 50% del PNB.⁽²⁸⁾ Por otro lado, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se elevó del 51% en 1969 al 66% cuatro años más tarde.

Estas medidas fueron posibles al hacer uso de las facultades del poder ejecutivo,⁽²⁹⁾ a excepción de la nacionalización del cobre que debió contar con la autorización del Congreso el que, por el indesmentible apoyo activo de la mayoría nacional a la medida, se vió obligado a aceptarla por unanimidad. El movimiento popular, habiéndose apoderado del gobierno, lo usaba para realizar profundos cambios.⁽³⁰⁾

Sin embargo, el conjunto del aparato estatal no había sufrido modificaciones y todas las demás instituciones continuaban en manos de las clases dominantes. Esta peculiar situación genera al interior del Estado una fuerte contradicción que pondrá en crisis a todo el sistema institucional. La oposición controlaba la mayoría del parlamento (que sería sólo parcialmente renovado en marzo de 1973) a la vez que el aparato judicial y la Contraloría General de la República.⁽³¹⁾ A esto hay que agregar a las FF.AA. (aunque tradicionalmente no participaban en política partidista) y al personal burocrático.

El problema estratégico planteado para el PCCh consistía en si era o no posible utilizar un Estado creado por la burguesía, en función de la mantención del orden capitalista, para los fines revolucionarios que buscan terminar con dicho orden. El PCCh consideraba que las luchas populares habían logrado imprimirle al Estado tal flexibilidad en su forma que era posible hacer uso de ella actuando desde el poder ejecutivo y neutralizando a los demás órganos. Esto debía permitir la acumulación de fuerzas necesarias para la transformación de todo el aparato es-

tatal, transformación que podría llevarse a cabo por vías institucionales y no necesariamente implicarían una ruptura violenta.

La neutralización del "resto" de la maquinaria estatal se debía llevar a efecto en dos planos: desde dentro y desde fuera del Estado. La movilización de masas -cuyo eje debían ser las organizaciones obreras- y las atribuciones del poder ejecutivo serían los mecanismos que permitirían paralizar al enemigo que actuaba en el Estado. Por ello no sólo no era necesario romper la legalidad sino que su respeto era la condición de la utilización de la parte del Estado que se controlaba. Esto era particularmente importante respecto a las FF.AA. pues su tradición histórica de apego a la Constitución y respeto al poder civil hacía pensar que no se pondrían contra éste mientras se mantuviera dentro del cauce constitucional.

La oposición se traza también una estrategia en dos planos: utilizar todos los mecanismos del Estado que seguían en sus manos para bloquear al ejecutivo, creando así un conflicto institucional que esperaba se resolviera a su favor, y, por otro lado, movilizar sus fuerzas sociales con el fin de restarle base de apoyo al gobierno y boicotear su programa económico preparando la derrota del movimiento revolucionario.

Esta oposición no era, sin embargo, del todo homogénea. Su elemento más derechista, el Partido Nacional, se colocó desde un comienzo en la estrategia rupturista que buscaba el golpe de estado. Apoyó, en septiembre de 1970, la formación del grupo paramilitar fascista "Patria y Libertad" y buscó acercarse a su

estrategia al Partido Demócrata Cristiano. Este, si bien después del triunfo de Allende consolidó rápidamente al sector más reaccionario en la dirección del partido (la fracción del ex presidente Frei), enfrentaba pugnas internas que inicialmente lo llevaron a vacilar entre la oposición moderada y la rupturista. (32)

Pero la flexibilidad del sistema político, misma que había permitido el avance del movimiento popular hasta el punto de introducirse en el seno mismo del Estado, ya le resultaba ineficaz a la burguesía. En breve tiempo los partidos que la representaban se unificarán en la tarea de enmendar el "error" y poner fin al Gobierno Popular antes que termine su mandato constitucional.

La política del PCCh respecto a la oposición era también definida con el criterio de la legalidad: sus derechos deberían respetarse si actuaba de acuerdo a las leyes, pero se debían tomar las medidas correspondientes contra los sectores que las violaran. También se impulsaba una política que hiciera distinciones entre los sectores fascistas y los de centro. Se tomaba en cuenta que el PDC, pese a que en su dirección pesan sectores de la gran burguesía, contaba con una amplia base social entre trabajadores y capas medias, especialmente empleados fiscales y profesionistas universitarios. Este hecho llevaba al PCCh a plantear la posibilidad de trabajar unitariamente con las bases de la DC en los distintos frentes y organizaciones de masas.

Esta actitud era consecuente con la estrategia del PCCh,

delineada a partir de la definición del carácter de la revolución, según la cual era preciso agrupar a una mayoría activa en torno a los cambios que el gobierno impulsaba y lograr una correlación de fuerzas favorable. La condición prioritaria para con seguir este objetivo era avanzar en el cumplimiento de las medidas socioeconómicas formuladas en el programa de la UP, es decir, generar cambios estructurales en la economía tales que permitieran conseguir una amplia base social de apoyo, creando condiciones para terminar con el capitalismo.

Estas tareas fueron siempre puestas en primer plano por la dirección comunista, lo cual revela la importancia que les asignaba. Prevalecía una concepción que subordinaba la cuestión política ("poder formal") a la económica ("poder real"). (33) Si la estructura económica es modificada, se razonaba, la burguesía, sin base que la sustente, perderá su capacidad de ejercer el poder, lo que facilitará los cambios a nivel estatal.

El poder de la clase obrera se visualiza en gran medida en este nivel "real" y su ejercicio se hace corresponder a la participación de esta clase en la dirección de las empresas y la economía. (34) En torno a la cuestión económica se desarrollará una intensa lucha. Allí la oposición burguesa no sólo defendía sus privilegios como clase propietaria, sino que también buscaba impedir que se consolidara un apoyo a la UP.

A medida que el conflicto se agudizaba, la condición de neutralización del enemigo se hacía cada vez más difícil. (35) Es cierto que la movilización de masas y la temporal mayoría que

logró el Gobierno Popular, fueron capaces de frenar algunos intentos ofensivos de la reacción, particularmente en los momentos iniciales. Es el caso de los esfuerzos realizados en septiembre-octubre de 1970 para impedir que Allende asumiera la presidencia, así como acciones aisladas que el gobierno enfrentó durante el primer año.

Esta política propugnada por el PCCh se vio confirmada en octubre de 1972 cuando el gobierno debió afrontar un paro empresarial del transporte terrestre, comercio privado y sectores profesionales, el que paralizó gran parte de la actividad productiva y de los servicios del país. El objetivo último de este movimiento era crear una situación caótica que justificara el que las FF.AA. intervinieran tomando el gobierno en sus manos. La conjura fue derrotada por la vía de una amplia movilización de masas y la conformación de un gabinete con participación de los mandos de las FF.AA. El fuerte respaldo recibido por el gobierno paralizó en esa ocasión la acción opositora.

El éxito de esta política impulsó al PCCh a seguir desarrollándola, aún en condiciones muy distintas, como en la asonada militar de junio de 1973. En este caso la política de neutralización mostraría todas sus limitaciones pues su propia esencia supone un cierto plazo (el término neutralización indica una situación transitoria; sólo la derrota es duradera), el cual se hacía cada vez más breve. En esta última oportunidad el enemigo se repone rápidamente, apoyado ahora en su fuerza mi-

litar a la que el pueblo no tenía nada que oponer. Nuevamente el PCCh intenta agrupar fuerzas, esta vez en torno a la consigna "No a la guerra civil" que, en esas circunstancias, tenía un carácter defensivo y más bien contribuyó a inmovilizar las propias fuerzas que las del enemigo.

El cambio del sistema jurídico-político, que parecía una necesidad cada vez más evidente, nunca estuvo planteado a la orden del día. Si bien el PCCh entendía la necesidad de su transformación, la prioridad política la establecía -como hemos dicho- en los cambios económicos, con lo que el problema institucional pasaba a segundo plano. Sin embargo, dos posibles vías se señalaron para resolverlo. La más importante era la presión y movilización de masas en contra de las posiciones del bloque reaccionario en el Estado. La segunda -hipotética- consistiría en romper con la institucionalidad después que lo hiciera la reacción al embarcarse en un intento sedicioso que lograra ser aplastado. La primera opción debía traducirse en, o bien ganar las sucesivas elecciones, o bien emprender el cambio de la legislación por la vía plebiscitaria. Sin embargo, la coyuntura de abril de 1971, cuando la UP logra el 51% de los votos, no fue aprovechada, lo que indica que no existía suficiente decisión al respecto. Sólo cuando la crisis estaba en su cenit (y ya no se contaba con la mayoría) el presidente Allende tomó la resolución de convocar a un plebiscito, el que debió haberse anunciado el 11 de septiembre de 1973.

La segunda vía -responder con la fuerza al enemigo si

éste intentaba derrocar al gobierno- tampoco fue implementada. Después del "tancazo" de 1973 sobrevino la inmovilidad y no se tomó ninguna de las medidas que eran esenciales para seguir avanzando. Estas se referían, principalmente, al aplastamiento de la reacción y la reestructuración de los mandos superiores del ejército y de los otros órganos estatales que permanecían controlados por el bloque reaccionario.

Injusto sería achacarle al PCCh la exclusiva responsabilidad por estos errores, pero su concepción del Estado colaboraba a ellos. En abril de 1973 el secretario general, Luis Corvalán, declaraba en una entrevista: "Es indiscutible la necesidad de sustituir el aparato estatal burocrático burgués. El problema es el siguiente: "¿Qué hacemos? ¿Lo reemplazamos hoy? ¿Podemos reemplazarlo hoy en un santiamén? Cómo reemplazarlo hoy de un dos por tres?" Y concluía que "no existen condiciones" para materializar los cambios. "En tales circunstancias tenemos que aprovechar, como lo hemos estado haciendo, el aparato estatal en todo lo que es aprovechable en favor del cambio social."⁽³⁶⁾ Con esta actitud, la destrucción del Estado burgués y la construcción de uno nuevo, popular, se postergaba indefinidamente y el problema del poder seguía sin resolverse. Mientras la revolución no contara con la fuerza coactiva -es decir, con una superioridad político-militar- su poder era ilusorio. Para alcanzarlo se precisaba una ruptura para la cual no existía preparación ni política, ni ideológica ni militar.

La política de neutralización se revirtió, entonces, con

tra la propia UP. El aparato estatal burgués comenzó a actuar al margen y en contra del poder ejecutivo, levantando la bandera de la legalidad, pero pasándola a llevar en la práctica. En el parlamento los proyectos de ley o presupuesto enviados por el gobierno eran sistemáticamente rechazados o interminablemente tramitados, con lo cual se frenaban los cambios socioeconómicos. El poder judicial anulaba continuamente las acciones legales emprendidas por el gobierno contra los sediciosos o delinquentes económicos. Al respecto el PCCh denunció tendencias reformistas y demasiado permisivas al interior de la alianza gobernante que no consideraban necesario emprender todas las medidas que se pudieran dentro del marco de la ley. Pero tampoco el PCCh planteó jamás salirse de ese marco. Así la impunidad en que actuaba la oposición era casi total.

Por otra parte, el bloqueo a la acción económica del gobierno y la falta de un criterio único respecto a la política de alianzas al interior de la UP determinaron el alejamiento de la pequeña y mediana burguesía y de las capas medias. En muchos casos la pequeña y mediana propiedad no fue respetada con lo que se generaban inquietudes y temores en esos sectores -hábilmente explotados por la derecha- y se dificultaba la alianza obrero-campesina. Sin embargo, el factor principal para el paso de estos sectores a la oposición decidida fue el ideológico. En este punto se verificó una de las mayores debilidades del proceso. Al situar mecánicamente la posibilidad de la alianza fundamentalmente en las contradicciones económicas con el imperialismo y los monopolios, el PCCh y la UP en su conjunto menospreciaron la

fuerte predisposición ideológica proclive al sistema de estos sectores. No se emprendió ninguna acción sólida tendiente a modificar su conservador sistema valórico y la importancia de los medios de comunicación fue subestimada. Esto contribuyó sobremanera al aislamiento de la UP.

La ofensiva reaccionaria --orientada a lograr la intervención de las FF.AA.-- genera un *impasse* político que no puede ser ya resuelto por los cauces institucionales normales. El movimiento popular presiona en más de una ocasión al gobierno para que éste aplicase "mano dura" (particularmente frente al golpe de junio de 1973) visualizando que se preparaba la guerra contra él. El PCCh apoyaba este planteamiento, pero en realidad su orientación, tanto práctica como ideológica, le impedía cambiar de rumbos rápidamente. La estrategia de evitar el derrumbe de la revolución por las vías institucionales había ido demasiado al fondo y provenía de una forma de pensar profundamente arraigada en su dirigencia y militancia. Tanto es así que en el pleno de marzo de 1973 se plantea la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 1976 con un candidato que continuará la obra que Allende había iniciado.⁽³⁷⁾ Con visión mecánica se seguía confiando en la fortaleza del Estado chileno y sus instituciones "respetuosas" de la ley; se subestimaban abiertamente las capacidades del enemigo y se dejaba en evidencia un desconocimiento irresponsable acerca de las FF.AA. Se evidenciaba aquí también la falta de comprensión acerca de los alcances que tenía el proceso abierto en 1970 y, por lo tanto, de su desenlace más probable.

El hecho de que una alianza política con fuerte predominancia obrera y marxista llegara a ocupar el poder ejecutivo, alteraba la forma tradicional de hacer política y representaba de por sí la posibilidad de que se abriera una crisis nacional general.⁽³⁸⁾ Por este concepto, desarrollado por René Zavaleta, entendemos aquella coyuntura catastrófica de la sociedad en la que todos los sujetos aparecen desnudos de sus mediaciones y sólo cuentan en cuanto poseedores de fuerza material propia. Esta fuerza se mide en unidad y organización, en capacidad de alianzas, movilización de masas y poderío militar. El advenimiento de la crisis significa que el sistema de mediaciones que las clases han creado para relacionarse entre sí y para conducir la interacción entre la sociedad civil y el Estado se desmorona: "lo que aparece es la desnudez de las clases y no la mediatización de las clases (la crisis es la crisis de la mediación)...".⁽³⁹⁾

La crisis nacional general (CNG) es el proceso durante el cual todos los sectores sociales ponen en duda el conjunto de los sistemas de representación e interconexión que han usado hasta entonces (sindicatos, partidos, parlamento, aparato judicial, ideología, etcétera). Aparecen ahora, para las clases que los crearon, participaron y creyeron en ellos, como inútiles e ineficaces. El modo de organización social pierde legitimidad y los actores en pugna no creen ya en las argumentaciones de sus contendientes porque lo que les interesa de ellos es saber cuánta fuerza tienen y, por tanto, cuánta fuerza necesitan para derrotarlos.

Ahora bien, ¿por qué en Chile esta situación no llegó a desarrollarse en plenitud? Creemos que existió incapacidad de parte de la UP para dirigir los hechos políticos hacia el desarrollo de la CNG, preparándose para afrontarla y permitiendo que se produjera el derrumbamiento total de las creencias en el sistema vigente, abriendo, por lo tanto, un nuevo momento de interrelación hegemónica. (40)

Por el contrario, el gobierno de la UP hizo todo lo posible por mantenerse refugiado tras la institucionalidad. La carencia de una preparación adecuada para enfrentar su ruptura limitaba la capacidad de conducción del gobierno y de los partidos que lo conformaban. El PCCh, particularmente, pese a que pregona una política de mayor energía frente a la reacción, no supo imponerla ni impulsó tampoco, entre sus bases sociales, una actitud rupturista que obligara al gobierno a ir más lejos.

La burguesía por el contrario, perdió tempranamente su confianza en los métodos tradicionales de la política y orientaba la disputa por la hegemonía fuera del espacio institucional. La incapacidad de la UP de enfrentar a la reacción en ese terreno derivó en una crisis de hegemonía que terminó con la virtual ruptura de la coalición y el desbande de los sectores sociales que la respaldaban. En este contexto la consigna defensiva "No a la guerra civil" significaba evitar la batalla decisiva que aceleradamente preparaba la burguesía y que -de aceptarse el reto y prepararse para triunfar- habría facilitado el desmoronamiento de todo el sistema anterior y el comienzo de uno nuevo.

Pero veamos cuáles eran los elementos concretos que permitían afirmar que la posibilidad de desarrollar la CNG estaba planteada. Para ello compararemos dos coyunturas diferentes. La primera de ellas transcurre entre noviembre de 1970 (cuando asume Allende) y abril de 1971 (fecha en que la UP obtiene mayoría en las elecciones municipales).

En esta primera fase de gobierno observamos a la oposición desunida. El Partido Demócrata Cristiano no se decidía aún a lanzarse tras la aventura golpista que proponía el Partido Nacional y el recién nacido grupo fascista Patria y Libertad. Dentro del PDC existían sectores progresistas que pugaban entonces al interior del partido por una política de apoyo a las medidas nacionalistas del gobierno. Esto sin duda expresaba la posición de importantes sectores sociales. El PN, por otro lado, contaba con una base social estrecha, si consideramos la calidad de su apoyo. Tenía entre sus filas, aparte de los grandes propietarios, a desmembrados sectores campesinos atrasados, lumpen y fracciones de pequeños y medianos propietarios. En este momento la política golpista de la gran burguesía se encontraba, pues, aislada y sin aliados.

Las fuerzas revolucionarias, en cambio, atravesaban un período muy favorable gracias a los avances en las medidas económicas y a la unidad de sus representaciones políticas. La UP aparecía entonces como un bloque bastante homogéneo, lo que le daba mayor eficacia en su administración. La coalición se engrasaba con sectores desgajados del PDC que expresaban la simpa-

tía de las capas medias con el proceso. En otros casos estos sectores mantenían una actitud pasiva y expectante en espera de mejoramientos en sus condiciones económicas, tal como el programa de Allende lo había prometido. Recordemos que al respecto existía gran descontento pues los gobiernos recientes no habían sido capaces de mejorar la situación económica de amplias capas de la población que, sin embargo, tenían expectativas de ascenso. Las tibias reformas impulsadas por la administración de Frei no habían introducido ningún cambio estructural que modificara la atrasada distribución del ingreso que Chile mantenía hasta entonces. Por otro lado, el Gobierno Popular contaba con una sólida base social obrera organizada en la Central Unica de Trabajadores, CUT, es decir, bajo una dirección única, experimentada y mayoritariamente marxista.

En cuanto a las FF.AA., los sectores constitucionalistas mantenían fuertes posiciones en sus altos mandos y un amplio sector de ellas veía con buenos ojos las medidas de defensa de la soberanía y el patrimonio nacional que impulsaba el gobierno. Existía en su interior el consenso de mantener el respeto al régimen legalmente constituido, de tal modo que las tendencias golpistas sólo podían expresarse de manera marginal y clandestina.

De este modo, la coyuntura del primer semestre de Gobierno Popular fue claramente favorable. Tomar en ese momento una actitud ofensiva que aprovechara la eventual mayoría con que se contaba para destruir las bases del poder económico, político e ideológico de la temporalmente debilitada burguesía, podría ha-

ber contribuido decisivamente a acelerar el advenimiento de una CNG, la que entonces se habría enfrentado en condiciones de fuerza. Sin embargo ese camino no aparecía planteado en la medida en que la condición de neutralización del enemigo parecía confiarse y otorgar buenos resultados a las fuerzas populares.

Muy distinta es la situación de mayor descenso del proceso experimentada entre junio y septiembre de 1973.

Aquí la oposición ya actuaba unida desde hacía tiempo bajo la política golpista impulsada inicialmente por las fuerzas más derechistas. La Democracia Cristiana arrastraba a importantes sectores medios a la sedición. La oposición, unida en un bloque cada vez más compacto, convocaba a las FF.AA. a que repitieran la experiencia del 29 de junio. Con el fin de desbrozarles el camino, en agosto la Cámara de Diputados declaró inconstitucional al Gobierno de la República (resolución que era ilegal pues no le competía tomarla), intentando así legitimar el golpe definitivo.

La unidad del gobierno se encontraba totalmente quebrada. El Partido Socialista estaba dividido en varias posiciones. Un sector importante de él, junto a una fracción del MAPU, actuaban fuera del gobierno en una política que se coordinaba con los sectores de izquierda que no participaban en la UP -principalmente el MIR.⁽⁴¹⁾ El PCCh dejaba así de contar con la unidad de acción de su aliado fundamental dentro del gobierno. Los acuerdos en la cúpula ya no garantizaban la acción de las bases. El ejecutivo, inmerso en luchas intestinas, había perdido toda ini-

ciativa política. Los llamados "errores de izquierda" y "errores de derecha" dividían los bandos dentro de la UP. Mientras un sector de la izquierda tildaba al gobierno de legalista y reformista por su apego al sistema vigente, el PC y otros sectores de la UP (en los que, por cierto, se encontraba el presidente), trataban de evitar la toma indiscriminada de industrias pequeñas y medianas que estrechaban la convocatoria del gobierno hacia los sectores medios. Numerosos trabajadores de ese tipo de empresas -que se habían incorporado recientemente a la lucha política- no respondían a la organización ni dirección de la CUT y seguían la política de la autodenominada "izquierda revolucionaria".

En cuanto a la política económica, ésta había sido completamente paralizada a partir de los sabotajes iniciados por el imperialismo y la reacción interna (congelación de créditos externos, especulación con artículos de primera necesidad, desabastecimiento premeditado, etcétera). Esta situación creaba una imagen de caos que fue hábilmente utilizada por los medios de comunicación de masas -mayoritariamente en manos de la derecha- para enfrentar a los sectores medios contra la clase obrera, cada vez más aislada.

Dentro del ejército se produjeron cambios decisivos. Después del retiro de los militares del gabinete, en abril de 1973, los sectores golpistas fueron ganando posiciones hasta tomar la dirección del ejército. Lograron aislar al general Carlos Prats, entonces comandante en jefe, cuya actuación había sido factor clave en la mantención de las FF.AA. dentro del cauce

constitucional. Tras una odiosa provocación se vió obligado a renunciar y el mando recayó sobre Pinochet por tener la siguiente antigüedad. Este, desde su nuevo puesto, comienza a aplicar la Ley de Control de Armas con el fin no declarado de medir la capacidad logística y de resistencia militar de la clase obrera. Gran cantidad de industrias y locales sindicales fueron allanados en las principales ciudades del país, confiscándose un armamento escasefimo y preparando a los soldados para el enfrentamiento contra los trabajadores.

Así, en agosto, la iniciativa política estaba ya por completo en manos de los enemigos del movimiento popular. Este, después de comprobar la ineficacia del gobierno para responder con fuerza frente al "tancazo" del 29 de junio, se había batido en retirada. Ese día las masas (entre las que se incluían los militantes de todos los partidos de gobierno), después de pedir enardecidamente "pardon" para los golpistas y el cierre del Congreso Nacional sedicioso, habían escuchado a su presidente decir que ninguna medida de ese tipo iba a ser aplicada. Allí se había cerrado en realidad la última posibilidad que tenía el gobierno y la clase obrera de Chile de haber librado la lucha frontal que proponía la burguesía y de haberla inclinado a su favor. Por el contrario, la burguesía, desechando las mediaciones que ella misma había creado, y pasando por alto sus diferencias políticas internas, actuaba ahora unida como clase para mantener su dominación a cualquier costo, incluso el de arrasar con todo el sistema político vigente.

Así como el signo más claro de que la CNG comenzaba a expresarse, era que la propia burguesía había ya dejado de creer y tener confianza en las mediaciones, el signo más claro, a su vez, de que la crisis no logró desenvolverse era que, en el movimiento popular, apenas se comenzaba a experimentar este proceso. En el campo proletario el cuestionamiento de las mediaciones se observaba básicamente a partir de dos hechos. El primero era el surgimiento de gérmenes de poder popular, tales como los Cordones Industriales y los Comandos Comunales (formados después de la crisis de octubre del 72). Era un modo en que la clase obrera y los sectores más desposeídos se aprestaban a emprender nuevas formas de organización y de lucha para enfrentar a su enemigo, que aparecía crecientemente fuera del escenario tradicional de la política. El segundo hecho que expresa este inicial extrañamiento del "curso normal" de hacer política es la aparición y rápida popularización de consignas como las mencionadas más arriba (cerrar el Congreso, clausura de los periódicos que fomentaban la sedición, fusilamiento a los golpistas, formación de poder popular, etcétera que expresaban una creciente voluntad rupturista.

Todo el sistema comenzaba a ser puesto en tela de juicio en la medida en que su organización se revelaba ineficiente para expresar la nueva fuerza de las clases que pretendían democratizarlo.

Toda la experiencia del gobierno de la Unidad Popular es el intento de hacer que las instituciones estatales respondieran a los intereses populares, para los que no habían sido creadas.

Esta línea -que era la que sustentaba el PCCh- prevaleció hasta el último momento y fue la que impidió crear fuerza fuera del Estado capaz de decidir la lucha en circunstancias excepcionales aunque inevitables. En la medida que el adversario se salía del escenario normal, la crisis de las mediaciones sólo era posible resolverla fuera de los espacios tradicionales de la política, espacios en que las clases venían resolviendo sus pugnas de intereses hasta antes de 1973 y que ahora se revelaban estrechos y convencionales. Esto significaba la guerra civil, es decir, la confrontación abierta entre las clases en el terreno de la sociedad civil. La izquierda renuncia, sin embargo, a esta opción porque confiaba en la vigencia y efectividad de las mediaciones y porque, acorde con lo anterior, no se ocupó de desarrollar fuerza fuera del terreno tradicional.

La derecha, si bien estaba dispuesta a llevar las cosas a ese terreno, sabía que no era el único ni el mejor para ella. Resultaba más conveniente recurrir a la "zona de emergencia" del Estado burgués, el poder de las FF.AA., y era imprescindible acelerar esta intervención a fin de no dar tiempo a la izquierda a prepararse para salirse de las "reglas del juego".

El enfrentamiento final que hubiera llevado a presentarse en plenitud la CNG, la guerra civil, no llegó a producirse porque la izquierda obrera no supo prepararse a tiempo para él. En ese sentido se puede decir que la derecha se adelantó, utilizando su poderío militar, a la CNG que se vislumbraba inminente.

Con el golpe se hizo evidente que el Estado burgués chi-

leno, por adelantado que fuera, era autónomo sólo en forma relativa y que la democratización de su aparato tenía límites en los intereses de clase que lo habían formado. Su "ultimidad" de clase ya no permitía alojar en él a cualquier sujeto social. Era el momento en que "las cosas mismas querían pertenecer a alguien".⁽⁴²⁾ Esto, antes que el movimiento revolucionario, lo comprendieron sus enemigos, quienes buscaron resolver el problema del Estado y del poder desde el primer momento. El movimiento popular inmovilizado en lo económico, replegado en lo político y lo ideológico, fue derrotado fácilmente en el plano militar. En el heroico y solitario combate del presidente Allende, aquel martes fatídico en La Moneda, se simboliza también la impotencia de la mayoría desarmada incapaz de frenar la rabia de clase de sus enemigos.

A las pocas horas de iniciado el violento golpe militar y tras concluir que no existía ninguna posibilidad de una contraofensiva, la dirección del PCCh llamó a toda su militancia y al movimiento popular al reflujo, pasando este partido, una vez más, a la clandestinidad. Pinochet había elaborado un plan que contemplaba una batalla de varios días en Santiago, pero los aislados combates fueron acallados en menos de 48 horas. La tan discutida posibilidad del cambio de vía se convirtió en el paso de la vía pacífica a la derrota instantánea pues no existía la preparación práctica mínima -ni la concepción estratégica- necesaria para proyectarse a la lucha en el terreno militar.

El desamparo frente a la muerte marca la memoria de un pueblo y contribuye negativamente a definir los rasgos con que

va a enfrentar los próximos acontecimientos. El repliegue llevado a cabo sin presentar prácticamente ninguna defensa puede llegar a tener un costo moral demasiado grande. No está relacionado esto con el llamado "realismo político", pero sí con un sentimiento profundamente ético que anida en el sentido común de las masas que han luchado por algo. Después de haber estado a punto de conseguirlo todo, el asombro, el vacío, la pérdida de referentes que produce la soledad frente a la represión, parece retrasar la aparición de nuevas propuestas y, sobre todo, de un movimiento masivo de resistencia.

NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

- (1) Décimo Congreso del PCCh, citado por Kudachkin, Chile: la experiencia de la Lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias. Ed. Progreso. Moscú, 1978. p. 86.
- (2) En las elecciones municipales de 1947 el PCCh había obtenido 91 204 votos con el 16.5% del total (Kudachkin, op. cit., -- p. 42). En las primeras elecciones en las que participa al salir de la clandestinidad, las parlamentarias de 1961, obtiene 157 572 votos, bajando al 11.4% (Revista Principios -- # 129. Santiago, enero-febrero, 1969).
- (3) Programa del PCCh, aprobado por el XIV Congreso, en noviembre de 1969. Sociedad Impresora Horizonte. Santiago de Chile, 1972. p. 14.
- (4) Ibid., p. 22.
- (5) Ibid., p. 32. Este concepto está tomado de Lenin, El imperia lismo, fase superior del capitalismo.
- (6) Ibid., p. 33.
- (7) Durante estos años se produjo un brusco crecimiento de las - organizaciones campesinas: en 1964 existían 24 sindicatos rurales con un total de 1,658 miembros; en 1969 el número de -- sindicatos había crecido a 421 con 104 666 miembros (Sexto - mensaje del Presidente Frei, citado por Alan Angel en: Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. Ed. Era. México co, 1974. p. 266).
- (8) Programa del PCCh, op. cit., p. 40.
- (9) Ibid., p. 51.
- (10) El doctor Salvador Allende, fundador y dirigente del Partido Socialista, ya se había presentado a las elecciones presidenciales de 1952 con el apoyo del Frente del Pueblo (compuesto por el Partido Comunista y el Socialista), obteniendo el 5.5% de los votos (Luis Haira, Chile, autoritarismo, democracia y movimiento popular. Eds. del CIDE. México, -- 1984. p. 15).
- (11) En 1968 el 46% de los delegados al Sexto Congreso de la Central Unica de Trabajadores (CUT) era comunista y el 25% socialista (Alan Angel, op. cit., p. 94).

- (12) Esto se revela en el crecimiento electoral de la izquierda:

| AÑO | ELECCIONES | % |
|------|------------------|------|
| 1958 | (presidenciales) | 28.9 |
| 1961 | (parlamentarias) | 30.6 |
| 1964 | (presidenciales) | 38.6 |
| 1965 | (parlamentarias) | 27.0 |
| 1969 | (parlamentarias) | 38.9 |

FUENTE: Luis Maira, *op. cit.*, p. 15

- (13) Véase: Comisión Política del PCCh, "Convocatoria al Décimo Primer Congreso", en Revista *Principios* no. 49. Santiago, julio-agosto, 1958, p. 12, y Jorge Insunza, "Nuevos problemas tácticos" en *Revista Principios* #138. Santiago, marzo-abril, 1971, p. 18.
- (14) Luis Corvalán, "Acerca de la vía pacífica" en *Revista Principios* # 77. Santiago, enero, 1971, p. 13. El factor internacional, y concretamente el peso del sistema socialista mundial, era considerado decisivo en esta línea. En 1964 Corvalán escribía: "La historia demuestra que la correlación de fuerzas internacionales se modifica día tras día y ello más y más en favor de los pueblos y no del imperialismo. En todo sentido la perspectiva es que los procesos revolucionarios encuentren cada vez menos dificultades y que los gobiernos revolucionarios puedan desarrollar su acción en condiciones de tomar cada vez menos medidas coercitivas en contra de sus enemigos." (Corvalán, "Aseguremos el camino pacífico", en *Revista Principios* # 101. Santiago, mayo-junio, 1964, p. 124).
- (15) Corvalán, *op. cit.*, p. 10.
- (16) Ver: Comisión nacional de propaganda del PC Mexicano: "Documentos de las conferencias de los partidos comunistas y obreros celebradas en Moscú en 1957 y 1960". Ediciones del Comité Central. México, 1963.
- (17) Ver: Rodney Arismendi, *Lenín, la revolución y América Latina*. Ed. Grijalbo. México, 1976, p. 112.
- (18) Programa del PCCh, *op. cit.*, p. 16.
- (19) Este movimiento, encabezado por el general Roberto Viaux Ma rambio, planteaba reivindicaciones salariales y corporativas. Sin embargo el PCCh denunció su carácter reaccionario e hizo un llamado a un paro nacional. Algunas fuerzas de izquierda no respondieron con la misma energía argumentando que se trataba de un problema interburgués. Esta conducta política del PCCh revela la importancia que le daba a las formas democráticas del Estado.

- (20) Mientras en 1960 se produjeron un total de 257 huelgas (legales e ilegales) con participación de 88 mil huelguistas, en 1968 el número de huelgas había llegado a 1 124 y los huelguistas a 293 mil (Angel, *op. cit.*, p. 87). Por otra parte, este general Viaux es el mismo que, exactamente un año después, encabezara otro intento de golpe -apoyado esta vez por la CIA norteamericana, la Internacional Telephone and Telegraph (ITT) y políticos de extrema derecha- con el fin de impedir el acceso de Salvador Allende al poder ejecutivo. Esta intentona, que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, terminó por despejar dudas -si quedaban- acerca de la orientación del movimiento de 1969.
- (21) Luis Corvalán, "Informe al Décimo Cuarto Congreso del PCCh", en *Camino de victoria*. Sociedad Impresora Horizonte. Santiago de Chile, 1971.
- (22) Como es sabido Chile fue un país donde tuvo una muy eficiente aplicación la estrategia contrarrevolucionaria que el imperialismo norteamericano emprendió para enfrentar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Mientras la administración de Frei (1964-1970) fue un modelo de aplicación del proyecto de la Alianza para el Progreso, las Fuerzas Armadas chilenas sufrieron una intensa penetración ideológica.
- (23) Corvalán, "Informe al XIV Congreso", *op. cit.*, p. 317.
- (24) *Ibid.*, pp. 326 y 330.
- (25) Ver: René Zavaleta Mercado, "Notas sobre la democracia burguesa, la crisis nacional y la guerra civil en Chile", en *El golpe de Estado en Chile* (varios autores). Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1975. p. 72.
- (26) *Ibid.*, p. 68.
- (27) Entre otras podemos mencionar: el incremento de los salarios en un 35% a obreros y empleados; la fijación de precio a artículos de consumo popular; la reincorporación de despedidos a las empresas estatales; la creación de 30 mil plazas de empleo, etcétera.
- (28) La nueva potencia del sector estatal se basaba en la reciente expropiación o adquisición de acciones de múltiples empresas claves. El Estado llegó a ser propietario de la industria cuprifera, metalúrgica, carbonífera, salitrera, siderúrgica, del cemento, la electricidad, las textiles, los ferrocarriles, el transporte aéreo y la red de teléfonos y telégrafos (ver Kudachkin, *op. cit.*, pp. 181-183).

- (29) La Constitución de 1925, vigente, entonces, establecía un régimen presidencialista. Además Salvador Allende, con objeto de soslayar la oposición del parlamento, hizo uso de olvidadas leyes (decretadas durante la efímera República Socialista de Chile en 1932) que seguían vigentes y que le entregaban una serie de atribuciones al poder ejecutivo en el terreno económico.
- (30) Como expresión de las inmensas potencialidades económicas que tenía el proceso baste señalar que durante el primer año de gobierno el FNB tuvo un incremento del 8.5% y la producción industrial del 13% (Kudachkin, *op. cit.*, pp. 187 y 188).
- (31) La Contraloría era un organismo que revisaba los decretos del poder ejecutivo para constatar que se ajustaran a la Constitución. Si la Contraloría objetaba el decreto, éste no podía ser aplicado. La acción de este organismo fue de permanente obstrucción a la labor del gobierno (Susana Bruna, *Chile: la legalidad vencida*. Ed. Era. México, 1976 pp. 152-155).
- (32) La alianza con la derecha motivó la escisión del grupo que formaría la Izquierda Cristiana en 1971, partido que posteriormente ingresó a la Unidad Popular.
- (33) Véase Jorge Insunza, "La cuestión del poder: tarea de masas", en *Revista Principios* # 140. Santiago de Chile, septiembre de 1971, pp. 14-37.
- (34) Ver Insunza, *op. cit.*, y "Nuevos problemas tácticos", en *Revista Principios* # 138. Santiago de Chile, marzo-abril de 1971, pp. 14-25. Además, Orlando Millas, *La clase obrera en el Gobierno Popular*. (Cuaderno de propaganda no. 4). Imp. Horizonte, Santiago, 1972.
- (35) El gobierno debió enfrentar, además de la acción de los demás órganos del Estado, múltiples acciones opositoras y sediciosas. Entre ellas podemos mencionar: La conspiración del coronel Labbé, en enero de 1971; la del mayor Marshall y del general Canales, en marzo y septiembre del mismo año respectivamente; el paro de transporte en octubre de 1972, etcétera. Además la derecha se preparaba militarmente a ojos vista, lo que era posible apreciar por la acción abierta de grupos paramilitares en los mitines callejeros.
- (36) Entrevista a Luis Corvalán: "Combatir los rasgos reformistas dentro de la UP y el gobierno", *Revista Chile Hoy*. Año I, # 43, p. 28.
- (37) Ver Luis Corvalán, *Chile: 1970-1973*. Soffia-press, 1978, pp. 70-72 y entrevista, *op. cit.*, p. 7.

- (38) Este concepto se encuentra desarrollado por René Zavaleta en "Notas sobre...", *op. cit.*
- (39) Zavaleta, "Movimiento obrero", *op. cit.*, p. 4.
- (40) Este concepto se refiere a la segunda fase del "momento -- constitutivo" en la cual un sector de la sociedad convoca al resto a asumir un nuevo sistema de creencias. En su forma plena corresponde a la "reforma intelectual y moral". Ver Zavaleta, "El Estado en...", *op. cit.*
- (41) El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, se fundó en 1965 como alternativa a la "izquierda tradicional" o "reformista". Si bien nunca llegó a ser numéricamente significativo -excepto en uno o dos centros universitarios- simbolizó la oposición de "izquierda" al gobierno de Allende.
- (42) Zavaleta, "El estado en América Latina", *op. cit.*, p. 65.

CAPITULO SEGUNDO

**EL IMPACTO DE LA DERROTA Y LAS
TACTICAS CONTRA LA DICTADURA**

(1973-1980)

1. Caracterización general del período

El 11 de septiembre no sólo marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, sino de toda una etapa en la historia de Chile. Se terminó con el sistema de partidos que había sido la forma clásica del funcionamiento político durante los últimos 40 años. Así mismo, se dió un vuelco en las modalidades del desarrollo nacionalista y estatista de la economía.

Para el conjunto de la clase históricamente dominante, la institucionalidad democrático burguesa había devenido en un arma de doble filo. Incapaz de controlar el crecimiento de una fuerza izquierda obrera, los mecanismos normales de regulación de los intereses entre las clases ya no le servían. Por otro lado, el estancamiento económico que afectó al país en los años previos a 1970, había demostrado las limitaciones del modelo sustitutivo de importaciones, contribuyendo al surgimiento de una tendencia crítica en un sector de la burguesía que veía la causa de los males en la forma global del funcionamiento de la sociedad. Este sector había crecido y cobrado fuerza gracias a la creciente monopolización de la economía y al entrelazamiento del capital nacional con el extranjero. De este modo habían surgido las condiciones que facilitaban la aparición de un modelo de acumulación de nuevo tipo.

Fue esta fracción burguesa, monopólica y financiera, la que impulsó el derrocamiento del gobierno del presidente Allende y la que, más tarde, dirigió los destinos del país junto a la

cúpula militar en la que encontró apoyo. (1) El proceso político, social y económico que se abrió en Chile a partir de la instauración del gobierno pinochetista, es un proceso complejo cuyos alcances no pretendemos abordar con detalle en este trabajo. No obstante, intentaremos entregar algunos elementos que nos permitan comprender el contexto general de la etapa que nos ocupa.

La definición del modelo económico fue comparativamente temprana, en relación al proceso de institucionalización política. La fase inicial del período estuvo caracterizada por una serie de pugnas entre distintas fracciones de la burguesía, que buscaban el apoyo de los militares a sus respectivos proyectos económicos. Estas pugnas se fueron resolviendo a favor de la burguesía financiera que se fortaleció gracias a la reprivatización de muchas empresas estatales, especialmente las bancarias. Este sector surgía ahora mucho más fuerte, audaz, especulativo y "moderno" de lo que había sido hasta 1970. La fase inicial finaliza en marzo de 1975, cuando se anuncia la "política de shock".

La política de shock pretendía acentuar la concentración de capital. Por la vía de deprimir los salarios, se indujo a una crisis de realización: la brusca contracción de la demanda arruinaría a la mediana y pequeña burguesía, permitiendo así el traspaso de sus capitales al sector financiero. Este proceso se llevó a cabo mediante varios recursos. Uno de ellos fue la promulgación de una nueva legislación que permitía a la fracción financiera de la burguesía, monopolizar el crédito externo

y especular con las tasas de interés obteniendo así enormes ganancias. También contribuyó a esta concentración de capital la ya mencionada privatización creciente de las empresas estatales -muchas de ellas entregadas a precios irrisorios- a las que se agregarían más tarde varios servicios públicos (salud, previsión y enseñanza, básicamente).

El modelo económico que entró en vigencia a partir de la política de shock, estaba inspirado en la escuela neoliberal de la Universidad de Chicago, que contaba en Chile con varios representantes criollos. Estos tecnócratas que trabajaban para los grandes grupos financieros lograron impresionar a los militares con un programa muy preciso, aparentemente científico y alejado de toda "politiquería" del pasado. Alternando sus puestos de gerentes con los ministros, logran transformar profundamente el funcionamiento del capitalismo en Chile.

La primera característica que resalta del nuevo modelo es el repliegue del Estado de la actividad económica directa. Aparte de que, como hemos dicho, las empresas públicas pasaron a engrosar el patrimonio del sector privado, éste concentró también la mayor parte de la inversión que antes, en un 75%, era responsabilidad estatal. (2) La función reguladora del Estado disminuye y su lugar lo ocupa el "libre juego de mercado", en el cual se fijan precios y se asignan los recursos productivos (capital, trabajo y recursos naturales). Sin embargo, las altas tasas de explotación y la creciente concentración de capital -que impiden la consolidación de formas consensuales de domina-

ción y la formación de una alianza estable entre las fracciones burguesas, respectivamente-, imponen al Estado una función esencial: la coactiva. El uso de la fuerza es así consustancial al modelo.

Gracias a la ortodoxa aplicación de las políticas neoliberales que impulsa el equipo económico del régimen, la economía chilena sufre una redefinición de su inserción en la economía capitalista mundial. Las aduanas se abren, bajando sus aranceles, y se otorgan así toda clase de facilidades para el comercio exterior privado. Ello en función del concepto de las "ventajas comparativas", según el cual el país debe producir sólo aquello que es competitivo en el mercado internacional e importar lo que se produzca con menores costos en el extranjero. Esta política tiene dos consecuencias al mediano plazo. La primera es la desindustrialización del país al sucumbir las empresas que producían para el mercado interno y que subsistían gracias al proteccionismo prevaleciente hasta 1973. La segunda es el ascenso de la importancia relativa de las actividades económicas orientadas a la exportación, lo cual hace al país sumamente vulnerable a las oscilaciones del mercado internacional.

Asimismo, el modelo económico impulsado por los militares, propugna una apertura incondicional a las inversiones extranjeras. Se intenta atraerlas mediante una serie de facilidades,

muy superiores a las que se otorgan a las inversiones nacionales. Estas, por su parte, dependerán ahora en gran medida de los créditos externos, los que se convertirán en vitales para el sistema. Estos créditos, más que financiar inversiones productivas, solventaban el déficit de la balanza comercial y facilitaban las extendidas actividades financieras especulativas⁽³⁾. Dicho déficit estaba basado en la compra indiscriminada de artículos suntuarios para el consumo de los sectores altos y medios de la población.

Una tercera fase en el desarrollo del modelo económico, posterior a la aplicación de la "política de shock", se inicia -haciendo la advertencia de que se trata de un proceso más o menos prolongado- con el anuncio, en 1979, de las llamadas "siete modernizaciones". Se trataba de un conjunto de medidas que buscaban otorgarle al régimen mayor estabilidad política, así como reforzar las garantías y aumentar las ganancias de los clases de la oligarquía financiera. Para ello, el Estado se deshacía nuevamente de una serie de funciones sociales que, en manos privadas, serían más rentables. Por otro lado las modernizaciones perseguían garantizar una fuerza de trabajo atomizada y con menor capacidad de negociación. Más adelante volveremos a hablar sobre estas medidas.

En el plano político, el régimen tardó mucho más en proponer un proyecto definido, pues postergó largamente su fase "reactiva o destructiva". Ella se caracterizó por el uso indiscriminado de la represión -directa o indirecta- como único medio para

destruir las bases del anterior funcionamiento de la política. Los espacios en que las demandas civiles se encontraban con el Estado, fueron eliminados (proscripción de partidos, centrales obreras, colegios profesionales, etcétera). Una segunda fase "constructiva o fundacional" comienza a perfilarse en 1978. A partir de allí se intentan levantar los pilares de una sociedad de nuevo tipo, que permitieran institucionalizar y darle continuidad al proyecto de "democracia autoritaria".⁽⁴⁾ Por ésta se entiende un modelo político caracterizado por la permanente tutela de las Fuerzas Armadas y que limita la participación política, excluyendo a ciertos sectores y reduciendo drásticamente la capacidad de la sociedad civil para influir en la toma de decisiones.

La dificultad del régimen en convocar un consenso activo permitiría explicar por qué el proyecto político tiene -en contraposición con el económico- una definición más tardía. Por un lado, era necesario postergar lo más posible la fase reactiva con el fin de aniquilar cualquier resistencia de la sociedad civil. Por otro, existía un sector (líderado por Pinochet) que favorecía la continuidad perpetua del régimen de emergencia. Mediante éste, Pinochet había gobernado el país durante 7 años haciendo uso de facultades extraordinarias, dictando bandos militares y decretos-ley. La Constitución de 1925, vigente hasta 1973, de hecho ya no regía desde el pronunciamiento militar. De las antiguas instituciones sólo había quedado el vetusto e incondicional poder judicial.

Este régimen de emergencia se prestaba a las ambiciones personalistas de Pinochet para quien la institucionalización política aparecía ligada a una candelarización de su mandato. Y así efectivamente era. Había sectores en el bloque de poder (tanto dentro de las Fuerzas Armadas como del equipo económico de civiles) interesados en normar el paso a un futuro régimen "democrático autoritario". Las presiones por darle al sistema un funcionamiento político estable, que asegurara la alternancia en el gobierno y la continuidad del régimen, garantizando la contención del cualquier desborde social, llevan a Pinochet a presentar un proyecto de Constitución que fuera aprobado en septiembre de 1980, mediante plebiscito.

Podemos distinguir tres sub-fases del período reactivo, según el tipo de represión que se utilizó. El primer momento se caracteriza por el uso de un tipo de represión brutal y masiva, sin un plan central y definido como no fuera el de ultimar a las organizaciones sociales y políticas democráticas. Es la época de los grandes estadios repletos de presos; de los cadáveres en las calles y los ríos; del terror generalizado. Pero, la existencia de por lo menos 4 organismos de inteligencia, no sólo se tradujo, al poco tiempo, en un nivel menor de eficacia, sino también en la dispersión del poder represivo, lo que atentaba contra las aspiraciones personalistas de Pinochet. ⁽⁵⁾

Por ello, en junio de 1974, con la conformación de un organismo profesional y centralizado, que asume las labores de policía política, se abre la segunda sub-fase reactiva. La Direc

ción de Inteligencia Nacional (DINA), que respondía por sus acciones a Pinochet, comienza una etapa de represión más selectiva y de mayor eficacia en los golpes: ese año acaba con la dirección del MIR; al año siguiente asesta durísimos golpes al PS; y en 1976 captura primero a la dirección de las Juventudes Comunistas y luego, sucesivamente, a dos direcciones del PC. (6) Paralelamente, la DINA extiende su acción al exterior vigilando las actividades del exilio y atacando a personalidades claves: asesina al ex Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, en Argentina; al embajador de Allende en Estados Unidos, Orlando Letelier, que se encontraba justamente en Washington; y atenta contra la vida de Bernardo Leighton, destacado líder del ala progresista de la Democracia Cristiana que se encontraba exiliado en Italia.

El creciente desprestigio que generaron los métodos de este organismo, particularmente a nivel internacional; las objeciones al interior del propio régimen que se levantaban cuestionando su discrecionalidad y dudando de su eficiencia (pese a los golpes, las organizaciones políticas seguían existiendo), y las críticas de la Iglesia, crearon la necesidad política en el gobierno de remozar su nefasta imagen: en agosto de 1977 se reemplaza a la DINA por la Central Nacional de Informaciones, CNI.

Se abre así la tercera sub-fase del período reactivo con una serie de medidas "renovadoras": liberación de la casi totalidad de los presos políticos reconocidos, cierre de los campos de concentración, cese de las desapariciones de los detenidos y fin de medidas de terror masivo. (7) Todo esto, y no por ca-

sualidad, en vísperas de una nueva discusión en la ONU sobre los derechos humanos en Chile.

Bajo la apariencia de mayor legalidad, la CNI no es más que la continuación de su antecesora, a pesar de que introduce un cambio en las formas de represión.⁽⁸⁾ Ahora se orienta, más que al aniquilamiento total de las organizaciones políticas de izquierda, al control de la actividad opositora que ese año comenzaba a hacerse pública.

A pesar de que la CNI continuó existiendo y de que el gobierno siguió conservando un aspecto reactivo, a partir de 1978 comienzan a evidenciarse otros rasgos del régimen que permiten caracterizar un nuevo período que termina aproximadamente en 1981. Garretón denomina esta nueva etapa como "fundacional" ya que se define por la aparición de un proyecto político (crystalizado posteriormente en la Constitución de 1980) y de un paquete de medidas que tienden a normar la actividad social. Nos referimos a las "siete modernizaciones". Estas medidas estaban basadas en el principio de "subsidiariedad" del Estado, según el cual éste debe abandonar su rol protector o benefactor social, dejando esta función al libre arbitrio del mercado y la iniciativa individual.

Estas reformas se vieron facilitadas debido a que, después de la recesión y lenta recuperación económica que acompañó los cuatro primeros años de su gestión, el régimen al fin lograba legitimarse -en el terreno económico- frente a importantes seg

tores medios. Se vivía un momento de crecimiento y de amplia disponibilidad de crédito externo.

Las "modernizaciones" disponían la privatización de la salud, la educación y la previsión social, rompiendo con ello una vieja tradición estatista de la sociedad chilena y enviando a la cesantía a miles de personas. Otros importantes aspectos de la vida nacional también fueron tocados, tales como el sistema judicial, la administración pública y la "modernización agraria". En cuanto a las relaciones laborales, se instituyó una nueva reglamentación que atomizaba las posibles respuestas del movimiento sindical, que contemplaba la negociación individual entre obrero y patrón y en la que el Estado ya no constituía un sujeto de posible apelación. (9)

De este modo, las 7 medidas pretendían crear una nueva organicidad e ideología sociales que dificultara la colectivización y politización de las demandas civiles. Los que habían sido actores y protagonistas del sistema institucional anterior, tales como sindicatos y federaciones universitarias, quedaban ahora muy debilitados y sin referentes. El Estado, que había sido su principal interlocutor, se retiraba de los espacios de negociación, donde sólo regirían ya las leyes del mercado.

Esta nueva forma de anular la antigua fortaleza de los sujetos sociales, favorecía directamente a los monopolios privados de la oligarquía que se apoderaron de los recursos que anteriormente captaba el Estado. Los sectores de más bajos ingresos se vieron directamente perjudicados pues carecían de capacidad de ahorro para integrarse, por ejemplo, a las nuevas instituciones de previsión o salud que funcionaban ahora como bancos privados. No había ya ningún amparo bajo cuyo alero protegerse y muchos jubilados y pensionados quedaron sin gozar de ninguna prerrogativa. Se elitizó la enseñanza y los hospitales que quedaron bajo protección del Estado sufrieron serios recortes de presupuesto. La acción del equipo económico también estaba detrás de la política social.

La institucionalización política -el otro aspecto de la dimensión fundacional del régimen- se resolvió finalmente en 1980, como ya hemos señalado, con la aprobación de la nueva Constitución -promulgada en marzo de 1981- que hasta hoy rige el país. Esta pretende perpetuar un tipo de "democracia protegida o autoritaria" en que cualquier organización inspirada en la ideología marxista queda proscrita. (10)

En la nueva Carta, el ejecutivo goza de amplias atribuciones, contrastando con la antigua organización parlamentaria de la institucionalidad chilena. El Presidente de la República se rá elegido por elección directa cada 8 años y no podrá ser ree-

legido. Se establece asimismo el sistema bicameral en el Congreso legislativo que será elegido por votación directa, y se estatuye la formación del llamado "Consejo de Seguridad Nacional". Este organismo, presidido por el presidente e integrado por los comandantes en jefe de las FFAA y carabineros y por los presidentes del Senado y la Corte Suprema, tendría como función asesorar al ejecutivo en materias de seguridad nacional y/o hacer ver a éste su opinión sobre algún acto o materia que en su juicio, atente contra la institucionalidad (sic). Su acuerdo será imprescindible, por ejemplo, para llamar a retiro a los comandantes en jefe de las FFAA (nombrados directamente por el presidente). Por esta vía se pretende garantizar la participación del alto mando castrense en la conducción política del país, constituyéndose una especie de "cuarto poder".

Sin embargo, a través de las Disposiciones Transitorias contenidas en la misma Constitución, la vigencia plena de este modelo se pospone por un largo plazo. Allí se establecen los mecanismos que regirán el largo período de transición a la "democracia". En primer lugar, Pinochet se declaraba, en 1981, presidente constitucional hasta 1989, quedando con un enorme poder represivo discrecional, aunque ligeramente regulado por la Junta de Gobierno que cumple actualmente (y hasta las primeras elecciones directas), las funciones del poder legislativo. (11) En 1989, la Junta de Gobierno debe proponer un candidato a la presidencia de la República que será ratificado mediante plebiscito (de ser rechazado, Pinochet tendría que convocar, en 1990, a elecciones directas). El nuevo presidente de la República (con

mucha probabilidad Pinochet mismo) debería convocar a elecciones legislativas y, en 1997, a las primeras elecciones directas de presidente.

Con este conjunto de disposiciones se pretendió tranquilizar, tanto a los sectores que buscan la permanencia del régimen, como a aquellos que creen necesario dar paso a un sistema civil más estable. La Constitución es, pues, la forma en que Pinochet afirmó su dominio y libró las pugnas internas, cediendo ante sus adversarios pero conservando todos los elementos que le permitieran asegurar su mandato hasta el fin de su vida. El hecho de que el texto final difiera considerablemente de los que elaboraron los organismos que el propio dictador designó para su redacción (la "Comisión Ortúzar" y el Consejo de Estado), sobre todo en lo que se refiere a los plazos, evidencia el dominio prácticamente sin contrapeso que logró Pinochet y el grupo de civiles que desde el comando económico lo apoyaba.

Para la oposición, la promulgación de la Constitución significaba también un hito de máxima importancia pues era la dramática comprobación de su impotencia. De continuar las cosas como iban, el régimen se eternizaría en el poder. Se avivaron los llamados unitarios y el grado de movilización alcanzó un nivel hasta entonces no visto. Diarias manifestaciones se organizaron en Santiago y otras ciudades y, si bien la Democracia Cristiana aparecía con mayor cobertura legal para convocar a reuniones públicas, la izquierda salía a la luz brindando una base social más numerosa y aparentemente mejor organizada. (12)

Para entonces el modelo económico parecía tener éxito. Después de la depresión y de una lenta recuperación que había comenzado en 1977, en 1980 la economía experimentaba un momento de auge. Ocultando sus debilidades estructurales (dependencia del comercio y financiamiento externos, fuerte especulación financiera, desindustrialización y caída del mercado interno) y su enorme costo social (altas tasas de desempleo, redistribución regresiva del ingreso, centralización del capital),⁽¹³⁾ el modelo lograba imponerse. La alta tasa de explotación, garantizada por la depresión del salario, lograba concitar cierto consenso entre diversas capas de la burguesía que, por sobre sus diferencias políticas, se veían favorecidas en lo económico. Las capas medias, bajo el hechizo de la mercancía extranjera, veían —quizás por vez primera en Chile— satisfechas sus demandas consumistas.

De este modo, después de 7 años de dictadura militar, la sociedad chilena estaba totalmente cambiada y, de un modo u otro, ya nadie quería volver atrás. Tampoco la clase obrera ni los sectores populares que apoyaron a Allende querían seguir manteniendo su visión de las cosas. Mucho, si no todo, se encontraba transformado y se hacía necesario recoger ese cambio; para negarlo se le debía reconocer.

2. El PCCh y su evaluación de la derrota

El golpe militar también pone fin a toda una época en el PCCh. La profundidad de la derrota cuestiona, por primera vez en la historia de dicho partido, la complaciente visión de sí mismo

que en el conjunto de su militancia -pero sobre todo en su dirigencia- prevalecía. La "correcta línea" y la "infallibilidad en la acción" quedaban ahora en abierto entredicho.

Efectivamente la elaboración política y la práctica que de ella se derivaba habían conseguido grandes triunfos para el PCCh durante la historia institucional anterior. Participando dentro del sistema había logrado crecer y consolidar cierta estabilidad electoral que le otorgaba capacidad de influencia en los asuntos del Estado.⁽¹⁴⁾ Pero aún más importante era su presencia en el movimiento obrero organizado. Ahí colaboró a ganar importantes batallas corporativas y a crear una férrea conciencia de la necesidad de cambios en un sentido socialista. Su gran ductibilidad táctica le permitió ir ganando más y más adeptos.⁽¹⁵⁾ Hasta entonces, en realidad, la historia parecía comprobar la corrección de su acción política. 1973 representaba ahora la primera gran derrota sufrida por el PCCh.⁽¹⁶⁾ Al buscar sus causas era inevitable mirarse a sí mismo. Pero a la vez era necesario salvaguardar la unidad del partido, levantada como un patrimonio que garantiza eficiencia y como un don casi exclusivo en el panorama de la izquierda.

Se inicia así una discusión interna que revisa paso a paso el camino seguido hasta entonces. De allí emanó un conjunto de autocríticas, algunas de ellas muy profundas. Si bien no se cuestionaba el grueso del proyecto histórico (tal como lo hemos esbozado en el primer capítulo), se criticaron algunas de las tácticas empleadas por el gobierno de la Unidad Popular; se señ

laron las carencias en la política interna del partido, y se re
visó la concepción del Estado y de la revolución.

En una primera etapa observamos dos actitudes o tendencias, al interior del PCCh, para enfrentar el balance del gobierno de la U.P. No se trata de tendencias propiamente tales en la medida en que no son corrientes de opinión organizadas o fracciones dentro del partido, sino de ópticas distintas para mirar el pasa
do y analizar el presente. No hubo en aquel entonces, ni después, a pesar de la intensa sacudida, ninguna posición, influyen
te al menos, que cuestionara la madurez y validez histórica del partido y que pudiera conducir al fraccionamiento o a la divi
sión orgánica.

La primera de las dos actitudes que hemos mencionado, si bien admitía errores propios, pensaba que la responsabilidad fun
damental de la derrota descansaba en la posición, por un lado del
imperialismo y por otro de la "ultraizquierda".⁽¹⁷⁾ Postu-
laba una postergación de la crítica profunda del gobierno de la Unidad Popular, con el fin de no agudizar las diferencias
existen tes entre los partidos de izquierda y entre éstos y la DC. Creía equivocadamente que el gobierno militar tenía una existen
cia transitoria y que su permanencia se debía, fundamentalmente, a la dispersión de las fuerzas democráticas. Proponía una rápi
da reactivación de la vida política con el fin de "agudizar el aislamiento
de la dictadura" y provocar su caída.⁽¹⁸⁾

Esta actitud para evaluar los hechos descansaba en una vie
ja forma practicista de hacer y entender la política, propia del

PC chileno. Basado en la sobrevaloración de la actividad práctico-política, como fuente de conocimiento y en la subvaloración del potencial político de la reflexión teórica, el practi- cismo evitaba la confrontación crítica con el pasado y confiaba en fórmulas simplistas para analizar el presente. (19)

El practicismo constituye una forma de conocimiento empí- rico -práctico político-, muy útil para enfrentar determina- das tareas, pero limitado en su profundidad y alcance por prove- nir de la experiencia inmediata. No se trata de la carencia completa de teoría, sino de que ésta ha sufrido un proceso de simplificación y rigidización producto de postergar su desarro- llo en aras de priorizar la actividad práctico-realizadora. De esta manera, el "método del ensayo y el error" se vuelve una forma de conocimiento de primer orden.

El practicismo en el PC chileno tiene varias probables causas. Una de ellas es que se trata de un partido eminentemen- te obrero, tanto por su origen como por su composición social. La escasa formación "académica" de la clase obrera en un país subdesarrollado y cierto desprecio hacia ese tipo de acti- vidad, conduce a generar un tipo de militante experto en reali- zar tareas concretas, pero carente de una visión de conjunto que oriente su acción. En este sentido, el PC chileno es, sin duda, un partido con una enorme capacidad práctica de realiza- ción, superior a la de otros partidos de la izquierda menos disciplinados.

Otra causa posible de este problema es que el conocimiento

práctico-político acumulado históricamente por el PC le permitió, efectivamente, durante 50 años, obtener resultados satisfactorios, tales como la consolidación de su arraigo de masas y el crecimiento de su influencia política. De este modo se reforzaba una línea de trabajo que no se hallaba cuestionada aún por el fracaso en la obtención de resultados. Por eso es que, en la autocrítica posterior a 1973, el propio PC mencionará al practicismo como un problema negativo relevante. Porque ahora, que había conducido a obviar ciertos elementos que se mostraron necesarios para haber contribuido a evitar la derrota, el practicismo se había convertido ya en un problema *prácticamente* relevante y por ello digno de ser revisado.

Sin embargo, la plena superación de este rasgo no sería algo simple para el PC. Su funcionamiento orgánico tiende a fortalecer, en muchos sentidos, una determinada vinculación práctico-política con la realidad. La promoción interna de militantes suele realizarse sobre la base de criterios que priorizan las necesidades orgánicas de corto plazo y que ponen en primer lugar la capacidad o talento práctico-político de los cuadros, en desmedro de su formación teórico-política. Esta última, por ser una actividad de largo plazo que no conduce a resultados prácticos inmediatos, no constituye una ocupación de primer orden en la acción partidaria organizada.

El conocimiento teórico-político comprende una relación dialéctica entre la práctica y la labor intelectual-teórica que tiende a formar una mentalidad crítica, creadora, y por ende,

también altamente realizadora. Es un conocimiento que va constantemente de lo práctico a lo teórico y viceversa y que por lo tanto alcanza mayor profundidad en el análisis y, sobre todo a largo plazo, mayor precisión en los resultados. El conocimiento teórico-político es pues resultado de una doble acción complementaria que permite diagnosticar, predecir y medir resultados con un alcance y profundidad mucho mayores. Algunos de los elementos que el propio PC señala como errores de su política, se originaron precisamente porque estaban fuera del alcance comprensivo de un conocimiento de tipo práctico-político. Entre otros podemos mencionar, por ejemplo, las "insuficiencias" en la política militar o en la comprensión del problema del poder. Ambos aspectos no se revelaban como esenciales para el PC porque no aparecieron en la contingencia inmediata de la situación nacional, sino cuando ya "era demasiado tarde".

El practicismo es, pues, una actitud que se expresó durante los primeros años después del golpe militar y que contribuyó a una asimilación bastante lenta de las nuevas condiciones políticas del país y de las "adecuaciones tácticas" que ellas hacían necesarias.

La segunda actitud que observamos a lo largo de la etapa estudiada alcanza mayor profundidad reconociendo que los errores propios fueron serios y que de su plena superación dependerá la capacidad de dirección que el partido pueda tener en los hechos futuros. Sin temor a escarbar en el pasado, y con una actitud más crítica, ofrece un diagnóstico más realista de la nueva

situación política. Poco a poco esta actitud o "tendencia" se va abriendo paso a medida que transcurre el tiempo y la dictadura se va consolidando. Entonces ya no es posible eludir la auto crítica ni afirmar la transitoriedad del régimen.

La síntesis de estas "tendencias" se consigue en agosto de 1977 cuando se realiza, en el exilio, el primer Pleno del Comité Central desde 1973. (20) La resolución es híbrida pues si bien recoge la amplia autocritica que se había realizado a lo largo de cuatro años, trata de hacerlo sin romper con la línea anterior e incluso rescatando muchos de sus aspectos. Tal es el caso, por ejemplo, de la consigna de "No a la guerra civil", le vantada a mediados de 1973, que fue respaldada a posteriori como correcta por la mayoría de la Dirección. (21) Es probable que la presencia de Corvalán en el Pleno haya jugado un papel de ca- talizador asegurando de este modo la unidad del partido.

El Pleno de 1977, al analizar los errores cometidos, hace énfasis en el problema del poder. Se señala que el partido no supo conducir el proceso revolucionario resolviendo el tránsito de la conquista del gobierno a la conquista plena del poder. Esto último debía ser resultado de un proceso que destruyera el viejo aparato estatal y creara uno nuevo, fruto y expresión de los avances de las luchas populares. La insuficiencia para re- solver este tránsito es atribuida a que no se logró crear y man- tener una correlación de fuerzas favorable a la revolución y alu de a un conjunto complejo de factores causales.

Por correlación de fuerzas se entiende un concepto más ri-

co y complejo que el de "mayoría" y "comprende la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización, la homogeneidad de pensamiento de la coalición y, obviamente, de manera relevante, el componente militar". (22) A partir de este eje el Pleno de 1977 menciona una serie de factores causales que a continuación vamos a exponer.

Uno de los factores principales que impidieron la mantención y desarrollo de una correlación de fuerzas favorable fue, precisamente, la determinada manera en que el PCCh enfocaba la interrelación entre lo político y lo militar, si entendemos por ella el núcleo del problema del poder. En el Pleno de 1977 y en general en los documentos oficiales se alude a esta cuestión como a la "carencia" de una política militar. A ella, algunos dirigentes comunistas le llamaron más tarde "el vacío histórico de nuestra línea política". Sin embargo, esta "carencia" afectaba la línea política en su conjunto y expresaba, más que una ausencia, una determinada forma de enfocar el problema político-militar en la cual este último factor de la unidad (el militar), pretendía ser eliminado de la confrontación por la hegemonía social. En ello precisamente consistía la originalidad de la "vía chilena".

La carencia de una política militar correcta no era más que el resultado de una visión que intentaba evitar o minimizar la fase en que las clases se "desnudan", entendida como la etapa conclusiva de la crisis nacional general. En realidad, cuando se minimizaba el factor militar, lo que se hacía era integrarlo

a la línea política pero de un modo subordinado. Pretender que fuera un vacío o que nunca hubiera estado presente es una forma autocomplaciente de mistificar la historia.

En su especificidad, la cuestión militar se expresaba, en primer lugar, en la falta de trabajo organizado hacia el interior de las FFAA. Subestimando el proceso político que se venía desarrollando al interior de los institutos armados -nos referimos a su creciente derechización y adscripción a la doctrina de seguridad nacional impulsada por el Pentágono- el PCCh no realizó ningún esfuerzo serio por acercarse a un sector de ellos hacia el proceso revolucionario, como tampoco por lograr información confiable de lo que ocurría en su interior. Simplemente se esperaba que se mantendrían dentro de la legalidad, que serían neutrales. En relación a esto es que los comunistas chilenos dicen que valoraron en alto grado las circunstancias nacionales del proceso, descuidando "las leyes generales de la revolución". Es evidente que la valoración nacional es altamente positiva y que constituye el eje básico sobre el cual se puede construir cualquier política viable. Sin embargo, la relación de lo nacional con lo general, es decir, con la síntesis histórica-teórica de los procesos revolucionarios mundiales, no constituye un nexo contrapuesto sino complementario.

Efectivamente, el desarrollo nacional de los acontecimientos expresaba un alto grado de democracia en la conformación estatal chilena, lo que hacía suponer que las FFAA no romperían con la Constitución.⁽²³⁾ Guiado más por la experiencia concre

ta que por los axiomas de la teoría, el PCCh subestimaba el aspecto de "regularidad histórica" de las FFAA que las hace ser órganos propios de un Estado que defiende una "ultimidad" de clase determinada. Sin embargo, antes que el PCCh, la burguesía chilena en su conjunto entendía que la "ultimidad" de clase del Estado -y por lo tanto de las FFAA- le pertenecía. La confianza absoluta en las particularidades nacionales del proceso no dejaron abierta la posibilidad a la previsión o a la duda: el PCCh no organizó nunca una labor de inteligencia dentro de los institutos armados.

En segundo lugar, la "cuestión militar" se expresaba en la carencia de una política eficiente de auto defensa del proceso revolucionario. Esto tanto en relación a la formación de una fuerza militar especializada como a la preparación del conjunto del partido para que, vinculado a las masas, fuera capaz de emprender la defensa de las conquistas revolucionarias. Ambas tareas fueron abordadas de modo absolutamente insuficiente y en ningún caso acorde con la posibilidad, que el propio partido avizoraba, de que estallase una guerra civil. Finalmente, lo más importante, es que la necesidad de la defensa del proceso revolucionario, no fue agitada ni convertida en política de masas, pese a que ellas mismas señalaban la existencia del problema.

Las conquistas, logradas con el esfuerzo de años de un gran movimiento histórico, estaban amenazadas de muerte por la oposición reaccionaria y, sin embargo, las fuerzas populares no

elaboraron una respuesta acorde al nivel de agudización del conflito de clases al que ellas mismas habían conducido. Final--mente, el poder ejecutivo, reducido y aislado por la máquina burocrática de los otros poderes del Estado, desafiado por la existencia de bandas paramilitares reaccionarias y sin una propuesta sólida de defensa hacia sus propias bases sociales, era el último bastión de una voluntad popular combativa pero impoten--te.

Otro de los factores que impidieron la mantención de una correlación de fuerzas favorable y, por lo tanto, la resolución correcta del "problema del poder", fue el hecho de que no se agitara entre las masas la necesidad de emprender cambios estructu--rales en el aparato estatal. Ni siquiera el propio partido, se reconoce, poseía un programa definido al respecto.

Pero la conducta política que tal vez más contribuyó al de--terioro de la correlación de fuerzas, fue la imposibilidad con que el gobierno permitía la organización de la contrarrevolución. A pesar de que el propio PCCh planteó en su momento esta crítica hacia las "tendencias reformistas en el seno de la UF", el ba--lance posterior señala que fue incapaz de hacer una proposición práctica a las organizaciones sociales donde actuaba, con el fin de aplicar su consigna de "mano dura con el enemigo". En cuanto a su propia militancia se limitó a preparar algunos cua--dros que pudieran proteger las manifestaciones callejeras de las embestidas fascistoides de "Patria y Libertad".

Las fuerzas derechistas, señala el Pleno, gozaron de am--

plia libertad para crear las condiciones políticas, económicas e ideológicas de la contrarrevolución. Ni siquiera los mecanismos legales vigentes fueron aplicados plenamente para evitarlo. Ello no sólo entregó una gran iniciativa política a los golpistas, sino que también desmoralizó a las propias filas populares que se veían progresivamente indefensas. La democracia y la libertad, concluye el Pleno, no son valores abstractos; se debe luchar por la libertad para el pueblo y negársela a quienes atenten contra ella.

En este punto es necesario recordar que el PCCh levantó históricamente las banderas de la democracia, de su ampliación y extensión hacia el conjunto del pueblo. Su política de plena participación en la institucionalidad había conseguido ostensibles conquistas al respecto, tales como la reforma electoral de 1959 y la elaboración de diversas legislaciones favorables a los trabajadores. Entre otras, Chile contaba entonces con previsión y salud social; con un sistema de enseñanza elevado y masificado en relación a otros países de la región. La progresiva ampliación de la democracia -vía impulsar combativos movimientos de masas- había demostrado ser el camino justo para el crecimiento de la influencia del partido en la sociedad.

Sin embargo, el contexto de un proceso revolucionario que había comenzado a llevar a cabo profundas transformaciones es--
tructurales, para acelerar la ampliación de la democracia era necesario modificar el marco del derecho y cuestionar -en la ideología y en los hechos- la legitimidad social de la activi-

dad antidemocrática que emprendían las fuerzas reaccionarias. Estas debían ser desesmascaradas y limitadas en su acción por la vía de la reforma legal o por la vía de la acción directa de las masas. Crear un nuevo derecho de facto que permitiera, al menos, repartir los privilegios con que sólo contaba la reacción, era una necesidad apremiante. El pueblo debía tener mayor acceso a los medios de comunicación de masas; a limitar la campaña de terror emprendida por El Mercurio y otros periódicos; a encarcelar a los acaparadores de alimentos (porque el pueblo también tenía derecho a comer); en síntesis, el pueblo tenía derecho a ampliar su espacio de poder en el Estado y en la sociedad civil como único camino para profundizar la democracia dándole un sentido nacional y popular.

La relación entre el problema de la democracia y las clases sociales, no fue, pues, resuelto correctamente. El bloque dominante de la burguesía, interesado tendenciosamente en la democracia (sólo mientras no hiciera peligrar su ultimidad de clase), usó una serie de mecanismos para socavar el Estado de derecho. Ampliar la democracia en esas condiciones hubiera significado llevar a cabo, entre otras medidas, la limitación de la capacidad contrarrevolucionaria de la reacción.

Otro de los factores causales que se destacan en el Pleno de 1977 es la insuficiencia que demostró el partido en su capacidad de dirección política cuando los acontecimientos evidenciaban una creciente pérdida de los sectores populares en la correlación de fuerzas a nivel nacional. Para explicar esta carencia

se identifican a su vez tres causas fundamentales. En primer lugar se hace referencia a la falta de desarrollo teórico existente en el conjunto de la estructura partidaria, lo que la incapacitaba para medir el desarrollo y las consecuencias de la línea política. Alejandro Yáñez, miembro del Comité Central del PCCh, señala al respecto que a medida que la situación se deterioraba, se acentuaba al interior del partido el practicismo que lo disperaba en miles de pequeñas tareas. (24)

En segundo lugar se afirma que el partido no se apoyó su ficientemente en la acción de masas -en la medida que los acontecimientos lo exigían- privilegiando, en cambio, el acuerdo dentro de la UP y el Gobierno. Es claro en este sentido que el PCCh impulsaba una línea de acción unitaria dentro de la coalición y que priorizaba el consenso entre los partidos de la UP antes que la aplicación, con mayor grado de autonomía, de su propia línea. No se usó mayormente la fuerza propia -una gran masa militante y simpatizante que respaldaba la política del PCCh- para presionar hacia la UP y el gobierno cuando existían desacuerdos. Con ello se caía, por un lado, en una suerte de paternalismo hacia las masas y, por otro, en una falta de independencia en relación a las demás organizaciones políticas. Cuando un partido que se dice vanguardia del pueblo (y que además cuenta con un importante peso real en él) titubea al aplicar su política, enredado más en discusiones cupulares que en impulsar su propia acción, puede perder legitimidad incluso frente a sus propios representados. De hecho ello ocurrió y muchos

militantes comunistas se preguntaban cuándo, de cara a las bases sociales propias, se impulsaría una política más demostrativa de la fuerza que se poseía. Es probable que ésta no hubiera sido suficiente para cambiar drásticamente la evolución de los hechos, pero es indudable que dicha fuerza era importante, influyente y, sobre todo, activa.

La tercera causa que se menciona en cuanto a la insuficiente capacidad de dirección política, es la deficiencia en el trabajo ideológico hacia otros sectores sociales. Esto contribuyó enormemente a minar el inicial apoyo de las capas medias, las que finalmente se inclinaron hacia las fuerzas golpistas. En aquel entonces no se calibraba suficientemente la importancia de los medios de comunicación y las tareas que se emprendieron al respecto fueron poco entusiastas, y sobre todo ineficientes frente al inmenso aparato ideológico que desplegaba la reacción.

Pero el problema de la dirección política no se agota allí. La mayor enseñanza que extrae el PCCh al respecto es la necesidad de una dirección única, no necesariamente unipartidaria, pero sí centralizada y coordinada. La inexistencia de este factor (sobre todo a partir de 1972, cuando la crisis al interior de la coalición ya es evidente) producía que muchas acciones se anularan unas con otras creando dispersión de fuerzas y confusión. Tal es el caso, por ejemplo, de la política hacia la mediana burguesía. El PCCh impulsaba una reforma económica que respetara la pequeña y mediana propiedad. Como hemos seña-

lado antes, este punto fue una de las mayores controversias dentro de la UP. Algunas corrientes, argumentando el carácter socialista inminente del proceso, procedían a expropiar o intervenir industrias o predios agrícolas que afectaban a los sectores medios de la población. Declaraciones iban y venían. Desmentidos y deslindamientos de responsabilidades sólo provocaban confusión, facilitando el alejamiento de los sectores afectados. Muchas veces el propio ejecutivo, aun sin estar de acuerdo, se veía obligado a declarar intervenidas pequeñas fábricas que habían sido tomadas por sus trabajadores. Era evidente que el gobierno no podía reprimirlos y optaba por la vía del convecimiento. Allí discutían, en el seno mismo de las organizaciones sociales, las dos posiciones que había en la UP.

Para este tipo de situaciones el PCCh señala la falta de dirección única como un factor determinante en la pérdida de la iniciativa política que dificultaba golpear al enemigo principal y facilitaba su acción.

Finalmente, como otro factor causal, se menciona la insuficiente política de alianzas hacia los sectores medios. "La correlación de fuerzas debe ser vista -dice un miembro de la comisión política del Comité Central-, como el balance entre las fuerzas de que dispone uno y otro de los dos polos de la contradicción principal (...) Precisamente (por ello) es que en su conformación ejerce una influencia que puede ser decisiva el comportamiento de las capas intermedias, presentes en toda formación social y que oscilan entre el polo de la revolución y el de

la contrarrevolución." (25) De este modo, en el balance que se hace del período 1970-1973, el PCCh fortalece la idea de lograr una amplia alianza de clases que permita darle estabilidad a los cambios revolucionarios.

Así, el complejo problema de lograr una correlación de fuerzas favorable, concitando el apoyo de las capas medias, impidiendo la acción del enemigo principal y apoyando una activa movilización de masas, constituye un nudo problemático alrededor del cual el PCCh elabora un balance de la derrota. En éste se ratifican algunos aspectos de su línea política anterior y otros se señalan como ausentes. El proyecto estratégico (tal como lo esbozamos en el capítulo I) se ve ahora afectado por la preponderancia que adquiere el plano político sobre el económico. Las modificaciones en el Estado y en las instancias formadoras de consenso se vuelven ahora una necesidad prioritaria. En este sentido hay una revalorización de la tesis leninista de que el problema central de toda revolución es el problema del poder. El viejo programa de revolución antiimperialista, antioligárquica y agraria aludía a transformaciones económicas propias del desarrollo de un tipo de capitalismo nacional que estaba ausente por haber faltado la revolución burguesa al modo clásico.

Ahora la terminología ha cambiado: se habla de "revolución democrático popular" o simplemente de "revolución popular". Pero este no es un cambio meramente formal. Responde a una evolución que en gran medida comprende a todas las fuer

zas políticas marxistas latinoamericanas. Se trata de impulsar un proyecto decididamente popular, con vista al socialismo, que ponga en primer lugar el problema del poder, o sea, el problema del Estado y del consenso.

La autocrítica toca así -en algunos casos con mayor o menor profundidad- los problemas centrales de la táctica, de la fuerza, de la capacidad de dirección y desarrollo teórico del partido.

La maduración y las modificaciones que experimenta a partir de la autocrítica el proyecto a largo plazo del PCCh, podrían significar -si se manifiesta una fuerte voluntad de cambio en su interior- una revalorización de su quehacer político en conjunto, incluidas las formas de funcionamiento del propio partido. Ello podría revisar el problema del practicismo como forma de vinculación con la realidad; la valorización de la labor ideológica-crítica y por ende la relación del partido con los intelectuales; la preocupación permanente por el problema de la fuerza en la política, incluido, claro, el factor militar; la democracia interna; la iniciativa y autonomía de las distintas instancias partidarias; la comprensión del problema cultural más allá de la mera actividad agitativa y su ampliación hacia las preocupaciones cotidianas que en la vida moderna exigen una respuesta.

Precisamente, una fuerza con voluntad hegemónica, de dirección, debe tener una aspiración totalizante en el sentido de alentar propuestas positivas en todos los ámbitos de la sociedad.

Una actitud renovadora y ofensiva que no tema la modificación de todos los aspectos de la sociedad, debe estar en la base de un proyecto humano liberador.

3. El PCCh y su caracterización del régimen

La caracterización que el PCCh hace del régimen militar, en sus aspectos político y económico, tiene importancia ya que de ella se deducen las propuestas de acción que elabora, especialmente en lo que se refiere a la política de alianzas.

Un mes después del golpe de 1973 el PCCh emite su primera declaración. En ella se expresa que la dictadura "trabaja como un apéndice fascista al servicio del imperialismo y de la reacción interna".⁽²⁶⁾ Posteriormente, en 1974, se afirma que el proyecto de la Junta militar responde a "un modelo económico que transforma a Chile en un país de alta concentración monopolista, de bajos salarios y de super explotación de la clase obrera, abierto al capital extranjero".⁽²⁷⁾ Esta caracterización inicial prevalece en el posterior análisis que realiza el partido. La definición más conocida es, sin duda, la de Corvalán en 1977: "Este régimen no es simplemente otra forma de la dictadura de la burguesía, sino la dictadura terrorista del grupo más reaccionario del capital financiero. Y esto es fascismo."⁽²⁸⁾

La caracterización de este tipo de regímenes despertó polémicas a principios de los años setenta. Los nuevos gobiernos

en Uruguay, Chile y Argentina tenían el rasgo común de estar basados en la ideología de la seguridad nacional, importada de los Estados Unidos. Esta característica llegó a ser la base de una definición consensual entre los distintos autores dedicados al tema, a pesar de que no daba cuenta del carácter de clase de los nuevos sistemas. La caracterización de fascistas, mientras apuntaba a la esencia clasista de los nuevos gobiernos, no era tampoco precisa entre otras cosas porque no señalaba el hecho de que era el ejército el sujeto principal del proceso de cambio.

De este modo, la ya clásica definición de "fascismo" en el pensamiento marxista, debía ser precisada en el marco de las particularidades nacionales. Los nuevos procesos no presentaban dos rasgos consustanciales al fascismo europeo: el nacionalismo y el apoyo masivo y organizado.

La asociación del capital financiero con el capital monopolístico imperialista, hace imposible impulsar ningún tipo de desarrollo nacional. El imperialismo ha pasado a ser, se afirma, un rasgo crecientemente interno. Este hecho no permite a los militares elaborar su propaganda sobre la base del nacionalismo. La ausencia del factor nacionalista en el propio régimen y el arraigo de las ideas y costumbres democráticas en el quehacer público chileno, impiden que el gobierno militar cuente con una base de masas, rasgo característico del fascismo europeo. De este modo el PCCh predice y constata un hecho que más tarde será comprobado: a pesar de algunos intentos aislados, Pinochet no logra nunca contar con una base social de masas activas. Sin en-

bargo influye en ello otro factor que nosotros creemos importante señalar. La visión del pasado que los militares pretenden imponer está teñida de negativismo hacia la política. La política para ellos aparece como un sucio juego de intereses mezquinos que sólo conduce al caos y al desorden. Menos política y más administración: ese será su lema. En este sentido, los militares, y especialmente Pinochet, nunca aceptaron las proposiciones de algunos consejeros civiles acerca de la conveniencia de formar un movimiento de masas.

Ahora bien, es evidente, por las características propias del modelo, que de haberse desarrollado una base de apoyo activa durante los primeros años, ésta rápidamente se habría agotado. Los sectores medios que apoyaron el golpe habrían sido los más aptos para organizar un movimiento de este tipo. Sin embargo, a los pocos años estos grupos de pequeños y medianos propietarios se fueron alejando progresivamente del régimen. Entre las clases populares el régimen encontró apoyo en algunos sectores despolitizados que no habían participado en la experiencia anterior (trabajadores no productivos y "lumpen", sobre todo), pero pronto, y a pesar de las promesas, se vieron sumidos en la miseria. La represión y las altas tasas de explotación a que se sometió a la clase obrera y a los demás sectores politizados del pueblo, hacían imposible que el régimen encontrara apoyo en ellos.

En cuanto a los intelectuales, la inmensa mayoría se sentía identificada con la democracia, si bien a través de distin--

tas simpatías y filiaciones partidarias. Lo mismo sucedía con grandes capas de profesionistas liberales. Debido a ello, la plana de dirigentes u organizadores de un movimiento de masas que apoyara al régimen, estaba constituida apenas por algunos cuadros de ejecutivos derechistas tecnócratas ligados a la iniciativa privada.

La existencia de este cuadro social conduce al PCCh a concluir que la legitimidad del régimen se basa "sólo" en la fuerza militar. Subestimando el impacto de la fuerza sobre la sociedad y sobrestimando la incidencia del plano socioeconómico, el PCCh deduce inicialmente una rápida caída del régimen. En un primer momento -en general en los documentos oficiales- se tiende a negar el hecho de que el régimen pueda crear consenso. Sin embargo, la dispersión de las fuerzas populares debido a la represión, creó las bases para un cierto consenso pasivo o "negativo". Por consenso negativo entendemos la generación de un sustrato favorable a la estabilidad de la dominación política sobre la base de la destrucción o anulación de la participación democrática. Es notorio que la represión directa o la simple amenaza de la fuerza, por un lado, y los efectos de una lenta pero impactante recuperación económica, por otro, crearon un clima permisivo a la labor destructivo-fundacional del régimen.

El hecho de que los movimientos opositores de estos años no alcanzaran resultados inmediatos y que carecieran de alcance nacional, impedía que el consenso "negativo" con que contaba el gobierno se rompiera. El régimen demostró gran capacidad, en

el período que analizamos en este capítulo, para anular los esfuerzos rearticuladores de la sociedad civil que emprendieron los sectores más politizados de ella junto a los partidos de centro e izquierda.

En cuanto a los sectores medios, la anulación tendió, si no a conseguir su apoyo abierto, al menos a evitar que se unieran a la oposición más radical. Por un lado, los medianos y pequeños propietarios, sumidos en un silencio no tanto obligado como cómplice, mantuvieron -y mantienen hasta el día de hoy- una actitud de franca reserva hacia los sectores más radicalizados del pueblo. De este modo el régimen contaba allí con cierta legitimidad para destruir a la oposición marxista. Por otro lado el sector de intelectuales, estudiantes y profesionistas liberales, si bien deploraba la violación de derechos humanos, prefería mantener una actitud pasiva.

De este modo parece ser más o menos claro que este importante segmento de la vida social, constituía de algún modo una trinchera o casamata que amortiguaba la fuerza potencial que podía llegar a tener el sector del pueblo más radicalizado. (29) Este estaba constituido por una amplia masa obrera que había sido la base social del régimen anterior, por sectores de pobladores, estudiantes e intelectuales. (30) En general, este sector encontraba su referente partidario en el PC o en el PS.

Volviendo al PCCh. La caracterización del régimen como "fascista" parte del análisis económico que elabora el partido y que concluye en que los únicos beneficiados con el nuevo mode

lo neoliberal son las empresas transnacionales y los grandes grupos del capital financiero. El modelo supone la destrucción de gran parte de la infraestructura productiva debido a la apertura al mercado exterior con lo que se condena a la quiebra a una gran cantidad de empresas orientadas a la sustitución de importaciones.

En relación a la fuerza de trabajo, el modelo se basa en la superexplotación posibilitada por las crecientes tasas de desempleo (aumenta enormemente el ejército industrial de reserva) y por la política represiva que dispersa las organizaciones sindicales y termina con sus derechos históricos.

De este análisis se deduce que la antigua autonomía relativa del Estado era en verdad bastante relativa. Es como si el golpe militar hubiera latinoamericanizado al Estado chileno, haciéndolo más congruente con su base económica subdesarrollada. La autonomía relativa del Estado, que había caracterizado la situación chilena hasta 1970, se hace ahora menos clara (como se hizo también durante el gobierno de Allende) al asumir éste la representación de los intereses de una reducida fracción de clase. Tampoco se trata de una situación en la cual la autonomía relativa ha desaparecido por completo, como podría haber sido el caso de la dictadura somocista cuando ésta controlaba ya los intereses económicos del conjunto del país. En el caso chileno los militares son intermediarios de una fracción burguesa determinada si bien ésta gobierna codo a codo con ellos. El que la autonomía relativa se haya visto mermada, se verifica en

una serie de medidas que benefician a la oligarquía financiera y perjudican abiertamente a importantes sectores de la burguesía productiva mediana y pequeña. Las más importantes de estas medidas ya las hemos mencionado (acceso al crédito externo sólo a los monopolios, altas tasas de interés interno, contracción inducida de la demanda, etcétera).

De este modo, podemos concluir que la caracterización de "fascistas" que hacía el PCCh del régimen era correcta en cuanto apuntaba a la esencia de clase de éste, pero desestimaba el carácter destructivo y constructivo de la utilización de la fuerza. Acorde a su historia, apegada a la institucionalidad democrática, el PCCh desdeñaba inicialmente el impacto de cualquier política emanada de la negación o de la anulación de las demandas adversas. Sin embargo, sobre esta base, el nuevo sistema iba destruyendo todos los escalones de la vida anterior e instaurando a su paso la lógica individualista e implacable del gran propietario privado.

4. Estrategia frente al régimen

4.1. Política de alianzas

A partir de la caracterización que hace del régimen, el PCCh elabora la política de alianzas que forma parte de su estrategia. La definición clásica de este tipo de sistemas (extraída de Dimitrov), le permite situar la contradicción principal en

tre democracia y fascismo, de tal modo que -se afirma-, en la lucha contra la dictadura la izquierda debe encontrarse con otros sectores políticos que profesan también ideas democráticas.

Desde el punto de vista de clases, la alianza propuesta tendría una amplísima base. Esta propuesta recogería un rasgo objetivo de la política económica del gobierno militar ya que está afectando a mediano plazo, no sólo a las grandes masas trabajadoras, sino a la inmensa mayoría nacional. Esta temprana observación del PCCh se va confirmando día tras día. Pequeños y medianos comerciantes comienzan a ser desplazados por la competencia monopolista. Los industriales que surtían el mercado interno pierden demanda ya que ésta se transfiere hacia la enorme y barata oferta de artículos extranjeros que ofrecen los monopolios importadores. El sector público se reduce, afectando a miles de burócratas. La capitalización en el campo expulsa a miles de pequeños propietarios hacia la ciudad o los obliga a vender su fuerza de trabajo en actividades agrícolas temporales. Poco a poco la lista de excluidos del sistema económico se va engrosando. La reducida burocracia cívico-militar, junto a los grandes clanes financieros y monopolísticos, son los únicos que están en condiciones de cosechar los frutos de este desmantelamiento generalizado. (31)

Esta constatación en el terreno social, el PCCh la traslada, en el terreno político, hacia la DC. El grueso de los pequeños y medianos propietarios y de la burguesía nacional perju

dicada, se hallaría representada por este partido. Si bien inicialmente los documentos oficiales denuncian la actividad golpista y reaccionaria de la dirigencia demócratacristiana, esta apreciación va dejando paso a la necesidad de hacer hincapié en la pluralidad de la base social de la DC. En sus filas militan miles y miles de campesinos, comerciantes empobrecidos e incluso obreros que constituyen un amplio sector popular posible de ser convocado y agrupado en torno a una alianza amplia. Por este motivo, desde los primeros meses después del golpe, el PCC comienza a hacer llamados a la DC que con el tiempo se harán más insistentes: "Se han creado -expresa una declaración de diciembre de 1973- condiciones para un frente unitario muy amplio. En el terreno político esta situación reafirma la vigencia de la UP como expresión unitaria del pueblo pero, al mismo tiempo, impone ir más allá (...) Esta unidad incluye el trabajo, por ejemplo, con amplios sectores demócratacristianos que se han pronunciado contra el golpe, con sectores independientes que han comprobado con horror lo que es el fascismo."³²

La política de acercamiento hacia la DC ponía énfasis en la conquista de su base social en favor de las tareas antifascistas, y ponía en segundo plano el acuerdo político entre las direcciones partidarias. Era natural, pues el grueso de los dirigentes de dicha colectividad -salvo un reducido número de personalidades- mantenía aún su apoyo a la dictadura que había colaborado a implantar. Por otro lado, se pensaba que la base social mayoritariamente popular con que cuenta la DC podía ser acercada hacia la oposición. Sin embargo, los esfuerzos comen

zaron poco a poco a concentrarse en lograr un acuerdo político entre las cúpulas.

Así, el PCCh piensa que la dirección demócratacristiana tendrá que ceder en algún momento a la presión de una gran parte de sus bases sociales desfavorecidas por el nuevo modelo económico. Intentando agilizar ese proceso de reconversión, el PCCh postula la formación de un Frente Antifascista, FAF, como la tarea central de su quehacer político. A mediados de 1974 aparecen los primeros llamados a la constitución conjunta del FAF aunque ya con bastante anterioridad se había señalado la necesidad de unir a la "inmensa mayoría del país". El eje de la nueva coalición sería la unión entre la UP y la DC. Por lo menos así queda planteado en diciembre de 1974 y con mayor claridad en el Pleno de 1977. (33)

La consigna que perseguía formar un nuevo frente político partía de la base de que era absolutamente necesario revitalizar la UP. Sin embargo, la evaluación de la situación en que se encontraba la izquierda concluía en que ésta no era capaz, por sí sola, de poner fin a la dictadura. Minoritaria y aislada al momento del golpe, desorganizada y reprimida después, necesitaba de una alianza más amplia para darle continuidad a su proyecto. La unidad de la UP con la DC se visualiza entonces como la única alternativa para lograr una correlación de fuerzas favorable al proyecto democrático.

Pero el planteamiento iba más allá. El PCCh había concluido que una de las principales debilidades del gobierno

allendista había sido no lograr acercar a las bases sociales de la DC, garantizando firmemente (contra las tendencias ultristas) el respeto a la mediana y pequeña propiedad. La división en tres tercios, tradicional en la política chilena, había sido muy perjudicial pues impedía la formación de un sistema estable que opusiera una fuerza mayoritaria a los avances de la derecha golpista. Con el propósito de superar esta debilidad del pasado, el PCCh plantea la absoluta necesidad de contar con el apoyo demócratacristiano para la construcción de una democracia popular, renovada, antifascista y nacional. Por este motivo se propone el FAF como una coalición de carácter estratégico, que fuera capaz de derrotar a la dictadura y ofrecer posteriormente un gobierno de nuevo tipo que emprendiera las tareas nacionales suspendidas el 11 de septiembre de 1973.

El único problema que tenía esta propuesta es que la DC no pretendió nunca acceder a una alianza política con la izquierda marxista, ni siquiera coyuntural. Su oposición al gobierno de Allende, el abierto apoyo que brindó a los militares golpistas y la colaboración que prestó al gobierno Pinochet, por lo menos hasta fines de 1974, la inhabilitaban para un viraje tan brusco. (34)

En realidad el PDC guardaba la esperanza de capitalizar para sí la derrota política de la izquierda. Si bien lentamente fue creciendo la distancia que separaba a la DC del gobierno, sus lazos no quedaron rotos sino hasta 1977, en que se decretó la disolución de todos los partidos políticos, medida que en la

práctica afectaba sólo a la DC. (35) Sin embargo, aún en ese momento, incorporarse a un frente convocado por la izquierda marxista que planteaba abiertamente una salida popular a la crisis política abierta por el golpe militar, habría dejado al proyecto de la DC sin un espacio político propio en la escena nacional. Volveremos sobre este punto más adelante.

En un intento de salvar estas contradicciones, el PCCh precisa su propuesta de FAF y la desglosa en tres posiciones concretas: primero, unidad para la acción política destinada a poner fin a la dictadura; segundo, acuerdos para la construcción de un nuevo sistema jurídico institucional; tercero, conformación de un gobierno provisional que asuma las tareas más urgentes de la nueva democracia (reconstrucción económica y erradicación del fascismo, básicamente). Para esto último, el PCCh ofrece un programa mínimo. Este proyecto es muy similar por sus metas al de 1969. Las diferencias principales están en que ahora se pone mucho mayor énfasis en las transformaciones políticas de lo que se hacía antes. Se incluyen así, como tareas prioritarias, la ampliación de los derechos ciudadanos, una mayor democratización de la sociedad y de las instituciones estatales -como el poder judicial y las FFAA-, entre otras. Además se agregan las reivindicaciones propiamente antifascistas: liberación de los presos políticos, juicio a los culpables de crímenes contra los derechos humanos, fin a los organismos represivos, derogación de la legislación vigente, incluida la Constitución de 1980. En lo económico es también antiimperialista y antioligárquico, pero hay una mejor definición de

las áreas de propiedad (cuestión que causó grandes problemas durante el gobierno de la UP), proponiéndose cinco: social, cooperativa, de autogestión, mixta y privada. (36) Todas las proposiciones y todos los llamados quecan, sin embargo, sin respuesta. La DC se negará no sólo a concertar políticas con el PCCh, sino incluso a iniciar conversaciones.

Por otro lado, el fortalecimiento de la Unidad Popular parece una tarea sumamente difícil. Si bien ella sigue existiendo como referente para todas las fuerzas que la constituyeron, en los hechos no logra operar como actor político real. La debilidad de los partidos más pequeños, las serias dificultades orgánicas que imponía la actuación clandestina y los terribles golpes ocasionados por la represión, eran los factores que impedían que la antigua coalición operara, efectivamente, como dirección política real. De la izquierda, el PCCh era el partido que mejor se había adaptado a las nuevas condiciones, salvando su organicidad interna, aunque con una fuerza muy mermada. En los demás partidos miembros de la UP primaba una mayor desorganización y desvinculación de los dirigentes con sus bases. Además cundía la dispersión y las diferencias internas. Pese a las muchas declaraciones conjuntas, ellas eran más la manifestación de buenas intenciones que el reflejo de una dirección con capacidad operativa.

Estos tenaces esfuerzos del PCCh por constituirse en impulsor de la alianza más amplia que se había planteado hasta entonces, constituyen, pues, casi una batalla solitaria. Pero no

es ese el único factor por el cual no logra obtener éxito. Hay además una subestimación del carácter de clase de la Democracia Cristiana. Para Luis Corvalán, por ejemplo, "...La contradicción principal que se planteó con la DC durante el gobierno de la UP, no estaba determinada, en lo fundamental, por los objetivos de carácter socialista del Gobierno de Salvador Allende. Lo que más pesó en la oposición del DC al Gobierno de Allende (...) fue su afán político (...) de retornar en gloria y majestad al poder".⁽³⁷⁾ Esta apreciación pretende olvidar lo esencial de la diferencia entre el proyecto socialista que levantaba la Unidad Popular y el proyecto de desarrollo nacional capitalista propio de la DC. En nuestra opinión, es evidente que la contradicción principal nacía del carácter de clase de los proyectos en pugna y no de el afán de poder de la DC, natural en todo partido político.

Es cierto, por otro lado, que este señalamiento aparece reñido con la constatación de la base social pluriclasista de la DC. Sin embargo, no se debe olvidar que la hegemonía en la dirección política de ese partido y, sobre todo, en la orientación estratégica de su proyecto, prima más el interés de la burguesía nacional -incluso gran burguesía- que el de los campesinos, pequeños propietarios u obreros que militan en las bases. Por eso, la eliminación de la amenaza que representa una izquierda fuerte, numerosa y hegemonizada por partidos marxistas que aspiran a la eliminación de la propiedad privada (y que de hecho lo comenzaron a hacer cuando tuvieron el gobier

no), constituye un objetivo de primer orden en la política interna de la DC.

El PCCh sobrestima otra vez el factor socioeconómico: "El PDC ~~se~~ afirma en un documento de 1975- es, como se sabe, un partido pluriclasista donde coexiste un grupo de representantes de la oligarquía monopolista junto a sectores de la burguesía pequeña y mediana de orientación democrática, a vastos sectores de capas medias y, más allá de ellas, sectores del campesinado y de la clase obrera".⁽³⁸⁾ Esto no es más que una congtatación empírica. ¿Bajo qué hegemonía de clase están agrupados estos sectores? ¿Cuál es el proyecto que prima a largo plazo? Estas preguntas quedan en el tapete sin una respuesta rigurosa. Nos parece claro, en este sentido, que no es sólo la extracción de clase de la base militante de un partido único factor que determina la orientación de su proyecto estratégico.

El proyecto de la DC se fundamenta en dos ejes. El primero es evitar que la izquierda y las fuerzas populares afincadas en ella, hegemonicen la salida de la dictadura. El segundo es dirigir una alianza con los sectores de centro, de la "izquierda democrática" y de derecha, que posibilite una "salída pacífica" hacia la democracia sobre la base de un pacto con las fuerzas armadas.

Esta posición, paradójicamente, es tempranamente definida por la DC. Ya en diciembre de 1975 el ex presidente Frei, líder principal de ese partido hasta el día de su muerte, escribió en un opúsculo: "Entre estos dos extremos (el 'totalitaris

mo' de izquierda y de derecha) está el pueblo de Chile, su inmensa, su abrumadora mayoría. Este pueblo quiere autoridad eficaz y firme."⁽³⁹⁾ Allí se dejaba claramente establecido que en el futuro institucional de Chile le correspondía un papel importante a las FFAA como garantes del sistema capitalista. Ya entonces se planteaba que, para dar garantías a las FFAA la alianza antidictatorial debía excluir a la izquierda marxista, incluyendo desde la derecha y las FFAA hasta "a quienes sostienen la posibilidad de un socialismo democrático".⁽⁴⁰⁾ En la visión de la DC es evidente que, entre quienes sostienen dicha posibilidad, no se encuentra el PCCh. La estrategia democris ristiana, por lo tanto, así definida, entraba en abierta compe tencia con la del PC: al PAF oponía un frente antidictatorial, pero a la vez anticomunista; a la hegemonía de la izquierda revolucionaria oponía la hegemonía de la burguesía democrática.

De esta forma, la propuesta de un Frente Antifascista nun ca llegó a cuajar. El PCCh siguió insistiendo en la necesidad de la unidad pero, en la práct ica, esta propuesta no sólo enfren tó la reticencia del PDC sino además la existencia de una pro puesta alternativa y excluyente.

4.2. La acción política del PCCh

En cuanto a la actividad del PCCh distinguimos, en el período 1973-1980, dos etapas. Durante la primera de ellas, que hemos denominado de "resistencia", el PCCh intenta reconstituir las condiciones básicas de su existencia manteniendo o retomando

-allí donde fueron destruidos por efectos de la represión- los vínculos con sus bases sociales. Ya en una segunda etapa, aprovechando una serie de condiciones (tales como los cambios de modalidad en la represión y la agudización de los problemas sociales), intenta conformar cierto movimiento de masas en cada uno de los frentes sectoriales donde cuenta con células partidarias. Esta etapa, de "reactivación", se caracteriza por la reapertura de ciertos espacios públicos para la actividad política y la situamos entre 1978 y 1980. Por primera vez la militancia del PCCh se muestra públicamente en las organizaciones sociales donde venía actuando y en las manifestaciones callejeras.

La primera y más importante tarea de la fase de resistencia fue la conservación del aparato propio. Ello implicaba adecuarse a las nuevas condiciones de clandestinidad. Pese a que el PCCh se proyectó hacia ella con mayor eficiencia que el resto de sus aliados de la UP, ese tránsito no se realizó sin dificultades. Una serie de detenciones a mediados de 1974 obligaron a efectuar importantes ajustes, reorganizándose la vinculación orgánica.⁽⁴¹⁾ En 1976 la represión, que afectó a los más altos niveles de la estructura partidaria, dejó ver que la organización aún trabajaba con descuido y subestimando la capacidad del enemigo.

Pero el principal problema lo constituyó la mantención de su vinculación con los organismos de masas. La detención y asesinato de dirigentes, el despido masivo de los militantes de

sus centros de trabajo, el temor que se apoderó de muchos de ellos haciendo bajar sensiblemente su número, eran factores que dificultaban esa vinculación. La limitada actividad de propaganda clandestina que era posible de efectuarse y el crecimiento numérico -más por la vía de la recuperación de la antigua militancia que por medio del reclutamiento- pasaron a convertirse en las dos tareas centrales del partido. Por otro lado, las limitaciones que se le imponían a las organizaciones sociales que habían logrado sobrevivir dificultaban mucho el trabajo político. El partido se propone, entonces, como primera tarea, crear o apoyar las organizaciones populares que se habían mantenido, de cualquier tipo que fueran, con el fin de evitar la desaparición de la tradición organizativa del pueblo.

Debemos notar que, ante la abrupta desaparición del escenario político, los distintos grupos sociales comienzan lentamente a buscar de nuevo los lazos que los identifican, ya fueran gremiales o de otro tipo. Es así cómo surgen un sinnúmero de organizaciones culturales, deportivas, cooperativas, que reúnen en un primer momento a los núcleos más politizados de la sociedad civil, pero que pronto comienzan a ampliarse y a extender su influencia sectorial.⁽⁴²⁾ Muchas de estas agrupaciones surgieron y crecieron bajo el alero de la Iglesia Católica que tomó un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos.

La estructura orgánica del PCCh, tomada del modelo bol--

chevique y de los lineamientos que hiciera la Tercera Internacional, conservaba básicamente su misma forma. Esta debía responder a algunos principios generales. El primero de ellos es que el partido debía ser un partido de masas, fuertemente enraizado en las organizaciones de la clase obrera y del pueblo en general. Además debía ser un partido compuesto por distintas organizaciones o instancias internas, centralizado y monolítico. Cada militante tenía la obligación de pertenecer a un organismo interno del partido y a una organización de masas, y el derecho de participar libremente en la toma de decisiones.

Organizado jerárquicamente, las labores de comando se centran en el comité central, elegido por el Congreso Nacional. A partir de allí el partido se estructuraba en múltiples "comités regionales" a lo largo de todo el territorio.⁽⁴³⁾ Estos comandaban a su vez a diversos "comités locales" o "zonales", organizados por frente de trabajo o territorialmente, y al cual pertenecían un conjunto de "células", organismos de base del partido. Esta estructura está interconectada por un mecanismo de "vínculos" entre una y otra, con el fin de asegurar un lazo estrecho entre las direcciones de los diversos organismos y las células. Cada organismo elige democráticamente su directiva, junto a las representaciones de los organismos inferiores. Este esquema, esbozado en sus rasgos más generales, siguió manteniéndose después del golpe militar, pero con una acentuada compartimentación horizontal y vertical que limitaba en mucho las posibilidades de un funcionamiento más democrático.

En cuanto al comité central, éste ha sido en gran parte renovado y la mayoría de sus miembros actúan dentro de Chile, donde funciona una dirección central conectada con el secretario general y otros miembros del CC que viven en el exilio. En cuanto al número de militantes (260 000 en 1973), es hoy prácticamente imposible conocerlo. Por razones de seguridad este dato es celosamente mantenido en la confidencia. Sin embargo, es lógico suponer que ha disminuido considerablemente.

El conjunto de esta estructura, a partir del golpe operaba con dificultades. Los vínculos entre un organismo y otro dejaron en gran parte de funcionar. Las instancias que sobrevivieron actuaban sin vinculaciones verticales y con una importante reducción tanto del número de sus militantes como de su actividad política. En muchos casos por iniciativa de los organismos de base se comenzó a rearmar el organigrama. Las direcciones ausentes fueron reemplazadas y comenzaron, cada una a su nivel, a reorganizar los vínculos con las células.

A partir de estas condiciones precarias, el PCCh se propone, como dijimos, revincularse a los organismos sociales que aún existían. Pero esto no era fácil. El gran esfuerzo que implicaba no se traduce, como el propio PC lo esperaba inicialmente, en un movimiento de masas, sino más bien en un lento y difícil resurgimiento de organizaciones que no estaban en condiciones de realizar actividad opositora abierta. El PCCh parece no percatarse de esta realidad en los primeros años y confía en una rápida recuperación de los niveles de movilización,

supuestamente facilitada por la reducción de la base social del régimen. En esta etapa, que va desde septiembre de 1973 a fines de 1977, se insiste en el carácter transitorio de la derrota y se califica de "éxito pasajero" el triunfo militar, evaluando en forma desmesuradamente optimista hasta los menores logros del sector popular.

No existía plena conciencia del grado de profundidad de la derrota y de la honda desmoralización que ella había provocado en las masas. Apenas éstas retomaran un papel protagónico, el gobierno, aislado por su política económica, caería.

Esta evaluación triunfalista de los hechos, propia del período de resistencia, dificultaba aun más la revinculación del aparato partidario con sus bases sociales, pues abría una brecha demasiado grande entre el sentido común y la apreciación partidaria. Este tipo de discurso, fincado en una sólida y voluntariosa disciplina practicista, se quedaba, sin embargo, carente de respuestas ante la gris evidencia de los hechos. Es probable que una actitud más parca, sin ser derrotista, hubiera contribuido a acortar los difícultosos trances de este período.

A partir de 1978, la situación comienza a cambiar, abriéndose la etapa que hemos denominado de "reactivación". El sistema orgánico del PCCh se encontraba, en lo fundamental, readecuado a las nuevas necesidades. Había logrado ligarse nuevamente a las organizaciones que aún subsistían o, en muchos casos, crear otras nuevas. Con bastante retraso respecto a los anuncios optimistas del partido, el "movimiento de masas" o, en

otras palabras, el tejido social, comenzaba a resurgir. Empiezan a funcionar nuevamente los colegios profesionales, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Aparecen por primera vez manifestaciones públicas de oposición (tales como huelgas y mítines), aunque aún reducidas y aisladas. (44)

Los fuegos fueron abiertos por los familiares de detenidos desaparecidos que mediante varias huelgas de hambre y valientes manifestaciones callejeras lograron romper la barrera informativa que imponía el régimen y dar a conocer su problema a toda la opinión pública del país. A mediados del mismo año de 1978, un movimiento de protesta (que no llegó a convertirse en huelga) en el mineral de Chuquicamata, hace sentir por primera vez la presencia de la clase obrera. Ese año el primero de mayo se celebra en las calles céntricas de Santiago.

Sin embargo, a pesar de que este período de reactivación mostró que existía una fuerza organizada de oposición capaz de expresarse en el escenario público, puso de manifiesto también lo que Garretón ha llamado "convergencia problemática entre las organizaciones políticas y las sociales". (45)

Pese a la importancia simbólica que estas movilizaciones tuvieron, no lograban arrastrar a grandes masas, como tampoco constituirse en movimientos de alcance nacional. Se trata de hechos aislados que no llegaban a coordinarse con movimientos de otros frentes. Así, la voluntad rearticuladora de los militantes partidarios se estrellaba con el escepticismo y la desconfianza de la mayoría de la población. El movimiento de ma-

sas efectivamente había repuntado, pero a poco andar quedó claro para todos que la dictadura era una fortaleza más estable de lo que se suponía. Su existencia oponía dos obstáculos a la acción opositora.

El primero de ellos era la regresión, de la cual se derivaba la necesidad de readecuar incluso la actividad gremial a un tipo de funcionamiento semi-clandestino.⁽⁴⁵⁾ El segundo obstáculo era el miedo que se generalizó en la población, producto de la campaña del terror. Este factor psicológico creaba dispersión y apatía, y provocaba el aislamiento de los sectores más combativos. De este modo, los esfuerzos que estos últimos realizaban por rearticular el tejido social no obtenían un resultado acorde con los recursos invertidos.⁽⁴⁷⁾

Por otro lado, los medios tradicionales a los que recurrían las clases en Chile para presionar al Estado, ya no eran eficaces. Esto era particularmente claro en el caso de la clase obrera. Con una larga tradición huelguística y poseedora de un significativo conocimiento práctico en la utilización de diversos medios de presión, al aplicarlos ahora no lograba ya los mismos resultados. No sólo el esfuerzo organizativo era inmensamente más dificultoso, sino que éste, cuando llegaba a cuajar, no obtenía ya ni remotamente los efectos que en el pasado. Las huelgas, con el Plan Laboral (que fue parte de las 7 modernizaciones) dejaron de tener eficacia y generalmente terminaban en el despido masivo o en el encarcelamiento de los dirigentes. Las presiones por aumentos de sueldos o por derechos cancelados (tales como salud o previsión social) no surtían ningún efecto.

Tampoco se podía acudir al Estado, para que éste arbitrara las relaciones entre los empresarios y los trabajadores pues no cumplía ya con ninguna función mediadora.

El caso del movimiento estudiantil es similar. Teniendo también una larga tradición de lucha, poco a poco logró reorganizarse.⁽⁴⁸⁾ En 1980 dirigió un paro estudiantil que involucró a algunas facultades de la Universidad de Chile (la más grande e importante del país) pero que no tuvo repercusiones en otros centros de enseñanza superior. El movimiento exigía la salida de los organismos represivos de la Universidad. A pesar de que en cuanto a organización y movilización el paro fue exitoso, las peticiones encontraron, otra vez, respuestas negativas. Múltiples dirigentes expulsados y la promulgación de una nueva Ley Universitaria que dispersaba a las facultades y separaba de la jurisdicción de la Universidad a las carreras más conflictivas, fue el resultado inmediato.⁽⁴⁹⁾ Una vez más el desgaste que producía la preparación de estos hechos, se sumaba la falta de eficacia concreta en los resultados.⁽⁵⁰⁾

Sin embargo, también el movimiento popular y la propia clase obrera (así como el partido que mayor presencia tenía en ella), necesitaba experimentar prácticamente su desilusión para darse cuenta que los medios tradicionales ya no eran efectivos. Todos estos años transcurrieron en una lenta y dificultosa reactivación de los sujetos sociales que no encontraban la forma de ser eficaces frente a un Estado que no negocia.

Estas experiencias fueron asimiladas por el PCCh y desa-

parecieron las referencias a la "transitoriedad" del régimen y a la inminencia de su derrota. Si bien durante esta etapa el discurso siguió siendo optimista, se inició un reprocesamiento de la información tratando de hacer un diagnóstico más realista.

Hasta entonces la cuestión de las formas de lucha no había sido abordada más que retrospectivamente en relación al período de la UP. En cuanto al medio que se utilizaría para derrocar a la dictadura, seguiría siendo el mismo que el PCCh había utilizado históricamente para hacer pesar su influencia: la lucha de masas. Por ello se entiende a la organización y fortalecimiento de la sociedad civil a través de la participación en múltiples organismos sectoriales, simples y federados, con capacidad de movilización y politización de las demandas. Desde los primeros meses después del golpe militar, se rechaza la lucha armada contraponiéndola al trabajo de masas y calificándola de "aventurerismo". La posibilidad de incorporar formas armadas a la lucha política no se toca.⁽⁵¹⁾ En 1977, como una de las enseñanzas del pasado que extrae el análisis realizado en el Pleno del Comité Central, se plantea preocupación por desarrollar una fuerza militar propia, pero no se la ve relacionada a la acción política inmediata. Es recién a finales del período que analizamos en este capítulo, en 1980, que esta cuestión empieza a ser discutida públicamente.

Así, el período de 1973 a 1980 es -en muchos aspectos- la prolongación de la línea política anterior. Sin embargo, el

proceso de crítica y autocrítica que siguió a la derrota de 1973 y que se sintetizó en el Pleno de 1977, abrió el camino a nuevas concepciones. Si bien en esencia el programa político no había cambiado, había aspectos que fueron profundizados, de sarrollados o desechados. A las tareas estratégicas se suma ahora la necesidad de emprender modificaciones profundas en el aparato del Estado, incluidas por supuesto las FFAA. Las formas de lucha que propicia y practica siguen basándose en su política de movilización de masas. Las alianzas que propone son más que nada enfatizadas en relación al período anterior. Sin embargo, en septiembre de 1980, con la realización del plebiscito que aprobó la Constitución, se presentó un hito que permitió sintetizar los siete años de experiencias anterior y valorar sus resultados.

El Frente Antifascista jamás llegó a constituirse. La unidad opositora sólo se logró coyunturalmente y alcanzó su mayor grado en las movilizaciones que precedieron al plebiscito. Con el fin de mostrar la voluntad unitaria que le animaba y presentar a la población una oposición unida, el PCCh retiró su consigna inicial de "abstención activa" y acudió a votar por la desaprobación de la Constitución, tal como lo propuso la DC. A pesar de estos esfuerzos por lograr la unidad con el centro, ésta no llegó nunca a plasmarse en alguna forma orgánica.

En relación a la Unidad Popular el panorama también era sombrío. Si bien seguía existiendo formalmente, sus dificultades para funcionar aumentaban. El PS, eje principal de la polí

tica de alianzas del PCCh, había sufrido una serie de fraccionamientos internos a partir de 1974 que habían culminado en una importante división en 1979. Su capacidad se hallaba muy mermada y su funcionamiento irregular.⁽⁵²⁾ Por su parte los partidos que tenían un origen en la DC (MAPU, MOC e IC) intentaban, junto a fracciones del PS, articular otro referente -lo que después se llamaría la "Convergencia Socialista"- que agrupara a los partidarios de un "socialismo democrático".

Los avances logrados eran innegables pero limitados: los métodos tradicionales de lucha encontraban su piedra de tope en la represión y la dispersión de las fuerzas antidictatoriales; la política unitaria del PCCh no lograba concretarse como no fuera para actividades muy circunscritas; finalmente, la alterna popular a la dictadura parecía diluirse frente a un régimen fuerte y a una DC que, gozando de un espacio público mucho mayor que la izquierda, parecía capaz de capitalizar mejor el desprendimiento de los sectores que habían apoyado a Pinochet.

Para el PCCh quedaba claro que los cambios introducidos por el régimen eran de enorme profundidad. Las viejas formas de hacer política conducían a resultados limitados y transitorios y no permitían poner en jaque al gobierno ni articular una actividad más ofensiva contra él. Este por su parte no encontraba obstáculos importantes que le impidieran llevar a efecto su bien articulado plan de transformación de la sociedad que tenía la intención de construir un modelo político au-

toritario permanente y una modalidad estable de acumulación capitalista.

En septiembre de 1980, días antes de la realización del plebiscito, Corvalán pronuncia un discurso en Estocolmo, que marca un hito en la historia de la línea política del PCCh. Allí se acepta por primera vez la posibilidad de utilizar medios violentos, no como una cuestión teórica y lejana, sino práctica e inmediata. El reconocimiento de la propia ineficiencia implica el abandono del discurso triunfalista para dar cabida a un nuevo proceso de autocritica -más profundo y más abierto- en que se acepta lo largo y difícil de la lucha que viene por delante.

NOTAS AL SEGUNDO CAPITULO

- (1) La fracción monopólica financiera de la burguesía ha promovido en toda América Latina modificaciones en la estructura económica basadas en la teoría neo-liberal. Se le conoce también como oligarquía financiera y se define por su dominio combinado del sistema financiero y de las mayores empresas productivas. En este trabajo nos referiremos a ella -- utilizando indistintamente esos dos términos.
- (2) Caputo, Orlando: *Notas sobre la crisis del capitalismo* --- (Cuadernos de la DEP). Facultad de Economía, UNAM, 1983, - p. 17.
- (3) La deuda externa de Chile asciende actualmente a 22,000 millones de dólares, siendo la más alta per cápita de América Latina.
- (4) La periodización que utilizamos aquí se basa en: Garretón, M.A.: *El proceso político chileno*. Editado por FLACSO. Santiago, Chile, 1983.
- (5) Estos organismos dependían de cada una de las ramas de las fuerzas armadas y de carabineros (policía militarizada chilena). Operaban desde antes de 1973 y siguen existiendo en la actualidad, pero la labor de inteligencia y represión política fue crecientemente centralizada por la Dirección de Inteligencia Nacional.
- (6) Esta ofensiva represiva le demostró al PCCh que no era invulnerable y que debía perfeccionar las medidas de seguridad en su funcionamiento. Varios de los detenidos, miembros de la dirección de las Juventudes Comunistas, entregaron valiosa información que posibilitó que la acción represiva alcanzara a la dirección del partido. Algunos de esos militantes se integraron activamente a trabajar en los organismos de seguridad.
- (7) Los detenidos que nunca fueron reconocidos como tales y que hasta hoy se encuentran desaparecidos se calculan en 2500.
- (8) La CNI continuó operando con el mismo personal del la DINA y bajo el mando de un oficial de las FF.AA. designado por Pinochet y dependiente del ministerio del interior. La legislación que la creó le otorgaba aun mayores atribuciones que a la DINA en la centralización y coordinación en la actividad de inteligencia así como mayor impunidad frente a los tribunales.
- (9) El Plan Laboral establecía una calendarización de las negociaciones por orden alfabético y no por ramas de producción, impidiendo las huelgas coordinadas. Limitaba además la duración de las huelgas a 59 días, después de los cuales la empresa podía contratar nuevo personal.

- (10) El artículo octavo de esta Constitución establece: "Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atentan contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República." *Constitución Política de la República de Chile*. Editora Cumbres. Santiago, 1980.
- (11) La Junta de Gobierno está compuesta por los cuatro comandantes en jefe de las FF.AA. y de carabineros. El comandante del ejército, que es a la vez jefe del ejecutivo, es reemplazado en la Junta por el vicecomandante.
- (12) En los actos públicos era más notoria la presencia de la izquierda que la de la Democracia Cristiana pues ésta se restringía a las manifestaciones callejeras. Tal fue el caso de el mayor de estos actos, convocados a fines de agosto por el ex presidente Frei.
- (13) La tasa de desocupación en 1973 osciló, en el Gran Santiago, entre el 3.8% y el 3.1%, antes del golpe militar. En 1976 se llegó a un promedio de 16.3% el cual descendió a 11.7% en 1980. Ver: Estay, Eduardo: *Formas de funcionamiento del capitalismo en Chile y su inserción en la economía internacional*. Tesis de Licenciatura. UAP. México, 1983.
- (14) El PCCh elevó su votación del 11.4% en las elecciones parlamentarias de 1961, al 16.6% en las de 1969 y al 17% en las de 1973. Ver: Kudachkin, M.: *Chile: la experiencia de la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias*. Editorial Progreso, Moscú, 1978.
- (15) La ductabilidad táctica se expresó, por ejemplo, en la política del PCCh hacia el gobierno del demócrata-cristiano Eduardo Frei. En vez de enfrentarlo con una oposición radical, como lo hizo el Partido Socialista, los comunistas caracterizaron al gobierno de burgués, en términos generales, pero apoyaron algunas de sus medidas concretas que, como la reforma agraria, podían favorecer a los sectores populares. Se optó por la movilización de masas que presionara al gobierno a profundizar sus medidas, a la vez que se denunciaba su carácter reformista.
- (16) Si bien es evidente que los acontecimientos de 1973 no representaban la derrota de ningún partido por separado -sino del movimiento popular en su conjunto-, al PCCh le había correspondido un rol de primera línea y había sido el principal impulsor de la "vía chilena" o "pacífica" al socialismo.
- (17) Entendemos por "ultraizquierda" las tendencias o partidos que, desde dentro o desde fuera de la Unidad Popular, pugnan por una ruptura del sistema institucional para dar salida a la crisis del gobierno allendista, por lo que muchas veces actuaron en contra del programa de la UP. Ver: Yocelovzky, Ricardo: *La izquierda chilena en 1982*. (Documentos de trabajo, Departamento de Sociología y Cs. político-administrativas). Universidad Iberoamericana. México, octubre 1982.

- (18) Esta actitud se manifiesta en las primeras declaraciones oficiales. El 11 de Octubre de 1973, con el aparente objetivo de priorizar la acción política, se señala que "...este no es el momento preciso para discutir los errores cometidos -- por el gobierno de la Unidad Popular en su conjunto o por cada sector político en particular (...) poner el acento ahora en esa discusión podría afectar la cohesión entre los partidos populares..." PCCh: *Desde Chile hablan los comunistas*, (recopilación de documentos). Eds. Colo Colo, sin lugar de edición, 1976. p. 29. Todavía a un año del golpe, se reitera la confianza en una pronta derrota de la dictadura: "Pinochet y sus sacuacas no podrán mantenerse largo tiempo. La junta militar es estrictamente transitoria. La mayoría inmensa de los chilenos se opone al fascismo. La dictadura -- se debilita cada día". PCCh: "Al partido y al pueblo de -- Chile", en: *Desde Chile...* p. 136.
- (19) Ejemplo de esto es el llamamiento, en octubre de 1973, a detener la represión con la "movilización de masas", en circunscripciones en que ello era absolutamente imposible e impensable. Ver: "La voz de orden es la unidad" en *Desde Chile...* p. 31.
- (20) Para esta fecha, el secretario general del partido, Luis Corvalán, ya había sido liberado. Si bien el Pleno se realizó en el exilio, asistieron a él los más altos dirigentes del "interior".
- (21) La validez de esta consigna había sido seriamente cuestionada por algunos dirigentes. Ver, por ejemplo: Yañez, Alejandro: "Algunos problemas de estrategia y táctica en el proceso revolucionario chileno" *Soletín del exterior* # 24. Julio-Agosto, 1975.
- (22) Corvalán en: *El Pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista de Chile*. Eds. Colo-Colo. Sin lugar de ed., 1978, p. 36.
- (23) El sector constitucionalista de las PP.AA., encabezado por el general Carlos Prats, importante al comienzo del Gobierno popular, fue finalmente anulado por las fuerzas golpistas.
- (24) Yañez, Alejandro en: *El Pleno...* p. 153.
- (25) Insunza, Jorge en: *El Pleno...* p. 104.
- (26) PCCh: *Desde Chile...* p. 23.
- (27) PCCh: *Desde Chile...* p. 139.
- (28) Corvalán en: *El Pleno...* p. 43..

- (29) El concepto está tomado de Gramsci: "...al menos en lo que respecta a los Estados más avanzados (...) donde la 'sociedad civil' se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a las 'irrupciones' catastróficas del elemento económico inmediato (crisis, depresiones, etc.). Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de la guerra moderna". (Gramsci, n.: *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. Ed. Juan Pablos. México, 1975, p. 94).
- (30) Pobladores se les llama a los habitantes de las colonias populares o barrios marginales de la ciudad ("poblaciones").
- (31) Algunos datos ilustrarán esto: Mientras el 20% más pobre de la población redujo su consumo, en el período 1969-1978, en un 30%, el 20% más rico lo elevaba en un 15.7%. Por otro lado, entre 1978 y 1980, los 4 mayores grupos económicos elevaron su patrimonio en un 176% (Fazio, Hugo: *Resumen económico 1980*).
- (32) PCCh: *Desde Chile...* p. 44-45.
- (33) El 10. de mayo de 1974 el Comité Político de la U.P. llamó a la conformación de un Frente antifascista. Durante los primeros meses de dictadura el PCCh estimaba necesario el trabajo conjunto con ~~sectores~~ de la DC, pero en el curso de 1974 esta política se orienta hacia el conjunto del PDC. Ya en diciembre de ese año el PC invita abiertamente al Partido Demócratacristiano a incorporarse al FAF (*Desde Chile...* p. 144). En 1977 ésta era ya una cuestión central. Ese año Corvalán declara: "Desde el punto de vista de la contribución de los partidos políticos a la unidad, el auto clave es (...) el entendimiento entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana" (Corvalán: *El Plano...* p. 59).
- (34) Las figuras del PDC que más notoriamente colaboraron con la dictadura fueron Juan de Dios Carmona y William Thayer. (éste último la representó en la Unesco). Carmona, Enrique Krauss y Juan Hamilton, todos dirigentes de la DC, realizaron giras internacionales en 1973, en busca de apoyo al régimen militar. A ellos hay que agregar algunas personalidades ligadas a Frei (como Raúl Sáez, Jorge Cauas y Carlos Massad) que cumplieron importantes funciones tecnocráticas en el gobierno de Pinochet. Todavía a fines de 1974, 18 dirigentes de ese partido aparecen entre los firmantes de una declaración de apoyo a la dictadura frente a una condena en las Naciones Unidas por violación a los derechos humanos. (Ver: Yocelvezky, Ricardo: *La Democracia Cristiana Chilena. Trayectoria de un proyecto*. FLACSO. México, 1985. p. 99).

- (35) El año 1974 el gobierno emprendió una muy limitada represión contra un sector de la DC exiliando o encarcelando a figuras o militantes de su "ala izquierda". Estos hechos, junto a la creciente definición del régimen en favor de los monopolios financieros, comenzaron a crear mutuas desconfianzas. Ya para 1977 la DC estaba en una posición francamente crítica frente a la dictadura militar. La respuesta del régimen fue la disolución de "todos" los partidos políticos, lo que no afectaba ni a la izquierda clandestina desde 1973- ni a la derecha disuelta por voluntad propia.
- (36) Ver: Corvalán, Luis: "Nuestro proyecto democrático" *Boletín del Exterior* # 37. Sept.-Oct. 1979.
- (37) Corvalán: Entrevista en: *Boletín del exterior* # 24 julio-agosto 1977, p. 26.
- (38) PCCh: "El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo", en: *Desde Chile...* p. 214.
- (39) Frei: citado por PCCh en: "Frei: de espaldas al pueblo" *Boletín del Exterior* # 17, mayo-junio, 1976.
- (40) *Ibid.* p. 62. Frei murió en 1982. No ocupaba la presidencia de la DC, pero era sin duda su figura más relevante y la que mayor peso tenía en la política de ese partido.
- (41) Se restablecieron las vinculaciones con las organizaciones regionales, algunas de ellas desconectadas por varios meses; se simplificó y redujo el aparato para el funcionamiento clandestino, y se tomaron medidas para terminar con la improvisación y el descuido. (Ver: González, Luis, en: *El Plebiscito...* pp. 92-92).
- (42) Tal es el caso, por ejemplo, de la ACU (Agrupación Cultural Universitaria) y de numerosos talleres culturales en diversos centros de trabajo.
- (43) El V Congreso de la Internacional Comunista, realizado en 1924, había planteado como tarea principal la bolchevización de los partidos que la integraban. Si bien el PCCh aún no era aceptado como miembro de esta organización, comenzó este proceso a partir de 1925. Ya en los años treinta contaba con una estructura centralizada. Al momento del golpe, en 1973, se encontraban funcionando 40 comités regionales.
- (44) Durante este período se organizaron numerosos mitines callejeros que, aunque con menguada asistencia, formaban parte de las primeras muestras abiertas de descontento. También estallaron huelgas en importantes centros de trabajo, si bien se mantuvieron dentro de los estrechos límites de la legislación laboral vigente. Durante 1980 se efectuaron los primeros paros estudiantiles. Ya para entonces funcio-

naba, a niveles sectoriales, una amplia red de organizaciones populares e instituciones alternativas al oficialismo.

- (45) Garretón. *op. cit.*, Capítulo X.
- (46) La represión se expresaba no sólo en forma de asesinato o -detenciones. Había que enfrentar también el soplónaje y la infiltración.
- (47) Estos intentos implicaban un alto grado de dificultad. Basta mencionar, como ejemplo, que las reuniones de preparación de cualquier actividad debían efectuarse en algún recinto particular que no estuviese vigilado y que no podía ser usado con frecuencia.
- (48) La Federación de estudiantes de Chile (FECH) existía desde -- los años veinte y había encabezado grandes movimientos democratizadores, entre los que destacan el derrocamiento de la dictadura de Carlos Ibáñez en 1931 y la reforma universitaria de 1968. Fue disuelta en 1973 y en su lugar el gobierno creó organizaciones con directivas designadas por los rectores-delegados de cada universidad. En un largo proceso, los estudiantes lograron generar organizaciones democráticas -- por Facultad a partir de 1978.
- (49) La Ley General de Universidades era parte de las 7 modernizaciones y no se aplicó sino hasta las vacaciones de verano (enero-febrero) de 1981. Su promulgación se vio acelerada por los acontecimientos protagonizados por el movimiento -- estudiantil en 1980.
- (50) Esto es válido sobre todo para la izquierda pues sufría una represión más dura y tenía una dificultad mucho mayor que la DC para mostrarse públicamente.
- (51) Ver declaraciones del 15 y el 20 de diciembre de 1973, en: *Desde Chile...* p. 37 y 46. En un documento posterior ("El ultraizquierdismo..." en: -- *Desde Chile...* pp. 210-237) se establece una separación me cánica entre acumulación de fuerzas políticas y militares. A la lucha militar no se la asigna el menor papel en el me joramiento de la correlación de fuerzas, contraponiéndola a la lucha de masas o "lucha política": incluso se la asume -- como negativa pues entregaría pretextos para reprimir a la dictadura. De lo que se trata, según este documento, es de reunir a la mayoría: "Si la 'más grande mayoría popular' desea el derrocamiento de la dictadura y actúa de acuerdo -- con esos deseos (...) la dictadura tendrá su días contados. Sólo a través de la lucha de masas se creará una situación revolucionaria y con ello las condiciones básicas para conseguir una correlación política y una correlación militar -- favorable a las fuerzas populares". P. 231.

- (52) En 1979 el P.S. quedó dividido en 2 fracciones fundamentales a partir de las cuales se desarrollaron otras. Estos dos sectores estaban encabezados por Clodomiro Almeyda y por Carlos Altamirano, respectivamente (Ver: Yocolevsky; - *El Partido Socialista de Chile bajo la dictadura militar*. Documento mimeografiado. pp. 35-40).

CAPITULO TERCERO

LA POLITICA DE REBELION POPULAR Y SU TRASCENDENCIA

(1980 - 1985)

1. La Política de rebelión popular: algunas definiciones

A finales de 1980 se conocieron dos importantes documentos del PCCh. El primero de ellos, conocido como "el discurso de Moscú", fue dado a conocer por el secretario general el 3 de septiembre, apenas una semana antes del plebiscito que aprobaría la Constitución pinochetista. El segundo, que constituye un complemento del anterior, es el "discurso de Estocolmo", emitido también por Corvalán el 18 de noviembre del mismo año. Allí se planteaba por primera vez en forma oficial y pública que el PCCh propugnaba por la utilización de todas las formas de lucha contra la dictadura, impulsando el derecho a rebelión. De este modo se marcó un hito en la evolución política de este partido, pues a partir de ahí se introducen en su línea una serie de elementos que anteriormente no estaban presentes y cuyos orígenes y alcances trataremos de explicar.

Los planteamientos de 1980 constituyen una ruptura teórica con la ortodoxia de la "vía pacífica". Ahora se ampliaba el horizonte táctico, reconociendo que era necesaria la flexibilidad para adecuarse a cualquier situación, y aún más, reconociendo el valor estratégico e indisoluble del aspecto militar en relación a la política. Esto se iría aclarando y desarrollando más tarde, junto con lo que después se llamaría "la política de la rebelión popular".

Este cambio formaba parte de un proceso de readecuación que venían experimentando el conjunto de los partidos políticos chilenos fundamentalmente a partir de 1979. Este proceso pre-

tendía ser una respuesta a los cambios que la dictadura implementaba: las modernizaciones que comenzaron a aplicarse a partir de 1978 y los inicios del proceso de institucionalización política que culminaría con la aprobación de la Constitución.

Pero había también otros hechos que era necesario interpretar. Se vivía un momento de auge del modelo económico implementado por los ejecutivos neoliberales, lo que atraía a importantes sectores de las capas medias. Desde 1977 hasta 1980 el PGB creció a tasas superiores al 8%⁽¹⁾ y el desempleo disminuyó del 14.8% en 1976 al 11.8% en 1980;⁽²⁾ el enorme aumento de las importaciones hizo crecer la disponibilidad de mercancías y por primera vez desde 1973 el sector de la construcción experimentaba un notorio repunte. Esta bonanza duraría hasta mediados de 1981 -cuando todos los indicadores sufren una caída estrepitosa-, pero mientras contribuía a dificultar la acción opo-
sitara.

Este cuadro, analizado en su conjunto, otorgaba un triste saldo para la oposición: la dictadura se consolidaba y los iniciales diagnósticos sobre su pronta caída se evidenciaban erróneos. Se hacía necesario entonces rediseñar estrategias y tácticas para enfrentar a un enemigo que, contrariamente a lo que se creía al comienzo, no se mantenía en el poder sólo gracias a la dispersión opositora. Aun superando coyunturalmente los desacuerdos y actuando mancomunadamente, la oposición no lograba asestar golpes significativos al régimen.

Para la izquierda, este proceso de readecuación signifi-

có una transformación profunda tanto de los planteamientos de ca da partido por separado, como de las relaciones entre ellos.

Si la derrota sufrida en 1973 no había significado claras rupturas al interior del bloque de la UP, ello se debió fundamentalmente a que el debate de las causas que la habían provocado fue postergado en aras de enfrentar la represión, concitar la solidaridad internacional e iniciar la lucha que se esperaba iría a ser más bien breve. (3) Sin embargo, en 1980 y a la luz de los hechos que hemos reseñado, la clarificación de posiciones era inevitable. Sin duda, tanto las experiencias vividas en los tres años del gobierno popular como la nueva realidad que emergía después del golpe militar, serían interpretados de distintas formas en el seno de la izquierda.

El primer indicador de estas profundas diferencias de apreciación lo constituyó la división del PS acaecida en abril de 1979. De los dos bloques que allí surgieron se desprenderían en el futuro una serie de nuevas fracciones y subfracciones que, si bien no siempre expresaban diferencias sustantivas eran, no obstante, reflejos de la confusión reinante al interior de la izquierda. (4)

Desde luego, la inoperancia de la UP como alianza efecti va a lo largo de todos estos años, y su virtual desaparición en septiembre de 1981, constituía también una expresión de las re- adecuaciones que enfrentaba el conjunto de la izquierda y de su imposibilidad para resolverlas en los marcos que se había fijado hasta 1973. (5)

El PCCh intentaría hasta el último momento reafirmar la validez de la UP expresando que el éxito de la alianza con la DC dependía de la fuerza unitaria de la izquierda. Esta sería la garantía de que en el Frente Antifascista predominaran los intereses populares y que éstos no perdieran su perfil como proyecto autónomo.

Sin embargo, y sin proponérselo, los propios cambios del PCCh anunciados por Corvalán en 1980, contribuirían a definir posiciones y clarificar estrategias dentro de la izquierda. A partir de entonces, la lenta pero progresiva separación de ella en dos bloques se iría haciendo cada vez más nítida y se consolidaría en mayo de 1982 cuando un grupo de partidos, autodenominado "Convergencia Socialista", emite su primer documento.⁽⁶⁾ Pocos días después se conocería una declaración del resto de los partidos que habían integrado la UP, entre ellos el PCCh, y que si bien no se declaraban un bloque, expresaban una serie de similitudes que desde entonces y hasta ahora los diferenciarían de la llamada Convergencia.⁽⁷⁾ Entre ellos por cierto se encontraba el MIR, que no había formado parte de la UP.

Los factores de división entre estas dos nuevas agrupaciones de la izquierda son básicamente tres: la definición del tipo de socialismo que se persigue, la relación entre los partidos y el movimiento social y, finalmente, las cuestiones tácticas de la lucha antidictatorial.⁽⁸⁾ En cuanto al primer punto, mientras la Convergencia se levantaba como crítica del socialismo real y exigía una mayor precisión del proyecto a futuro, el

otro sector soslayaba una definición acabada del tipo de socialismo que buscaba, en aras de priorizar los acuerdos políticos y de enfatizar que finalmente el tipo de socialismo en Chile se definiría históricamente.

El que el PCCh no enfrentara ideológicamente la discusión acerca del tipo de socialismo que persigue se debía a su adscripción -en el campo de las relaciones internacionales- a las políticas de la Unión Soviética y a su defensa acritica del sistema socialista mundial. Otra causa -ésta de carácter táctico- alude a la idea de que una polémica de este tipo retardaría la necesaria unidad en la izquierda, interponiendo un obstáculo.

En cuanto a la relación entre partidos y movimientos sociales, la Convergencia postulaba una mayor autonomía de éstos en relación a los primeros mientras que el segundo bloque rescataba el rol dirigente de los partidos de izquierda en la sociedad civil. Hay que recordar que los partidos que integraban la Convergencia eran en general pequeños y tenían un arraigo de masas mucho menos considerable que el de la izquierda histórica. Más tarde se demostraría que el movimientismo que ellos propugnaban no cuajaba con la realidad. A pesar de haber desaparecido la relación de los partidos con el Estado, como intermediarios, la tradición histórica chilena hacía que los partidos siguieran siendo la forma fundamental en que las clases se reconocen como tales y perfilan su propia identidad. Finalmente, la Convergencia no postulaba formas violentas de lucha contra la dictadura,

diferenciándose de la posición rupturista del segundo grupo.

Pero bien, ¿cuáles eran los hechos centrales que motiva ron al PCCh a elaborar los planteamientos de 1980? En primer lugar el diagnóstico que se hacía de la labor del régimen: el poder había sido centralizado fuertemente por Pinochet y su cama rilla cívico-militar al servicio de la oligarquía financiera y las empresas transnacionales. El PCCh constataba así la absolu ta imposibilidad de una apertura por parte del régimen que des- brozara el camino hacia una transición real a la democracia. ⁽⁹⁾ Cualquier conquista democrática, por pequeña que fuera, debía ser arrancada al régimen a través de la lucha de masas de carác- ter rupturista, y ésta debía incluir formas de "violencia aguda". Entonces el PCCh diagnosticaba la situación política afirmando que lo más probable sería una salida violenta que desencadenara la crisis del régimen hacia su fin.

Sin embargo, a pesar de ello, el PCCh afirmaba que no ne gaba a priori la posibilidad de una salida pacífica si ocurría un cambio en la situación. Aquí trataba de no caer en la inflexi bilidad anterior respecto a una vía señalando que, a pesar de ver la salida violenta como la más probable y la más segura des- de el punto de vista de salvaguardar los intereses populares, mantenía su táctica abierta a los posibles cambios futuros.

En segundo lugar, el repunte de la movilización de masas y los frutos de la labor de revinculación que hemos señalado en el capítulo anterior, eran interpretados por el PCCh como claras señales de una mayor decisión de lucha, sobre todo en los secto- res más pobres de la sociedad. La oposición no sólo se amplia-

ba en términos de clase sino que se mostraba más activa y decidida. Tratando de potenciar el nuevo factor subjetivo que aparecía en la situación, los planteamientos de 1980 constituían más que una proposición inmediata de un plan de derrocamiento, una convocatoria a cerrarle el paso a las ilusiones constitucionalistas y gradualistas que pudieran surgir del centro.

Las conclusiones que se habían extraído de la experiencia de la UP también constituyeron un factor de peso en los planteamientos de 1980: para asegurar el rumbo democrático y revolucionario en un proceso de cambios era necesario contar con una fuerza militar, tanto propia como de masas, capaz de pesar en la situación política y, si era el caso, decidir la derrota de la contrarrevolución.

Finalmente, entre los factores que incidieron en la formulación de los planteamientos de 1980, se encuentra la actitud excluyente de la DC, que se negó sistemáticamente a establecer el acuerdo político que el PCCh propugnaba. Buscando la división de la izquierda en dos bloques, declaraba que sólo podría llegar a un acuerdo con un sector de ella, el "democrático", compuesto por la Convergencia Socialista y sus grupos afines. De hecho, estos sectores se iban alineando cada vez más hacia una posición de centro y la estrategia de la negociación comenzaba a aparecer como una sólida alternativa contra el planteamiento del PCCh. "La dispersión de las fuerzas antifascistas" considerada por el PCCh como el factor principal de mantenimiento de la dictadura,⁽¹⁰⁾ amenazaba hacerse definitiva, vislumbrándose al final del camino una salida democrático burguesa -más

burguesa que democrática- hegemonizada por los sectores derechistas de la DC que iban concitando consenso al interior de su partido.

De este modo el PCCh pensaba que era necesario fortalecer las posiciones de los sectores populares, y que el componente militar podría pesar a su favor en la correlación de fuerzas si lograba impulsar las luchas combativas de masas. Así, el análisis en su conjunto concluía que era imprescindible elaborar una estrategia de derrocamiento de la dictadura que fuera eficaz contra la fuerza que ésta mostraba en todos los planos y que aprovechara la potencialidad combativa que mostraban los sectores sociales.

Los planteamientos de 1980 no aparecieron como un llamado directo a la lucha armada, sino como el reconocimiento de la necesidad de incluir este tipo de formas en el amplio abanico de las acciones opositoras. Lo fundamental sería, se dice, no aislarse de las masas y avanzar por este camino con ellas. En el discurso de Moscú, Corvalán afirma:

Se cierran los caminos para la evolución gradual con que algunos han soñado. En estas circunstancias no tenemos dudas de que el pueblo de Chile sabrá encontrar el modo de sacudirse del yugo de la tiranía... Las masas irrumpirán de una u otra manera hasta echar abajo al fascismo... El derecho del pueblo a la rebelión pasa a ser cada vez más indiscutible... el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso la violencia aguada, para defender su derecho al pan, a la libertad, a la vida. (11)

Más adelante el concepto de rebelión popular iría adqui-

riendo mayor precisión y determinaría el inicio de una polémica sobre lo que algunos han llamado el "vacío histórico" del PCCh en relación a su línea política.⁽¹²⁾

A pesar de que la dirección del partido presentó los planteamientos de 1980 como una "complementación" de la línea política que no la modificaba sustancialmente ya que no alteraba ni su proyecto de revolución ni su política de alianzas, pensamos sin embargo que dichos planteamientos, si bien no constituyen un viraje -como veremos-, abren sin duda cambios profundos.

En primer lugar, el respaldo a formas de lucha armadas o de "violencia aguda" implicaba la ruptura como una larguísima tradición de rechazo a otros medios que no fueran los pacíficos, tradición que hacía honor a la cultura política chilena formada durante más de 40 años. En ningún momento de su historia, ni bajo la dictadura de Ibáñez en los años veinte,⁽¹³⁾ ni cuando la ofensiva reaccionaria lo llevó a la ilegalidad en 1947, el PCCh había aceptado la validez o utilidad de la lucha armada en las condiciones concretas de Chile. Cuando en algún momento de agudización de la lucha de clases y recrudecimiento de la acción reaccionaria o contrarrevolucionaria, algún dirigente o fracción del partido planteó la necesidad de implementar formas de lucha armada, o prepararse para ellas, la dirección del partido había reaccionado, invariablemente, con severas medidas disciplinarias contra los propugnadores de esta política, llegando en muchos casos a la expulsión.⁽¹⁴⁾

A los casi 59 años de existencia, era la propia direc-

ción del partido la que planteaba este cambio, pero no por ello dejó de causar profunda conmoción y discusiones internas. Si bien es cierto que entre las conclusiones de la experiencia del período 1970-73 se encontraba la cuestión militar, esto nunca ha bía sido planteado como una tarea inmediata. Fueron necesarios 7 años para que se estableciera la necesidad de enfrentar a la dictadura también por las armas.

Pero no se trataba de un cambio profundo únicamente porque rompía con una enquistada tradición, sino también porque implicaba, en la coyuntura política del momento, una opción de alcances trascendentes. Al asumir formas de lucha rupturistas, el PCCh optaba por una "salida revolucionaria", es decir, no pactada con la dictadura.⁽¹⁵⁾ Anteriormente, el PCCh guardaba esperanzas de poder llegar a un entendimiento con ciertos sectores de las FF.AA. que se desprendieran del liderazgo pinochetista tras una amplia movilización de masas. A pesar de que esa posibilidad no ha sido nunca descartada, los nuevos planteamientos vislumbraban por primera vez la posibilidad de lograr, a mediano o largo plazo, la derrota político-militar del régimen, con lo cual el PCCh planteaba la destrucción del aparato estatal (en primer lugar de su aparato represivo) como una tarea de primer orden. Ello permitiría abrir mayores posibilidades para la construcción de un nuevo poder y una nueva democracia.

Finalmente, la profundidad de los cambios planteados se puede medir en el hecho de que el PCCh abría un nuevo terreno para la confrontación hegemónica: el terreno militar. En este campo, no poseía prácticamente ninguna experiencia y debía por

lo tanto resolver una serie de cuestiones prácticas que implicaban introducir modificaciones en el funcionamiento tradicional de las instancias partidarias. (16)

Los efectos que produjeron estos nuevos planteamientos alcanzaron a toda la oposición, que comenzó a debatir el tema de la legitimidad de la violencia, el posible uso de la desobediencia civil y la rebeldía popular.

En cuanto a su política de alianzas, el PCCh la mantenía y reafirmaba. Esperaba que surgieran nuevas dificultades con el centro político, pero a la vez pensaba que una posición más clara y autónoma contribuiría no sólo a revitalizar el proyecto popular sino también a negociar sus posiciones con mayor fuerza. Era indudable, sin embargo, que la política de rebelión popular dificultaba la alianza hacia la derecha, pero, por el contrario, hacia la izquierda la ampliaba. Los sectores anteriormente llamados "ultras", representados básicamente en el MIR y algunos grupos socialistas, se convierten, a partir de este momento, en sujetos de alianza. La inclusión oficial del MIR en el bloque de la izquierda se hizo pública en 1981, cuando este partido firmó la declaración conjunta de "todos los partidos de la izquierda" que marcó el fin de la UP. La unidad del PCCh con el MIR se iría fortaleciendo con el tiempo, dejando atrás las mutuas acusaciones de "ultraizquierdistas" y "reformistas", y reemplazándolas por la discusión ideológica propia de dos aliados.

Otro de los efectos que produjo la declaración de la política de rebelión popular, fue que al interior del PCCh se can-

celó la vieja discusión sobre las vías de la revolución. Desde 1980 hasta la fecha el partido propicia el uso de todas las formas de lucha en las condiciones actuales de Chile articulando las llamadas "tradicionales" con las violentas. Estas últimas serán emprendidas tanto por grupos especiales como por las organizaciones populares que hacen suya la autodéfensa de masas como un derecho legítimo frente a la tiranía.

De este modo, se asume que serán las condiciones concretas de la coyuntura política las que indicarán los medios de lucha a emplear y no una definición abstracta a priori. De ahí que en el debate subsiguiente el PCCh niegue que haya optado por la "vía armada" (cosa que por lo demás nunca ha proclamado) o que pretenda "militarizar" la política. Se trataría según la versión oficial, simplemente de añadir y complementar la lucha de masas con el uso de formas violentas que permitan avanzar a la oposición y golpear con mayor efectividad a la dictadura.

Como hemos dicho, la dirección del PCCh hace todo lo posible por evitar que los planteamientos de 1980 se interpreten como un viraje, como el abandono de la lucha de masas o el paso a una posición intransigente. Y de hecho no son ninguna de estas cosas. A pesar de que sí representan un cambio sustancial, que afecta al conjunto del partido -como hemos demostrado más atrás- éste no debe interpretarse como un viraje si entendemos por tal un cambio radical, brusco y completo, que niegue la evolución anterior revolucionándola en su totalidad. De hecho, el PCCh no reniega de su anterior política. El trabajo de masas continúa siendo subrayado como la forma fundamental de vincula-

ción entre el partido y la sociedad civil. Es por lo tanto el grado de inserción de aquel en ésta -en sus organizaciones, en sus luchas reivindicativas, etcétera- lo que constituye la esencia misma del ser partido para el PCCh. El hecho de postular que el movimiento de masas y/o el partido puedan asumir formas de lucha violenta o armada, no modifica en nada esta definición cualitativa.

La política de alianzas tampoco es modificada por el planteamiento del PCCh, a pesar de que implícitamente la acción propia se independiza de la posibilidad de lograr acuerdos en la cúpula, enfatizando la capacidad de crear hechos políticos en las bases sociales.

En cuanto a la estructura orgánica, ésta no sufre modificaciones sustantivas. En lo medular, el partido sigue funcionando del mismo modo que hemos reseñado anteriormente.

Conviene comparar aquí la evolución del PC salvadoreño ya que se trata de un caso similar, con la diferencia de que allí el propio partido declara que los cambios emprendidos en su línea política constituyen un verdadero y profundo viraje. Toda su estructura orgánica fue modificada a fondo para adaptarse a las necesidades de la lucha armada, fusionando a las juventudes con el partido, haciendo de las células unidades de combate y del secretario general el comandante en jefe del brazo armado del partido, las Fuerzas Armadas de Liberación. Pero no sólo eso. En el caso del PC salvadoreño, éste abandonó una antigua alianza con la DC para reforzar sus vínculos con la izquierda

que hasta ese momento eran sólo incipientes. Se trata pues de un verdadero viraje: el conjunto del partido proclama una estrategia insurreccional abiertamente y se vuelca en su totalidad a esa tarea. (17)

Si bien no es casualidad el hecho de que estas modificaciones se experimenten en tiempos cercanos (18) al caso del PCCh, como hemos visto, es bastante diferente. A pesar de que algunas acciones de sabotaje (que sin gran seguridad pueden ser atribuidas al PCCh) comenzaron ya en noviembre de 1980, la discusión al interior del partido y la precisión de la línea como producto de esta discusión, tiene una duración de varios años. Este tiempo se emplea también en la discusión ideológica al exterior del partido buscando legitimar ante las masas y ante las de más fuerzas políticas, los nuevos lineamientos. No es sino hasta 1983, con el comienzo de las Jornadas de protesta, cuando esta política adquiere proporciones notorias e importantes en el ámbito político chileno, produciendo frutos visibles.

Según el propio PCCh lo afirma, se trata de un "proceso gradual, ascendente, escalonado" que debía posibilitar "ir midiendo acertadamente el poderío del ejército chileno y el de nuestras propias fuerzas", evitando "acciones descabelladas" que aislen al partido de las masas. (19)

Esta gradualidad podemos explicarla básicamente por la necesidad que tiene el PCCh de conservar su unidad interna, y el convencimiento de que este rasgo es una de sus mejores virtudes que no puede, bajo ningún pretexto, alterarse. 58 años representaban una larga tradición "mental", orgánica e ideológica

que favorecía las formas pacíficas de lucha, y durante la cual se libraron implacables batallas contra todo lo que pudiera parecerse a "ultraizquierdismo", "violentismo" o "militarismo". Esta tradición que significaba una larga historia de rechazo a la violencia como forma de lucha política, impedía un giro brusco en el PCCh que pudiera deslegitimar su propio pasado o producir serios cuestionamientos en sus bases. La historia latinoamericana demuestra que, al enfrentar coyunturas semejantes, la división, el fraccionamiento y las líneas políticas paralelas, son posibilidades reales a que se vieron enfrentados varios partidos comunistas del continente. (20) Y esa es la historia que el PCCh no quiere repetir.

El acuerdo interno se hace tanto más necesario cuanto los planteamientos de 1980 no surgen de un congreso o de una equivalente discusión en las bases del partido, sino como una conclusión de su dirección que, independientemente de las opiniones que generara, por lo general sorprendieron a la mayoría de la militancia.

Por ello la dirección del partido insiste en un documento interno, fechado en 1980:

No hay cambio en nuestra línea política de unidad más amplia y lucha combativa de las masas. No hay cambios de estrategia ni de táctica. Se trata de completar nuestra táctica, de corregir insuficiencias (...). No estamos por el foquismo ni por prácticas aventureras (...). Aspiramos a generar un movimiento de mayoría nacional que pueda incluir a la DC y a la Iglesia. (21)

Si bien resulta bastante ilusorio plantear que la DC se

iba a sumar a la política del PCCh -máxime si no se había logrado la alianza cuando el PCCh no planteaba aún la cuestión de la utilización de la violencia- esto debe entenderse como una ratificación de los puntos centrales de la política anterior (unidad amplia y lucha de masas), recalcando que no hay "ruptura" o "viraje".

Precisamente porque los planteamientos de 1980 no constituyeron un viraje sino el inicio de un proceso gradual es que al PCCh careció entonces de una propuesta clara y definida de cómo llevar a la práctica el objetivo de derrocamiento que se proponía. En otros casos similares en América Latina, cuando partidos o movimientos de izquierda asumen la lucha armada como una necesidad históricamente determinada, lo hacen partiendo de un plan estratégico y táctico definido que comprende el tipo de derrocamiento que se espera y busca, el rol que jugará en ella el partido y cuáles son las formas de lucha que adquieren mayor preponderancia. Al respecto los ejemplos sobran: la guerra de guerrillas en Cuba; el foquismo de los movimientos guerrilleros de varios países (como es el caso de Bolivia, Perú, Argentina, entre otros); la estrategia insurreccional de un sector del FSLN de Nicaragua o la de guerra popular prolongada de otro, etcétera. Contrariamente a estas experiencias, el PCCh no entrega inicialmente un plan concreto y claro. Intenta nada más, que las nuevas formas sean consideradas por el movimiento social y por sus propias bases partidarias, sin hacerles una proposición articulada. De este modo se limita a constatar que "los métodos de lucha -llamémosle tradicionales- puestos en práctica no son sufi

cientes para enfrentar con éxito a la tiranía (...) Y menos para terminar con ella".⁽²²⁾ De aquí el lector debería inferir un plan, ya que no se propone explícitamente, o esperar que la propia política del PCCh empezara a traducirse en hechos -lo que comenzaría a ocurrir más tarde- a través de las "acciones desestabilizadoras". Estas consistían, entre otras, en actos de sabotaje, apagones de energía eléctrica mediante la colocación de explosivos en torres de alta tensión o interferencias de radio y televisión para transmitir proclamas.⁽²³⁾

La ambigüedad o indefinición de un plan de derrocamiento en esta etapa tiene varias causas. En primer lugar pensamos que se debe a que el propio partido -incluida, claro, su dirección- empezaba a leer la sociedad de otra manera y por lo tanto se hacía necesario dejar que el tiempo contribuyera a madurar la situación y las ideas. Las respuestas no estaban dadas. Se entendía la necesidad de enfrentar los cambios en la línea política, pero no se sabía aún bien cómo hacerlo ni a través de qué formas.

En segundo lugar se concebía la tarea militar como un apoyo: las acciones desestabilizadoras sólo tendrían un carácter defensivo tendiente a mantener viva la presencia de la izquierda⁽²⁴⁾ y, sobre todo, a producir confianza y credibilidad en las masas. En este caso un plan definido de derrocamiento era innecesario. Pero también influyen otros factores que están relacionados con una particular interpretación de la tradición política chilena.

La profundidad y larga tradición del sistema de partidos en Chile y el hecho de que ellos respondieran a sectores de clase y tuvieran por tanto una fuerza real, implica que, en general, la sociedad cuenta con pocos fragmentos "vacantes". Es decir, mayoritariamente, la población si no milita, adscribe a la línea de un partido, a la tradición que representa, a sus postulados y a la imagen de sus líderes. Si bien es cierto que este fenómeno se vio modificado por el debilitamiento del sistema de partidos -dada su desaparición en términos legales lo que podría haber aumentado la "vacancia" partidaria en la sociedad civil- en lo medular se mantiene y tiende a reproducirse en lo que se ha llamado "los tres tercios de la política chilena".⁽²⁵⁾

Este hecho marca una diferencia con otros casos de América Latina donde las posiciones rupturistas de determinados movimientos tuvieron una relativamente rápida y mayoritaria adscripción de la población. Tal es el caso de Cuba y Nicaragua, donde tanto el Movimiento 26 de julio como el FSLN consiguen un apoyo abrumador debido a que su propuesta cae en un terreno partidario vacante, lo que le permite canalizar la disponibilidad al cambio, presentándose como única alternativa viable.

La vigencia del sistema de partidos en Chile hace en cambio que la interpelación a la sociedad se convierta rápidamente en una interpelación a otros partidos políticos. Es decir, el rol de las alianzas y de la labor ideológica se ve acrecentado por el hecho de que la vacancia partidaria es poco relevante.

El que los planteamientos de 1980 pusieran en re-

lieve formas de lucha ajenas a la tradición política de la sociedad civil, podía significar el peligro de que el PCCh se viera aislado. Si a ello sumamos una actitud excluyente del centro y el progresivo acercamiento de una parte de la ex UP hacia sus posiciones, el riesgo era mayor.

El PCCh se sigue considerando parte actuante del sistema de partidos y su marginación de él le significaría una enorme pérdida de legitimidad. Es por ello que, a pesar de la radicalidad de sus posiciones, sigue considerando la amplia unidad expresada en acuerdos entre diferentes partidos, como parte necesaria, sino imprescindible para alcanzar su objetivo de derrocamiento. Además, el debilitamiento de la influencia del PCCh provocado por los largos años de represión, y una evaluación más bien negativa de las propias fuerzas, influye también en que el partido siga considerando el acuerdo político como fundamental. Prefiere por tanto mantener cierta indefinición del programa de derrocamiento mientras el uso de formas violentas de lucha no ha ya sido legitimado, por el discurso y por los hechos, frente a los posibles aliados políticos y frente a las masas. De ahí que inicialmente sólo impulsara acciones militares de poca envergadura que tendieran sobre todo a demostrar su legitimidad y eficacia frente a las bases sociales.

La experiencia de la UP en el sentido de no aferrarse a una vía de modo exclusivo, también pesó en 1980. Antes que apostar todo a un plan determinado, se prefiere ahora dejar mayor margen para adaptarse a los cambios en la situación política.

A medida que va pasando el tiempo, el PCCh va afianzando su política. En primer lugar obtiene consenso al interior del partido, aunque se mantienen posiciones críticas. Pero más importante es que logra que los núcleos más activos del interior del país, ubicados en los frentes más dinámicos (como las organizaciones estudiantiles y poblacionales) le otorguen un apoyo activo a los nuevos planteamientos.

Otro factor preponderante es que el PCCh observa y sobre todo experimenta que los sectores populares a los que representa, hacen propia su política de rebeldía y comienzan a practicar de modo cada vez más conciente formas de lucha rupturistas, violentas y hasta armadas. Esto constituye para el PCCh el dato principal que le permitirá más adelante, a partir de fines de 1983, consolidar su política y, hacia 1985, ratificarla y proponer un plan definido de derrocamiento.

2. *La Irrupción de las Masas*

En 1983 el panorama estaba mucho más claro para toda la izquierda, habiéndose producido ya los necesarios deslindamientos. Pero faltaba aún el apareamiento de las nuevas agrupaciones orgánicas que expresaran estos nuevos hechos. Quedaba también por ver cuál sería la respuesta de los distintos sectores sociales y el apoyo que brindarían a las nuevas opciones. Precisamente es en este año cuando irrumpe el movimiento social en el escenario político y la oposición se hace pública, masiva y nacional.

En 1981, cuando el período de revinculación entre los partidos y la sociedad -del que hemos hablado en el capítulo anterior- se encontraba bastante avanzado, comenzaron a manifestarse los primeros indicadores de lo que sería la segunda crisis económica del período militar. Tanto la crisis como la revinculación y la expansión del tejido orgánico de la sociedad que ésta conlleva, fueron factores que influyeron en el estallido social de 1983.

En cuanto a la crisis económica, a pesar de que ésta posee un carácter mundial, Chile se ve especialmente afectado por la crecida dependencia de su economía respecto al exterior y por el reciente desmantelamiento de su industria. La hipótesis del equipo económico de la dictadura de que para salir de la crisis había que profundizarla, empeora la situación a un punto casi insostenible. En 1982 el PGB cae en un 14% respecto a 1981; el desempleo crece hasta llegar al 34.6% en 1983; (26) la escasez de créditos desde el exterior -primera manifestación de la crisis mundial- acarrea consecuencias graves como la devaluación de la moneda y la quiebra de varias instituciones bancarias.

La crisis económica produce una situación nueva en el orden político. El desprestigio del modelo aplicado y de sus responsables se generaliza. El problema se acrecienta al verse involucrados, en sonados escándalos financieros, numerosos representantes de la oligarquía o sus tecnócratas (algunos de los cuales han ocupado importantes cargos en el gobierno). El consenso que la dictadura había logrado entre distintos sectores de la burguesía, incluyendo la mediana y pequeña, se rompe así rápi

damente. Mientras estas últimas capas deben afrontar todas las consecuencias de la crisis y la posterior recesión, la oligarquía ve acrecentar su poder contando para ello con todo el apoyo estatal. (27)

Así, sectores de industriales, comerciantes, grandes y medianos agricultores, entre otros, pasan a criticar directamente la política económica del régimen, el que queda entonces con una base de apoyo muy estrecha. Dentro del propio sector gobernante se produce cierta agitación y se abre un debate sobre las alternativas para la crisis y sobre las formas de manejarla revelando la inquietud que provocaban la difícil situación.

Los sectores más perjudicados son, desde luego, las grandes masas de trabajadores que, o son arrojadas al desempleo o sufren la congelación de sus salarios con la consiguiente caída brutal de los ingresos reales. (28) El descontento popular, sin embargo, no encuentra cauce orgánico pues la nueva institucionalidad no contempla mecanismos de elevación de las demandas sociales hacia el Estado. Ni los partidos políticos proscritos, ni los sindicatos, ni ningún otro tipo de organización cuenta con posibilidades de asegurar la canalización de demandas de forma que éstas sean satisfechas o siquiera escuchadas. Ocasionales huelgas, declaraciones, mítines callejeros y otras expresiones de descontento sólo consiguen convertirse en objeto de represión sin lograr ningún resultado en relación a sus demandas.

En este marco es fácil comprender que el descontento social producto de la insostenible situación económica, se convier

ta rápidamente en descontento político y que para las grandes masas se plantee como una necesidad de primer orden cambiar al régimen. La falta de canales normales de representación de las demandas hace que éstas tengan que presentarse necesariamente en forma de estallido social, basado en reivindicaciones materiales, pero con un alto contenido político.

Es interesante hacer notar que en este caso la conversión de una crisis económica a crisis política -tal como la visualizaba Marx- se debe fundamentalmente a que se trata de una sociedad cuyas mediaciones han desaparecido. La relación entre la sociedad civil y el Estado se basa primordialmente en el uso o amenaza de la fuerza de éste hacia la primera, y fue esta fuerza la que destruyó desde arriba el conjunto de mediaciones que vinculaban a la sociedad con el Estado. Con ello queremos decir que la conversión no es necesaria sino que está relacionada con factores histórico-concretos que es imposible soslayar. Es relativamente aceptada la idea de que una sociedad con robustas mediaciones es más resistente a los movimientos cíclicos de la base económica. Sin embargo, la conversión tal y como la señalara Marx puede llegar a producirse en sociedades cuyos Estados demuestran un atraso, es decir, que no son capaces de mantener la dominación mediante la fórmula clásica de la democracia burguesa.

En un intento de potenciar el descontento popular, una serie de organizaciones políticas -entre ellas el PCCh- convocó a finales de 1982 y en marzo de 1983 a sendas "marchas del hambre". Estas manifestaciones callejeras, particularmente la

última, alcanzaron un número notablemente mayor de participantes en relación a otras anteriores y, sobre todo, mostraron que la disposición combativa de los sectores populares iba en aumento. Estos fueron los primeros intentos por hacer de la crisis económica un problema político y marcaron el inicio de una ofensiva generalizada contra la dictadura. Los pasos trascendentales para conseguir este propósito debían venir, sin embargo, de las más fuertes organizaciones sociales, en este caso del sindicato más poderoso del país. La crisis económica derivó entonces hacia una crisis política en 1983 debido a la total carencia del régimen de mantener un mínimo consenso. La amenaza y uso de la fuerza, factor central de su estabilidad, perdieron gran parte de su efectividad al tornarse en la vida colectiva de grandes masas, más fuerte la desesperación que el miedo.

El estallido de la crisis política tiene una fecha: 11 de mayo de 1983. Ese día los trabajadores de la gran minería del cobre⁽²⁹⁾ habían emplazado a huelga por una serie de reivindicaciones laborales. La movilización militar en los centros de trabajo en los días previos al paro hace temer, sin embargo, una masacre, por lo cual la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, retira su llamado a huelga y lo reemplaza por una "Jornada Nacional de Protesta". A este llamado se adhieren los partidos de oposición y un sinnúmero de organizaciones sociales y gremiales. La protesta consiste en manifestaciones callejeras, ruido de cacerolas y trabajo lento en las fábricas, entre otras medidas de fuerza. Se organiza de tal manera que toda la población pueda participar de una u otra forma, ya sea

en su casa, en su centro de trabajo o en la calle. Su envergadura es tal que no sólo sorprende al gobierno, sino que pronto se ve que ha rebasado la propia capacidad organizativa de las agrupaciones convocantes.

La protesta del 11 de mayo de 1983 cambia radicalmente el escenario político nacional. Por primera vez irrumpen en él grandes masas; la oposición al régimen ya no es protagonizada por pequeños sectores con determinados compromisos políticos, si no por una mayoría nacional. Dicha Jornada mostró también el extraordinario aislamiento político y social de la dictadura, al sumarse a la protesta amplios sectores de las capas medias y acomodadas que hacían sonar sus claxons y sus ollas desde el "barrio alto" de Santiago adhiriendo al descontento. Se demostró también el combativo estado de ánimo de los sectores más postergados, que levantaron barricadas en las "poblaciones callampas" enfrentándose resueltamente a las fuerzas represivas. El 11 de mayo se rompió con el miedo que impedía la masificación de la actividad opositora.

En estas circunstancias, el receso político impuesto por la dictadura es anulado parcialmente por la fuerza de masas que ha adquirido la oposición. Apoyándose en la nueva situación generada por las protestas y en una coyuntura internacional favorable (marcada por los procesos democratizadores en los demás países del cono sur), la oposición logra establecer espacios para el debate político abierto y una actuación menos embozada.⁽³⁰⁾ De esta manera, el sistema de partidos vuelve a adquirir vigencia, pero ahora en nuevas condiciones. Ya no pueden ser correas

de transmisión desde la sociedad civil hacia el Estado -siendo éste completamente cerrado- pero sí vuelven a adquirir su tradicional preponderancia como representantes de las distintas clases y capas de la sociedad chilena. La política, que antes se hacía por medio de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles o la Iglesia, comienza nuevamente a hacerse, públicamente, a través de los partidos. Ya hemos señalado que este hecho desmentía la hipótesis de que los partidos se habían vuelto ineficaces. Si bien esto es cierto en cuanto ya no encontraban un interlocutor en el Estado, no lo es en cuanto representaban un núcleo fundamental de recomposición del tejido social.

La reactivación de la actividad partidaria está vinculada al resurgimiento de las organizaciones sociales que, al comenzar a funcionar o ya tienen, o buscan nexos con los partidos con miras a verse representados por ellos. Esta retroalimentación le otorga a los partidos una base real de sustentación y representación de la sociedad civil.

Después del 11 de mayo, las jornadas de protesta se realizan mensualmente, convocadas por distintas organizaciones sindicales y gremiales. En ellas es posible percibir el alto grado de espontaneísmo de la participación de las masas que no responde, en su gran mayoría, a directrices organizacionales. Por otro lado crece el nivel de combatividad y los enfrentamientos violentos se hacen más frecuentes y virulentos, dejando un saldo de varios muertos en cada jornada.

En este contexto surge la necesidad de canalizar esta

irrupción de las masas y potenciarla hasta conseguir la derrota del régimen, la cual se ve, por primera vez en 10 años, como algo alcanzable. La alianza de distintos partidos se vuelve una necesidad reconocida por todos y el clima de agitación acelera el reagrupamiento político. Sin embargo, tal reagrupamiento no se produce unitariamente en función de la necesidad táctica de derrocar a la dictadura -tal como venía proponiéndolo el PCCh desde 1974- sino por arreglo a los proyectos estratégicos de las distintas fuerzas. Con ello fracasa en forma definitiva la política de Frente Antifascista y la intención del PCCh de hegemónizar -junto a otras agrupaciones de izquierda- un gran movimiento de "liberación nacional". En cambio se materializa la política de alianzas de la DC que propugnaba por un proyecto democrático burgués con la exclusión de los sectores más radicalizados de la izquierda.

La DC logra aglutinar en torno de sí a varios partidos que van desde sectores de la derecha que se han desprendido del régimen, hasta la socialdemocracia, para conformar la Alianza Democrática (AD) el 6 de agosto de 1983. A ella se sumarán un mes más tarde algunos partidos de izquierda que -como dijera Frei en 1975- "sostienen la posibilidad de un socialismo democrático" y que por lo tanto podían constituirse en parte de la alianza hegemónizada por la DC.

Frente al carácter excluyente de la AD, en la cual el PCCh aspiraba inicialmente a participar, se aceleraron los esfuerzos de los partidos de izquierda por consolidar un bloque único que le permitiera a ésta constituirse en una fuerza autónoma

ma de primer orden. Este conglomerado debía ser el Movimiento Democrático Popular (MDP), cuya formación oficial se anunció para el día 6 de septiembre de 1983. Sin embargo, en la fecha señalada, el anuncio de la formación del Bloque Socialista (BS) -conformado por el grupo Convergencia Socialista, el sector socialista de Briones, el MAPU y parte del MOC- y su posterior adscripción a la AD echó por tierra las esperanzas de una coalición más fuerte. Finalmente el 21 de septiembre se forma por fin el MDP integrado por el PCCh, el PS -sector Almeyda-, el MIR, la otra parte del MOC y el PS 24 Congreso-.

Para entonces algunos hechos políticos habían servido para explicitar los proyectos y las diferencias existentes entre los distintos bloques. Por un lado, recién conformada la AD ésta se propuso iniciar un diálogo con el gobierno a fin de que éste aceptara el paso hacia una transición controlada. El diálogo AD-gobierno se llevó a efecto a través del recién nombrado ministro del interior, Sergio Onofre Jarpa.⁽³¹⁾ Jarpa asumió su cargo en el gabinete el mismo día en que se iniciaba la cuarta protesta nacional, cuyo sangriento saldo fue de 26 civiles muertos por las fuerzas represivas del régimen. A pesar de su orientación fascistoide, Jarpa representó en ese momento a un sector del gobierno que pretendía iniciar una leve apertura que permitiera, por un lado, ganar tiempo frente a la ofensiva opositora que se expresaba crecientemente en combativas y concurridas protestas y, por otro, institucionalizar la transición a la democracia garantizando la exclusión de la izquierda a cambio de la

salida de Pinochet en 1989, que asegurara la consolidación del régimen autoritario consagrado en la Constitución de 1980.

Sin embargo el sector continuista que aboga por la reelección de Pinochet en 1989 logró evitar que Jarpa llegara a algún copromiso efectivo con la AD, razón por la cual el diálogo fracasó rápidamente, aunque mientras favoreció la desmovilización social y creó falsas expectativas en la población. Este hecho sirvió para demostrar que el sector representado en la AD estaba dispuesto a transar con el régimen sobre la base de la exclusión. Mientras, los partidos que pocos días más tarde formaban el MDP, denunciaron desde el principio el carácter ficticio, excluyente y antidemocrático de un diálogo que pretendía basarse en la componenda y no en la movilización activa de los sectores sociales.

Pero no fue sólo el diálogo AD-gobierno lo que clarificó las posiciones de los distintos bloques ante la opinión pública. También contribuyó a ello el hecho de que durante la quinta protesta (realizada el 8 de septiembre de 1983) y recién cortado el diálogo, la AD llamara a sus bases a protestar pacíficamente mientras en las poblaciones los sectores populares debían organizarse para enfrentar la dura represión que se focalizaba contra ellos. Allí las barricadas duraron varios días, hubo 5 muertos y numerosos heridos. A pesar de que el diálogo había constituido un rotundo fracaso, la AD se negaba a apoyar el uso de todas las formas de lucha que propugnaban los sectores del MDP, interponiendo razones éticas como el principal obstáculo para la unidad opositora.

Sin embargo, para el PCCh, el alto nivel de combatividad de los sectores populares, evidenciado en estas movilizaciones, lo llevan a ratificar, ampliar y precisar su política de "todas las formas de lucha". Aclarando que la reticencia del centro al uso de la violencia o la autodefensa, no constituía un problema ético sino un pretexto que pretendía ocultar el temor de una salida democrática avanzada, el PCCh persiste en apoyar cualquier manifestación que acelere la caída de la dictadura, pacífica o violenta. A pesar de que abandonó pronto las referencias a una posible insurrección como salida más probable, puso en el centro de su política la cuestión del derecho a rebelión y sublevación como necesidad legítima del pueblo frente a las tiranías. Por otro lado se abocó a la tarea de organizar y reforzar la autodefensa de masas y su militancia, integrada activamente a las movilizaciones de los diversos sectores sociales, jugó un papel de apoyo en la defensa de recintos universitarios y poblacionales.

Pero el PCCh debía resolver la cuestión militar ¿Cuál era el peso que el partido le daría ahora a este elemento? ¿Cómo enfrentar consecuentemente la política de rebelión popular y uso de todas las formas de lucha? ¿Tendría el partido que convertirse en una organización político-militar o formaría una fuerza de apoyo? Estas y otras interrogantes surgían al calor del renovado movimiento de masas. Si bien muchas de estas dudas aún no están resueltas históricamente, intentaremos aproximarnos al tema.

En diciembre de 1983 se funda el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Se trata de una organización clandesti-

na -que toma el nombre de un guerrillero de la época de la Independencia- que se propone enfrentar por las armas a la dictadura y declara su pretensión de convertirse en la vanguardia armada del pueblo de Chile. En lo político reconoce la dirección de los partidos, afirmando que sólo se propone otorgar la dirección técnico-militar que el pueblo necesita, ya que de hecho ha comenzado a asumir formas rupturistas de lucha.

El FPMR plantea que su objetivo principal es el derrocamiento de la dictadura y aboga por una salida democrática avanza da que destruya, en lo económico, político y social, las bases represivas y antipopulares del régimen. Asimismo, al nacer, el FPMR afirma que aspira a convertirse en una organización amplia que canalice la lucha en el plano militar contra la dictadura, congregando a combatientes de distintas corrientes ideológicas o pertenencias partidarias. Se proclama además, contrario a la militarización de la política, afirmando que los medios militares sólo constituyen un complemento de la actividad partidaria y que no deben en ningún momento suplantar la lucha de masas sino contribuir a su despliegue y efectividad.

Si bien el PCCh no reconoció -ni lo ha hecho hasta ahora- vínculos orgánicos con el FPMR, pensamos que los planteamientos de este último corresponden a la política del primero. Para comprobar -al menos- la paternidad ideológica comunista que le atribuímos al FPMR podemos señalar varios hechos.

El más importante de ellos es la coincidencia que ambas organizaciones mantienen acerca del rol de lo militar en las con

diciones concretas de Chile. Tanto el PCCh como el FPMR abogan por una "sublevación nacional", es decir, por un amplio movimiento de masas que, con apoyo militar, pueda poner en crisis a la dictadura pinochetista. La lucha armada no jugaría el rol principal sino que estaría subordinada al movimiento de masas, colaborando a su ascenso y efectividad. Esto quiere decir que el elemento central que se visualiza en el desencadenamiento de la crisis -tanto para el PCCh como para el FPMR- es el político. Lo militar jugaría un rol de apoyo y, en determinadas circunstancias, su función sería decisiva.

En segundo término, a pesar de que el FPMR no reconoce vínculos con ninguna política determinada, apoya el proyecto de "democracia avanzada" que postula el PCCh. Por otro lado es evidente que no responde a la política del centro ni de los partidos políticos de izquierda que se oponen al uso de formas de lucha armadas. Otro hecho que permite relacionar al PCCh con el FPMR son las reiteradas alusiones en los documentos del primer acerca de la necesidad de constituir, en el terreno militar, una fuerza propia. Lo más probable es que el propio FPMR sea la respuesta a esas inquietudes.

El hecho de reconocer la conducción político-social de "los partidos políticos" y autoproclamarse como una organización autónoma implica, en la práctica, asumirse como una organización armada de apoyo a una línea política que no es elaborada por el propio FPMR. Su acción se debe orientar, por lo tanto -si estamos en lo cierto- por la política militar del PCCh, es

decir, por su evaluación de las condiciones para hacer uso de unos u otros medios de lucha determinando cuáles deben ser los predominantes y cuáles los subordinados.

Lo anterior tiene dos implicaciones importantes. La primera es de carácter histórico, es decir, está condicionada por la situación nacional específica y alude al papel subordinado que se le otorga a la lucha armada en relación a la lucha político-social de masas. Esto queda claro cuando se analizan el tipo de acciones que lleva a cabo el FPMR. Se trata de acciones desestabilizadoras, de apoyo al movimiento de masas, tales como apagones (provocados, como hemos dicho, por la voladura de torres de alta tensión), protección y defensa de mitines y jornadas de protesta, sabotajes a industrias, acciones propagandísticas, entre otras. Sólo mucho más tarde se comenzaría a enfrentar directamente a las fuerzas militares del régimen.

La segunda implicación es de tipo teórico. Al proclamar que se carece de una línea política propia (y que ésta la elaboran otros organismos, especializados en ello y además idóneos) se está aceptando la idea de que las acciones armadas son "apolíticas", separando lo político de lo militar. Parece claro que esto es imposible y además encubre una contradicción con el propio discurso del FPMR que aboga por la "sublevación nacional".

Una señal de la imposibilidad de mantener y desarrollar una división tajante entre lo político y lo militar son las precisiones que ha ido haciendo el propio FPMR posteriormente y que

tienden, si no a convertirlo en una organización político-militar, sí al menos a lograr una mayor definición en sus objetivos y proyectos. De otro modo, la convocatoria a participar en una instancia puramente militar y políticamente neutral, no parece tener ningún eco ni en los demás partidos, que ven en ello una turbia contradicción, ni en las masas que detrás de su sacrificio no alcanzan a ver el perfil de un proyecto claro.

En realidad, el FPMR responde -quiera o no- a una determinada política. Esta se puede sintetizar en tres características: reivindicación e impulso de todas las formas de lucha, tanto políticas como militares; salida rupturista al régimen; y conformación de un frente militar antidictatorial, amplio y de apoyo. El llamado a constituir un organismo amplio en el plano militar podría tener cabida si el FPMR se autoprogamara portador de un determinado proyecto a futuro, que pudiera ser puesto en discusión. Recordaríamos que no es posible hacer una separación entre dirección técnico-militar y lucha política de masas. Históricamente, en todos los procesos de liberación vemos que ambos aspectos han ido juntos y que uno se subordina a otro según las condiciones concretas.

Con la aparición del FPMR y el repunte de la movilización de masas, 1984 se inicia con el panorama político redefinido. Por un lado la oposición se ha hecho masiva y pública; por otro, nuevas alianzas y bloques han aparecido contribuyendo a aclarar el panorama y a delimitar los proyectos. La sociedad vive un renacimiento organizativo y propositivo.

Ejemplo de ello es el resurgimiento de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) que había sido proscrita por el régimen en 1973, pero que para entonces contaba con una larga tradición de lucha democrática que 11 años más tarde los universitarios decidieron retomar. En el plano sindical también se vive un florecimiento de nuevas organizaciones y se pone en la discusión el problema de la refundación de una central única de trabajadores que agrupara a todos los sindicatos del país, lo que, si bien no se logra, consigue motivar la discusión y el reagrupamiento de los trabajadores. (32)

En cuanto al florecimiento propositivo, podemos señalar que el conjunto de las organizaciones políticas y sociales vive con una etapa de debates en cuanto a sus peticiones sectoriales, y sus proposiciones para el funcionamiento de un nuevo orden democrático. Fruto de ello fueron el documento del MDP titulado "Bases para un gobierno provisional" y las "24 exigencias mínimas" que en una gran manifestación pública presentara el Comando Nacional de Trabajadores. (33)

De este modo, poco a poco, el tejido social, tan minuciosamente destruido por la dictadura, se va regenerando a sí mismo al calor de los combates contra el régimen. A este proceso ayuda no poco la libertad parcial de prensa, conquistada de facto por la movilización social opositora.

En estas circunstancias, el problema de las tácticas a emplear pasa al primer plano del debate político. Y la cuestión de la violencia es el tema más discutido. Fuera de las or

ganizaciones que están en el MDP, todas las demás fuerzas se oponen al empleo de formas violentas de lucha, pero no de la misma manera. Por un lado están aquellos sectores que procuran una salida pactada con las FF.AA. por temor a una democratización abierta que pudiera eventualmente poner en peligro el sistema capitalista y los privilegios de los propietarios. Desde luego aquí se encuentra el ala derecha de la DC y todos los sectores de la derecha civil que en uno u otro momento se desprendieron del régimen. La agudización de las contradicciones socioeconómicas y sobre todo la rigidez política del régimen, podrían generar un marco favorable al desarrollo de las posturas "violentistas" o rupturistas que levanta un importante segmento de la población, dando así pie a una salida "totalitaria", "dirigida por el comunismo".

Este sector considera la movilización social como un medio de presión para entablar las necesarias negociaciones con una parte de las FF.AA., y solamente si es pacífica, ordenada y por lo tanto, lo más alejada posible de la influencia "violentista" o comunista. De ahí que, en la práctica, debido a que importantes segmentos de la población han hecho suya la política de "sublevación popular", estos sectores contribuyan a la desmovilización y frecuentemente se resten de las manifestaciones unitarias.

En segundo lugar, dentro de la oposición contraria a la tesis de "todas las formas de lucha", se encuentran algunos de los partidos que fueron parte de la UP identificados a partir de 1983 con el Bloque Socialista y, desde luego, aquellos sectores

de la DC que no avalan las tesis del ala derechista de su partido y que apoyan resueltamente la movilización unitaria "pacífica", negándose a un diálogo con la dictadura. Dentro de la DC esta posición tiene voceros sobre todo entre los dirigentes sindicales y juveniles, es decir allí donde el contacto con las bases impone la necesidad de una política más resuelta contra el régimen.

En este caso la discusión contra la violencia más que en términos éticos es encarada desde el punto de vista del "realismo". Se caracteriza la línea del PCCh como el intento de militarizar la política y se afirma que el ejército chileno, por sus altas cualidades profesionales, no puede ser derrotado en el terreno militar. La violencia, además de ser inútil, generaría mayor represión hacia los sectores opositores, jugando en contra de la democratización.

Esta actitud de las demás fuerzas políticas es uno de los factores que influyen en que el PCCh no tome posiciones más decididas en el uso de las formas armadas de lucha, manteniendo al respecto cierta ambigüedad. En efecto, el PCCh reivindica la autodefensa de masas y el derecho del pueblo a la rebelión, pero no acepta públicamente su participación en hechos violentos. Saluda las acciones "desestabilizadoras" -tales como sabotajes, atentados con explosivos, etcétera, del FPMR, pero niega tener vinculación con dicha organización o con las acciones que realiza (fuera, claro, de aceptar que algunos de sus militantes participen).

Asimismo, vemos que el hecho de que en algún momento el PCCh hubiera hablado de "insurrección" -lo que constituiría un plan de derrocamiento claro y preciso- y posteriormente este término haya sido suplantado por otros, podría tener relación con la mala acogida que los planteamientos de 1980 tuvieron en general en el resto de los partidos de centro izquierda y, desde luego, en la DC. La cautela con que el PCCh maneja el problema de la violencia podría estar relacionada también con el deseo de no involucrar a sus dirigentes públicos, exponiéndolos a una mayor represión, o de no poner en peligro los espacios conquistados con la movilización social asegurándose la posibilidad de mantener una voz pública o semilegal.

La semi-reconstitución del sistema de partidos políticos otorga al PCCh una serie de instancias muy importantes de lucha legal o semilegal, que no desea arriesgarse a perder.⁽³⁴⁾ Perderlos sería verse en la disyuntiva de jugarse entero por la vía armada en momentos en que no se han agotado otras posibilidades, al menos para la conciencia de la mayoría de la sociedad; o bien resignarse a tener una actuación política secundaria y marginal.

Por otro lado, esta actitud del PCCh obedece a una evaluación negativa acerca del grado de influencia y apoyo de esta nueva política en los distintos sectores de la sociedad. Es decir, el PCCh no asume una postura más abierta hacia la cuestión de la lucha armada por el temor de que no pueda por sí solo voltear la situación, quedando aislado en el contexto de las fuerzas políticas, y perdiendo capacidad de dirección en cualquier tipo de alianza, ya fuera estrecha (como el MDP) o am-

plia (como podría haber sido el FAF). El apoyo que en la práctica recibe de los sectores populares no parece ser suficiente. En términos de clase son grupos heterogéneos, donde la presencia de la clase obrera, considerada como fundamental por el PCCh, no es tan clara como podría esperarse. La clase obrera, como tal, es decir en los centros productivos, no se suma masivamente a la acción desestabilizadora por temor al despido. Sin fuerza propia suficiente, el PCCh prefiere, entonces, una actitud más prudente que le permita actuar dentro del concierto de los partidos políticos y ocupando los espacios existentes.

Pese a todo, el PCCh logra convertirse en un protagonista de primer orden en el proceso que se vive durante estos años. Al hacerse cargo de la posición más rupturista con el régimen, ha logrado hacer crecer su influencia en los sectores marginales de la población que no ven en una salida pactada o de recambio ninguna expectativa para la solución de sus problemas. Ofrece a su vez un espacio nuevo de lucha al cual se han incorporado importantes sectores, particularmente juveniles. (35)

El PCCh, al decidirse en 1980 a explorar vías hasta entonces inéditas para él ha enfrentado una serie de reticencias pero ha visto también que en gran parte su política ha sido asumida por aquellos sectores a los que aspira representar. 1983 y 1984 fueron años en que las ideas comenzaron a tomar forma en la realidad y demostraron ser eficaces. Con esta experiencia acumulada, el PCCh enfrenta su segundo pleno en la clandestinidad bajo el período pinochetista. Este, celebrado en enero de 1985 con la presencia del conjunto de comité central (tanto de

aquellos miembros que viven en el exilio como los que habitan en Chile), ratificó la línea propuesta en 1980 y fue aún más lejos en las proposiciones concretas del camino a seguir.

3. *Algunos problemas nuevos y el Pleno de 1985*

El fracaso de las negociaciones que el centro y la derecha habían iniciado con el régimen da nuevos impulsos a la movilización, la que cobra mayores niveles en 1984. Aparentemente convencidos, al fin, de que Pinochet no estaba dispuesto a ningún tipo de apertura y que su objetivo era ganar tiempo, los sectores de centro -y con ello queremos decir fundamentalmente la DC-, deciden dar su apoyo a una forma opositora más directa, aunque siempre negándose al uso de "todas las formas de lucha".

Señales de este repunte opositor son la gran manifestación del primero de mayo de 1984, a la que ya hemos aludido y la protesta convocada para el día 11 de ese mismo mes. La organización y decisión de los manifestantes se mostraba muy superior. Además, las acciones "desestabilizadoras" del FPMR eran cada vez más frecuentes y notorias. No era inusual que milicianos realizaran mítines en las poblaciones marginales enseñando a los pobladores a fabricar y usar armas caseras. (36)

Este conjunto de situaciones era producto de la agudización del conflicto entre fascismo y democracia, de tal modo que la gran mayoría visualizaba ahora el enfrentamiento con el régi-

men (aunque éste no fuera necesariamente armado) como el único modo de suplantarlo por un gobierno democrático. La actitud intransigente del MDP adquiere fuerza y prestigio, logrando sumar a sectores que están más allá de sus filas.

El paro nacional de labores, planteado desde 1983, adquiere ahora la relevancia de una tarea a la orden del día. Después de una larga preparación y de nuevas y combativas protestas, el paro es convocado para el día 30 de octubre por el CNT. Se adhiere un gran número de organizaciones sociales y la mayoría de los partidos políticos de oposición.

Si bien el paro de octubre constituyó la más alta expresión de lucha antidictatorial que se había presentado hasta el momento, mostró las dificultades con que tropezaba el movimiento opositor. Muchos centros productivos no paralizaron sus labores, ya fuera por desorganización o por temor al despido. Este hecho volvía a remarcar las dificultades que representa la represión para la actividad organizada de la clase obrera dentro de su frente de trabajo. Por otro lado, el paro demostró las carencias de dirección de los partidos sobre todo en el sector sin sindical. El PCCh, que visualiza en la clase obrera el sujeto principal de los cambios, no dejó de ver con preocupación este hecho que fue reconocido y criticado en el Pleno de 1985. Allí se señala al respecto que no se ha logrado "generalizar entre la clase obrera y trasladar a los centros de producción un estado de rebelión como el que existe en otros sectores". (37)

En efecto, durante el paro de octubre los centros neurál

gicos de la economía continuaron sus labores, aunque en algunos de ellos se presentó tortuguismo, o mayores porcentajes de ausentismo. Si bien resultaba claro que el obrero (y sobre todo el obrero desempleado) participaba en las actividades antidictatoriales a través de su pertenencia a una zona habitacional, el hecho de que la actividad productiva no sufriera paralizaciones sustanciales, limitaba en mucho la repercusión del paro nacional. En otros sectores, en cambio, la adherencia fue total. Paralizaron los estudiantes, el transporte colectivo y comercial, algunos servicios hospitalarios y el conjunto del comercio detallista. En el centro de Santiago y otras ciudades se realizaron combativas manifestaciones mientras en las poblaciones se levantaban barricadas para impedir el ingreso de las fuerzas represivas, lo que se logró durante dos días.

Incapaz de enfrentar la situación, el gobierno decreta estado de sitio y procede a la clausura de las publicaciones de oposición y la detención de los convocantes al paro. Pese a ello, la duodécima protesta se convoca para el 27 de noviembre, bajo estado de sitio y se realiza durante dos días, desafiando el clima de terror provocado por la dictadura. Con esa protesta se cierra el año de 1984.⁽³⁸⁾ Un balance de él indicaba que los estados de ánimo de las masas se encendían cada vez más, que ya las medidas de amedrentamiento habituales no surtían efecto y que era posible pasar a etapas superiores.⁽³⁹⁾

El pleno del PCCh celebrado en enero de 1985 constituye una síntesis de la situación política y expresa el avance de las posiciones más rupturistas al interior del partido, representa-

das sobre todo por la juventud y por los dirigentes que se encuentran en el interior del país.

Los hechos que hemos mencionado llevan al PCCh a concluir que se está configurando una situación revolucionaria y que es posible, actuando con mayor energía y empuje, derribar a la dictadura. En el Pleno de 1985 se plantea que la crisis "por arriba"⁽⁴⁰⁾ se encuentra en un alto grado de desarrollo al no poder el régimen controlar la situación. Lo que haría falta entonces es elevar la lucha del pueblo y de las fuerzas opositoras.

El PCCh no vincula necesariamente la situación revolucionaria a una salida democrático popular, dejando abierta la posibilidad de que a la caída de la dictadura le siga un gobierno democrático burgués. Pero al mismo tiempo subraya con fuerza que existen condiciones para procurar una salida de tipo "democrático avanzado con miras al socialismo".⁽⁴¹⁾ En función de explorar la situación generada, señala las tareas principales para el derrocamiento de la dictadura:

- a) avanzar en la acción común de la oposición
- b) elevar la capacidad de combate de los trabajadores de los principales centros productivos
- c) desarrollar los lazos con las capas medias en torno a acciones concretas
- d) aumentar el trabajo específico hacia las FFAA, tanto de propaganda y acercamiento, como de presión sobre ellas
- e) desarrollar la autodefensa de masas

- f) desarrollar la fuerza militar propia y
- g) elevar el dominio de todas las formas de lucha.

Por otro lado, el PCCh estima que la situación política ha llegado al punto en que se hace necesario presentar un plan más concreto de derrocamiento, la "forma más probable" del enfrentamiento decisivo, o al menos, la que el PCCh se esfuerza por lograr.

Lo prevemos como un levantamiento -dice el Pleno de 1985- o sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá también parte de las FFAA., que estén contra la dictadura. Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la paralización real del país: alzamientos populares en los principales centros urbanos, con participación decidida del proletariado industrial, de los estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el desmoronamiento político moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debiera ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país. (42)

Este planteamiento táctico-estratégico de derrocamiento de la dictadura -conocido como "sublevación nacional"- es el primero que se ofrece desde que se iniciara la política de rebelión popular. Junto con él, el PCCh señala la necesidad de que "la dirección del partido elabore un plan realista dirigido a ponerlo en práctica en el momento adecuado, en medio de un levantamiento o sublevación general del pueblo". (43) El PCCh ve, pues, muy cercana la posibilidad del derrocamiento de la dictadura y considera necesario acelerar los preparativos para el momen

to decisivo. En ellos concede la mayor importancia a la capacidad de dirección del propio partido y al uso eficiente de la violencia. Estima que, en un contexto de rebelión o insubordinación general, estos dos elementos pueden ser los claves.

Para que este plan se materialice se considera necesario mejorar la correlación de fuerzas al interior de la oposición a favor del proyecto popular. Al quedar cada vez más claro que el centro político prefiere -frente a la ampliación de la influencia del MDP-, realizar una oposición moderada, el único camino que se abre al PCCh es el de insistir en la unidad de toda la izquierda. Con ello, no sólo se fortalecerían las posiciones populares, sino que se contribuiría al fracaso de la ambiciosa política de alianzas excluyente que levanta la DC, oponiéndole una fuerza propia mayor que la obligara a la unidad, a costa de verse aislada en el bloque de centro derecha que pretende hegemonizar.

La unidad de la izquierda está representada, básicamente, por la unidad entre el MDP y el BS. (44) Es pues hacia este último que el PCCh renueva sus esfuerzos unitarios. La tarea, sin embargo, no es nada fácil pues el BS parece dispuesto a salvaguardar un espacio propio en la política nacional (que, estima, se diluiría en una alianza más amplia) y, por lo tanto, a anteponer la discusión sobre el tipo de socialismo que se busca y sobre las tácticas adecuadas a emplear contra la dictadura. A pesar de que en ambos puntos hay divergencias, el PCCh confía que la necesidad política de enfrentar un poderoso enemigo y el peligro de ser absorbidos por la estrategia de la centro-derecha,

llevarán al BS a aceptar y promover un acercamiento.

El PCCh espera que toda la izquierda reunificada tendría la suficiente capacidad de convocatoria como para arrastrar al resto de la oposición hacia una actitud más decidida contra la dictadura. Por su lado, la DC y las fuerzas de derecha centran su labor política al interior de la oposición en los intentos por aislar al PCCh. Descalificándolo por su tesis de "todas las formas de lucha" afirman que la aceptación de medios violentos constituiría una actitud antidemocrática. Estos esfuerzos tienen éxitos parciales cuando algunos partidos del BS se suman a la condena de las tesis del PCCh y del MDP, poniendo este debate por sobre las necesidades unitarias.

Es importante hacer notar que en el documento que hemos mencionado el PCCh plantea con mayor fuerza que nunca antes la voluntad política de dirigir y conducir una crisis nacional general, poniendo en primer plano la necesidad de otorgarle al movimiento una dirección popular y revolucionaria con mira al socialismo. Se plantea ahora claramente la cuestión del Estado, de la dirección cultural y de la fuerza, complementando otros aspectos que se encontraban ya presentes, tal como la amplia política de alianzas. Por ello podemos decir que los contenidos del Pleno de enero de 1985 de algún modo resuelven o responden al conjunto de la problemática que el PCCh había enfrentado durante las dos últimas décadas.

La amplia política de alianzas que postula el PCCh no es interpretada ahora como un obstáculo para el despliegue de for-

mas de lucha propias ni tampoco para la explicitación de un proyecto de clase autónomo.

Las cuestiones de la organización de las masas para las formas violentas de lucha y la preparación y crecimiento de una fuerza militar propia son puestas en el primer plano. Esto por que el factor militar es considerado por el PCCh como decisivo para la derrota efectiva de la dictadura y de las bases sociales, económicas y políticas que la sostienen. Este elemento tiene por tanto un rol muy importante que jugar en el momento en que se logre crear la crisis política:

En esta correlación lo fundamental es la participación de las masas, pero está llamado a jugar un papel decisivo lo que seamos capaces de generar en cuanto al desarrollo del elemento militar. (45)

En este sentido se visualiza el aspecto militar como un factor coadyuvante a la resolución de la crisis política o sublevación nacional.

El PCCh declara ahora abiertamente que propugna por una salida que instaure una "democracia avanzada con vista al socialismo". Por ello se entiende retomar las tareas antioligárquicas y antimonopólicas que el gobierno de la UP había iniciado. Pero ahora se va más allá. Se plantea como tarea ineludible la modificación del Estado, especialmente de las FFAA y del aparato judicial, con el fin de democratizar el funcionamiento de la política y asegurar la participación del pueblo en la toma de decisiones.

Consecuentemente con lo anterior, se sostiene que la salida al fascismo no debe expresarse sólo en la caída de Pinochet. La sociedad entera debe asegurarse que la experiencia vivida bajo el régimen dictatorial no vuelva a ocurrir, y para ello es necesario "adoptar medidas de fondo que remuevan las bases que lo originaron y lo sustentan". (46)

Por otro lado, en el Pleno de 1985, se le confiere una importancia mucho mayor a la capacidad propia de generar hechos políticos. Si bien no se abandona la política de unidad con toda la oposición, lo novedoso es que ahora se afirma que el éxito de ella depende en gran parte de la fuerza propia que el partido pueda desplegar en el movimiento social. Por ello se enfatiza la necesidad de la unidad en la base, en forma independiente de lo que pueda ocurrir a nivel de cúpulas partidarias.

Con estos planteamientos, el PCCh se propone tomar una actitud más activa frente a los postulados de la DC, dejando en claro su aspiración por dirigir y conducir el proceso de insubordinación que llevaría a la derrota de la dictadura.

En cuanto a dicha derrota, se plantea que "el camino más corto para terminar con la tiranía es precisamente el camino del enfrentamiento. Es también el que ofrece las mejores posibilidades para que, a la derrota del fascismo, el país entre en un período de profundos cambios en la estructura del Estado y en todos los aspectos para crear un régimen avanzado con vista al socialismo". (47) Estos planteamientos reafirman la idea de que con Pinochet no habrá transición a la democracia ni apertura,

quedando como único camino la derrota político-militar del régimen.

El camino elegido conlleva muchas dificultades. La más importante de ellas es la fuerza que ha adquirido el proyecto de mocrático burgués, que pretende hegemonizar la .DC y que cuenta con el poderoso respaldo del imperialismo norteamericano. La otra es la de crear una capacidad político-militar efectiva en las condiciones reales del país.

Conocedor de esta realidad, el PCCh pone énfasis en su facultad por lograr acuerdos con otras fuerzas políticas y por conseguir apoyo y comprensión de parte de las bases sociales no comunistas con que trabaja. De ahí que tenga mucha cautela en el uso del lenguaje y que busque la legitimación ideológica de sus postulados dentro de la tradición democrática nacional, de la cual se considera parte y continuador.

En gran medida por esta causa se explica que el planteamiento de "perspectiva insurreccional de masas" haya sido prontamente abandonado y reemplazado por el término más novedoso de "sublevación nacional".

Este último término recoge la experiencia vivida por las masas a partir de las Jornadas de Protesta iniciadas en 1983. Se trata de enfrentamientos en muchos casos violentos, que revelan insubordinación o rebeldía frente a las autoridades, pero que no culminan en el uso masivo de formas armadas. El concepto de "insurrección" no reflejaría con suficiente precisión la especificidad de este caso concreto. Por otra parte existe un

problema de etapas. Una sublevación nacional -tal como está contemplada- podría o no desembocar en formas de lucha más violentas -como las que caracterizan a una insurrección- dependiendo de la resistencia que opusiera la dictadura. Si ésta lo grara mantenerse en el poder, aun frente a una sublevación generalizada, el segundo paso, como vía más probable de derrocamiento, debería ser la insurrección. La propia sublevación nacional crearía las condiciones para un paso no demasiado dificultoso a esta segunda etapa, en caso de que se hiciera necesaria.

Finalmente, el PCCh prefiere un término más amplio que el de insurrección porque este último está vinculado a la toma del poder por parte de las fuerzas alzadas. Esto podría entregar un argumento más a los partidos de centro-derecha que pretenden aislarlo bajo la acusación de totalitarismo. El PCCh prefiere dejar la puerta abierta señalando que el rol protagónico en un gobierno futuro corresponderá a la fuerza que logre hacerse hegemónica en el proceso de crisis terminal de la dictadura. Por lo demás, el propio PCCh cree que lo más recomendable es la dirección conjunta de todas las fuerzas democráticas en el gobierno provisional que suceda a la dictadura.

De esta manera, la definición de una estrategia de derrocamiento -entregada en el Pleno de 1985- implica una mayor definición del PCCh en relación a casi todos los puntos que fueron considerados como errores o carencias del pasado. Si opta por utilizar una terminología menos convencional es con el fin de, por un lado, dar cuenta de la especificidad del proceso y, por

otro, evitar ofrecer flancos débiles en el debate ideológico que contribuyan a facilitar su aislamiento.

Finalmente, unas palabras a modo de resumen:

Durante el período 1980-85, la dictadura chilena pasa de un dominio casi sin contrapeso a sufrir una crisis política sin precedentes que la deja en una situación de gran debilidad y aislamiento en los planos nacional e internacional.

Esta crisis, abierta en 1983, convierte en cuestiones de urgente actualidad los proyectos estratégicos y las tácticas de lucha antidictatorial de los distintos actores políticos de la oposición.

El hecho de que los planteamientos que el PCCh venía haciendo desde 1980 hayan pasado a convertirse en uno de los principales puntos de referencia para la definición de las políticas de casi todas las fuerzas opositoras, debe interpretarse, pues, en el contexto de la lucha por la hegemonía en el movimiento opositor -y por consiguiente en el reemplazo del régimen político- que se desató junto con la crisis de la dictadura.

En efecto, los nuevos planteamientos políticos del PCCh, proponían un camino de lucha contra el régimen -cuya derrota aparecía ahora como viable- que favorecía claramente un proyecto determinado: una salida democrático popular a la crisis. El fuerte arraigo del partido en la sociedad chilena, la gravitación que tiene hacia otros sectores y su probada capacidad de acción, hacen que su política de rebelión popular despierte la pre

ocupación de todas las fuerzas, particularmente del centro y la derecha.

Para el PCCh y sus aliados más cercanos, agrupados en el MDP, no es cosa fácil el logro de la hegemonía al interior de la oposición en el proceso de derrota y reemplazo del régimen. Es necesario que acreciente su capacidad de convocatoria y de movilización de masas, extendiendo su influencia hacia sectores cada vez más amplios. Deberá, pues, superar el retraso -que el propio Pleno de 1985 apunta- en el trabajo entre la clase obrera y acrecentar su influencia ideológica hacia la clase media.

En segundo lugar, es necesario que paralelamente desarrolle una fuerte lucha ideológica para lograr que sus postulados adquieran carácter nacional, es decir, que se sientan representados por ellos las distintas clases y sectores de clase que constituyen la gran mayoría del país. Esta lucha ideológica se realiza en condiciones extremadamente difíciles para el PCCh y el MDP por ser las fuerzas más perseguidas y golpeadas por la dictadura.

Finalmente es necesario que el partido se mantenga, mediante su propia capacidad de generar hechos políticos, como una fuerza de primer orden en el conjunto opositor. En este sentido, el elemento militar podría llegar a cumplir un importante rol.

Sin embargo, estos problemas aún no llegan a resolverse. La conversión del PCCh en una fuerza político-militar y su vínculo con el FPMR aún no es asunto clarificado. Convertirse en una organización político-militar significa que se considera lo

militar no sólo como factor de apoyo, sino como elemento creador de hegemonía en el proceso de derrocamiento y por lo tanto un factor desencadenante de la crisis política. De suceder esto, probablemente las relaciones entre el PCCh y el FPMR se explicitarían o se optaría por la militarización del partido. Sin embargo, no es posible desentrañar de los análisis que corresponden a este período, una respuesta clara a este problema.

Contra la aspiración o necesidad que tiene el PCCh de fortalecer su política en todos los terrenos se enfrenta, en primer lugar, la represión de la dictadura que lo visualiza como su principal enemigo e intenta, por un lado, impedir su capacidad de acción política y por otro, aislar al partido de su base social. En este último aspecto el PCCh resulta más vulnerable por la necesidad que tiene de actuar en espacios legales y semi-legales.

En segundo lugar, en la disputa por la hegemonía debe enfrentar la competencia de la centro derecha que pugna por ocupar los espacios de dirección del movimiento social que la represión ha "despejado" de elementos de izquierda. Por otra parte, realiza denodados esfuerzos por aislar al PCCh dentro del con-cierto opositor. Por esto, la cuestión de las alianzas -y, dentro de ella, el problema de la unidad de la izquierda- es vi-tal y campo de batalla permanente en la lucha por la hegemonía en el Chile actual.

NOTAS AL CAPITULO TERCERO

- (1) Fuente: Banco Central de Chile: Indicadores económicos y sociales 1960-1982. Santiago, 1983.
- (2) Fuente: Estay, Eduardo: Las formas de funcionamiento del capitalismo en Chile y su inserción en la economía internacional. Tesis de licenciatura. U.A.P., 1983.
- (3) Ver Yocolevzky, Ricardo: La Izquierda Chilena en 1982. Depto. de Cs. Sociales y Políticas, Univ. Iberoamericana, Octubre de 1982.
- (4) Actualmente el PS está dividido en varias fracciones. Las principales son el PS-Almeyda, integrante del MDP, y el PS-Briones, integrante de la AD.
- (5) El 18 de septiembre de 1981 aparece en México una declaración de la "Izquierda Chilena", que incluye la firma del -- MIR. Con ello desaparece definitivamente la UP como alianza política.
- (6) Este documento aparece firmado por el Partido Socialista de Chile, Mapu, Mapu Obrero y Campesino y la Izquierda Cristiana.
- (7) Los firmantes de este documento fueron el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista de Chile (Almeyda) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
- (8) Ver Yocolevzky, op. cit., pp. 28-32.
- (9) Pinochet demostró gran habilidad para deshacerse de los mandos de las FF.AA. que no le eran incondicionales. La mejor prueba de esto se tuvo cuando destituyó al comandante en jefe de la fuerza aérea, general Gustavo Leigh (y junto con él a casi todo el cuerpo de generales de esa rama), -- quien había expresado discrepancias con la dirección de Pinochet.
- (10) Véase por ejemplo, el manifiesto del PCCh de mayo de 1977: "...la Junta se sostiene no sólo ni tanto por la fuerza del terror y el apoyo que le dispensan un grupo reducido de oligarcas (...). La insuficiente unidad de las fuerzas antifascistas es lo que completa más decisivamente contra el -- surgimiento de un movimiento de masas capaz de poner término a la tiranía". Boletín del Exterior # 24, julio-agosto de 1977, p. 11.

- (11) Corvalán, Luis: "El derecho del pueblo a la rebelión es in discutible. Discurso pronunciado en Moscú". Boletín del Exterior # 43, sept-Octub. 1980. pp. 11-12 y 14.
- (12) El término "yacio histórico", usado para designar una serie de carencias y errores de la política del PCCh, fue -- creado por Volodia Teitelboim, miembro de la Comisión Polí tica, pero fue posteriormente impugnado por otros dirigen tes.
- (13) El coronel Carlos Ibáñez del Campo se hizo del poder, con apoyo militar, en 1927, y gobernó dictatorialmente hasta -- que fue derrocado en 1931.
- (14) El caso más conocido es el del llamado "reynosismo", que -- culminó con la expulsión del encargado de organización del partido en 1946. Pero con posterioridad se presentaron -- otros casos de expulsiones, como las del grupo que terminó conformando el "Movimiento Lautaro" en 1969.
- (15) El concepto está tomado de Lenin, en su obra "Dos tácti-- cas de la socialdemocracia en la revolución democrática", donde plantea dos posibles salidas a la crisis de 1965: la vía de las reformas, es decir, la transacción con el zaris mo, y la vía revolucionaria, es decir, la insurrección po pular que barra con el aparato burocrático-militar; y abra la posibilidad de un proceso más avanzado. (Lenin, op. -- cit., OO.EE. en 12 tomos III, pp. 34-35 y 39-41).
- (16) Baste mencionar el problema de la preparación de cuadros -- o el de la planificación y realización de acciones para -- las que no existían precedentes.
- (17) Barnecker, Marta: Entrevista a Shafik Jorge Handal, Secre tario General del PC salvadoreño, en: Pucélos en armas. Ed. Era. México 1984. pp. 147-151.
- (18) En la misma entrevista, Handal explica que la experiencia nicaraguense lleva al PCS a reelaborar las conclusiones de las experiencias cubana y chilena, lo cual es también -- válido para el PCCh. ("Barnecker, op. cit., pp. 137-142)
- (19) PCCh: Informe al Coordinador. Documento mimeografiado. No viembre de 1980, p. 3.
- (20) Son los casos de los partidos comunistas boliviano, perua no, salvadoreño, venezolano, etc.
- (21) PCCh: op. cit., p. 2.

- (22) Corvalán, Luis: "La rebelión popular, política de nuestro partido", *Boletín del exterior* # 54, julio-agosto de 1982, p. 7.
- (23) Ver Corvalán, *Ibid*, p. 8.
- (24) Esta idea aparece expuesta por Yoczelevzky, op. cit., pp. 38-39.
- (25) Esto se refiere a que la población adscribe, aproximadamente, en un 30% a la derecha, un 30% a la izquierda y un 30% al llamado centro político conformado por la DC y otros pequeños grupos.
- (26) Fuente: Departamento de Economía de la Universidad de Chile, citado por Revista *Cauce* # 4, 3 al 16 de enero de 1984, Santiago de Chile. p. 13.
- (27) Los grandes grupos monopólico-financieros, si bien experimentaron una baja de sus ganancias, no se vieron expuestos a la quiebra. La única excepción fue la del grupo de Javier Vial, el cual tenía la mayor parte de sus intereses en negocios financieros especulativos. Puesto que este fue el punto por donde estalló la crisis -debido a la escasez de crédito externo, este grupo sufrió las consecuencias y el propio Vial fue a dar a la cárcel. Los demás grupos, y particularmente aquellos que tenían mayores intereses en empresas productivas, se vieron fortalecidos al absorber numerosas empresas quebradas que mantenían deudas bancarias. La ayuda del Estado, que, entre otras cosas, se hizo cargo de la deuda externa privada, fue fundamental.
- (28) Tomando como base septiembre de 1974 = 100, se obtiene el siguiente cuadro para los ingresos reales:

| | Índice real del ingreso mínimo familiar | Índice real de sueldos y salarios |
|-----------------|--|---|
| Septiembre 1980 | 104.5 | 132.5 |
| " 1981 | 104.7 | 153.2 |
| " 1982 | 82.8 | 140.5 |
| " 1983 | 79.3 | 129.0 |

Se debe considerar además que el 23.6% de las familias chilenas no alcanza siquiera a percibir el mínimo familiar.

Fuente: Ruiz-Tagle, Jaime: "El poder adquisitivo del salario mínimo en 1983", en *Mensaje*, Volumen XXXII, # 325. Diciembre de 1983. Santiago de Chile. pp. 718-723.

- (29) Las exportaciones de cobre constituyen aproximadamente el 50% de las exportaciones totales del país.
- (30) Expresión de ello es la mayor libertad de prensa que se va ganando, aun en contra de la voluntad del gobierno; la apertura de locales para el funcionamiento de organismos sociales y el florecimiento de la discusión opositora pública.
- (31) Ex jefe del principal partido de derecha, el Partido Nacional, por el cual fue senador en 1973; de orientación fascista, fue uno de los principales protagonistas de la adición contra el Gobierno Popular.
- (32) No está demás recordar que la Democracia Cristiana intentó quebrar la Central Unica de Trabajadores en más de una ocasión mientras fue gobierno (1964-1970) y sólo la elevada conciencia de clase del movimiento obrero logró hacer fracasar este propósito. Actualmente dicha colectividad política es la principal impulsora de las llamadas "centrales ideológicas", nuevo intento de debilitar la fuerza de los trabajadores organizados.
- (33) El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) nace en 1983 al calor de las primeras Jornadas de Protesta. No constituye una gran central obrera sino una instancia de coordinación de la gran mayoría de las federaciones y confederaciones sindicales.
- (34) Nos referimos, por ejemplo, al refortalecido movimiento sindical; al movimiento estudiantil que experimenta un vigoroso renacimiento (frentes que, obviamente, requieren de un trabajo abierto); a espacios en las publicaciones independientes; al trabajo en las organizaciones de defensa de los derechos humanos, etcétera.
- (35) Los planteamientos de 1980 le quitan al MIR la exclusividad en la reivindicación del uso de la violencia. Esta colectividad, por su retraso en el trabajo de masas y por la fuerte represión que ha sufrido, no ha podido convirtirse en una fuerza de primer orden en las nuevas condiciones, aunque sí ha visto aumentada su influencia.
- (36) Durante 1984 el PCCh y el FPMR impulsaron la formación de las "milicias rodriguistas", organizaciones de autodefensa de masas que se formaron en los sectores populares al calor de las luchas contra las fuerzas represivas. Aparentemente son autónomas, sin vinculación orgánica con el FPMR, y contienen una gran dosis de espontaneísmo.
- (37) Informe de la Comisión Política al Pleno del Comité Central del PCCh realizado en enero de 1985, en: Boletín del exterior # 71, extraordinario, 1985. p. 22.

- (38) Es importante señalar que, por la forma en que están programados los períodos vacacionales, tanto estudiantiles como laborales, durante los meses del verano chileno -particularmente enero y febrero- la actividad política decae puesto que existe menor capacidad de convocatoria y organización.
- (39) En el informe al Pleno se citan los balances de periódicos oficialistas del período que va de septiembre de 1983 a octubre de 1984: "se registraron 1 889 acciones desestabilizadoras; de estas, 1 138 con explosivos; 229 sabotajes; 163 asaltos a mano armada; 36 atentados selectivos y 47 sabotajes menores". Informe al Pleno de 1985, p. 17.
- (40) Lenin señala tres "síntomas distintivos de una situación revolucionaria", a saber: "1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación (...) una crisis política (...) que abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas (...); 2) Un agravamiento (...) de la miseria (...); 3) Una intensificación de la actividad de las masas (...). Lenin. OO.EE. en 12 tomos. Tomo V, p. 226. Ed. Progreso, Moscú, 1976.
- (41) Informe al Pleno de 1985, p. 36
- (42) Ibid., p. 37
- (43) Ibid.
- (44) Hay partidos que pertenecieron a la Unidad Popular, pero no se encuentran en ninguno de estos dos conglomerados, como, por ejemplo, los partidos Radical y Socialdemócrata.
- (45) Informe al Pleno de 1985, p. 38.
- (46) Ibid., p. 41.
- (47) Ibid., p. 6.

CONCLUSIONES

En los años previos al triunfo electoral de la UP, el PCCh se perfilaba ya como un partido fuerte, con arraigo en la clase obrera y presencia política nacional. Su proyecto se había enriquecido con las experiencias de la lucha por la ampliación de la democracia y poseía ya claros perfiles a finales de la década de los sesenta.

Sin embargo, dicho proyecto, con todo y que respondía a un diagnóstico correcto -desde el punto de vista de los intereses populares- de la situación económica de la sociedad chilena y a que recogía lo más valioso de la experiencia de lucha de su pueblo, contenía carencias y fallas que distorsionaban la visión global del curso de la lucha de clases e impedían a los sujetos del cambio revolucionario enfrentar adecuadamente las dificultades, de modo de avanzar hasta producir los cambios cualitativos que maduraban en Chile.

De estas cuestiones las que se revelaron más graves en el curso de la experiencia de la UP, fueron aquellas que contribuían a darle una orientación reformista a la acción política del partido. Una concepción del Estado que subestimaba su carácter de clase y consideraba viable su transformación por fragmentos, fue el problema teórico que mayormente influyó en la apreciación deformada del problema de los cambios políticos y, desde luego, en la imposibilidad de resolver la cuestión del poder. Esta concepción se vio rápidamente superada por los hechos, pero entonces no se supo corregirla puesto que respondía a una profunda convicción construida y reforzada a través de una larga historia.

La confianza en una transformación gradual, sin enfrentamientos violentos, se deja ver también en el economicismo que caracterizó tanto al programa del PCCh como al de la UP. En base a ellos los cambios políticos se subordinaron al avance en las transformaciones económicas emprendidas por el gobierno popular a partir de 1970. Al promediar el proceso se hizo evidente que tal camino estaba entrabado de antemano por la pasada superestructura capitalista, pero no por ello se dejó de insistir en él. En tales circunstancias el PCCh sostuvo nuevamente que la postergación de las transformaciones estatales era una necesidad táctica. De este modo se eludía un camino indudablemente mucho más conflictivo, pero que representaba la única alternativa para la consolidación del proceso revolucionario.

También constituyó un rasgo reformista la falta de comprensión de la importancia que juega el factor militar en la lucha política y, particularmente, en la resolución del problema del poder. Las reticencias a la conformación de una fuerza militar propia y, en general, a una adecuada preparación para un enfrentamiento violento -que ya se preveían- tienen que ver con la inserción histórica del partido en el sistema político democrático burgués y con la sobrevaloración de las posibilidades que éste ofrecía al avance de las fuerzas populares.

En todos estos puntos el PCCh, pese a la creatividad que había demostrado para asumir las peculiaridades nacionales, exhibió poca flexibilidad teórica y práctica para comprender y enfrentar correctamente las nuevas e inéditas situaciones creadas a partir de 1970. Con buena dosis de dogmatismo no supo cam-

biar de rumbos en los momentos decisivos. Esto se aprecia en la negativa tanto a alterar el planteamiento inicial y vanamente ortodoxo de la vía pacífica, como a profundizar el conflicto de clases al punto de una crisis nacional general. Se optaba, en cambio, por dirigir los esfuerzos a evitar un enfrentamiento que ya era ineludible.

Empero, es indiscutible que el movimiento popular, dirigido por fuertes partidos de izquierda, puso en jaque a la dominación burguesa, amenazando con hacer tamblar todo su funcionamiento, por lo que a las clases dominantes no les quedó más recurso que el uso brutal de la fuerza militar. El golpe de estado se perfilaba así como la solución radical -- a la vez que natural -- a la crisis desatada por los sectores sociales y políticos representados en la UP que no supieron, finalmente, resolverla a su favor.

La contrarrevolución de 1973 consiguió su objetivo estratégico principal, es decir, eliminar la posibilidad de que el movimiento popular continuara disputando efectivamente la dirección del Estado y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, su victoria fue incompleta. La meta de aplastar al movimiento democrático popular, a los partidos que lo representaban y al proyecto político y social que portaba, no ha sido cumplida cabalmente. Su posterior recuperación, aunque lenta y difícil, demuestra que su existencia y su fuerza correspondían a realidades muy enraizadas en la sociedad chilena y en su memoria colectiva.

Sin embargo, los partidos y organizaciones populares se encontraron en este resurgimiento en condiciones muy diferentes a las que caracterizaban la anterior tradición política chilena. El conjunto del modelo de funcionamiento del Estado y la relación de éste con la sociedad, había sido sustancialmente modificado al suprimirse los mecanismos que caracterizaban a la democracia burguesa. La acción represora-articuladora del régimen ha provocado profundas transformaciones alterando la forma de inserción de los partidos, su relación con el Estado y con la sociedad.

La nueva situación generada por el gobierno militar sorprendió al PCCh -así como al conjunto de la izquierda- de modo que produjo un notorio retraso para captar la nueva coyuntura y elaborar un esquema eficaz para enfrentarla. La evaluación inicial, que suponía posible una rápida reversión de la correlación de fuerzas, se estrelló con la realidad de una dictadura crecientemente poderosa y una sociedad civil achatada y sometida a permanente vigilancia.

Cuando se hizo evidente la necesidad de un análisis más detenido y preciso, éste no contó con una autocrítica suficientemente profunda y abierta. El deseo de subrayar los elementos de continuidad con la línea política anterior impidió un proceso de ruptura brusco con el pasado, así como concepciones muy arraigadas en la tradición del pensamiento comunista dificultaron los necesarios cambios en el terreno teórico e ideológico. La evaluación excesivamente optimista, la insistencia en formas de hacer política que ya no eran eficaces y el rechazo a la lucha ar-

mada, fueron posiciones que tardaron años en revisarse de manera realista.

Aun después de 1980 -año en que se reevalúa al régimen y se trazan nuevos lineamientos- persisten cuestiones sin resolver. Es claro que los antiguos y más pesados rasgos reformistas -como fueron el apego a la legalidad, la insuficiente independencia política para enfrentar las alianzas y la subestimación del rol que cumple la fuerza en la política- han sido superados considerablemente. Sin embargo esto fue producto de un largo y dificultoso proceso que aún está en marcha.

Por un lado persiste una fuerte tendencia al interior del propio partido por reafirmar los elementos más tradicionales de su línea política frente a los nuevos planteamientos desarrollados a partir de 1980. Por otro, el discurso oficial parece moverse en un equilibrio inestable entre las distintas opciones: ¿Enfatizar la lucha armada considerándola la vía principal del derrocamiento de la dictadura? ¿Militarizar al conjunto del partido? ¿No conduciría esto inevitablemente al descuido del trabajo de masas? o ¿Continuar con el trabajo de masas tendiente a lograr la unidad de la oposición y a buscar una concertación con un sector de las FFAA?

Más bien, pareciera que el PCCh ha optado por respuestas intermedias, intentando no cerrarse ninguna puerta. El hecho de propugnar la lucha de masas con apoyo militar -considerado éste como una reserva activa- ha conducido a una extraña paradoja hábilmente explotada por la posición centro-derechista que

pretende hegemonizar la redemocratización. Las maniobras de estos sectores por aislar al PCCh, sobre la base del rechazo a su política de "todas las formas de lucha", produce una situación en la cual tomar una posición militar más decidida acarrea el riesgo real de no contar con la fuerza suficiente para cambiar la situación. Pero, por otro, mientras el PCCh no impulse con mayor efectividad y empuje su política militar, se encuentra a la vez en una posición débil para presionar a la centro-derecha a un acuerdo unitario viable. Ambos caminos acarrearán innumerables dificultades e, indudablemente, suponen el desarrollo y ampliación de la lucha de masas.

Las ambigüedades a que nos hemos referido tienen relación con que el nexo entre lo político y lo militar no está aún claramente definido. En la práctica las acciones militares sólo tienen un carácter de apoyo a la lucha política y, al tiempo que no se reconoce ligazón orgánica entre ambas, se deja a oscuras el problema de cuál debe ser la subordinada y cuál la predominante. Definir correctamente y explícitamente esta vinculación resulta de la mayor importancia a nivel estratégico y táctico pues de ella dependerán la forma y las condiciones en que se presente la lucha contra el régimen y por lo tanto, el que la salida de este dé pa so o no a un proceso más o menos avanzado.

Sin embargo -pese a que existen opiniones al interior del PCCh favorables a profundizar la línea militar-, no parece probable en las actuales condiciones que el partido en su conjunto opte por convertir este aspecto en su preocupación fundamental ni en hacer de la lucha armada la forma predominante de la

política.

Pero es necesario hacer notar que hay un cambio de máxima importancia en la conceptualización del uso de la fuerza. Esta se ha convertido, finalmente, para el PCCh, en parte consustancial de la política y una cuestión imprescindible de resolver favorablemente cuando se lucha por el poder. Se trasluce aquí un cambio en la concepción estratégica del partido, lo que también se refleja claramente en las transformaciones del programa: el nuevo planteamiento de la revolución democrático-popular recoge las experiencias de los errores cometidos durante el período de la UP respecto a la concepción del Estado y expresa una voluntad de poder no manifestada anteriormente con la misma claridad.

La novedad del camino emprendido y la complejidad de la situación política chilena son también causa de la falta de una definición más clara en estas cuestiones. La sola fuerza de la izquierda revolucionaria no basta para resolver el problema de la democracia en Chile. Ganar ideológicamente a la mayoría nacional para el proyecto popular y conformar un movimiento capaz de derrotar a la dictadura, bajo dirección revolucionaria, es una tarea que resulta altamente difícil en las actuales circunstancias. Nos referimos, por un lado, a las restricciones a que está sometida la izquierda y las dificultades que enfrenta para llegar con su discurso y presencia a la población y, por otro, a la fuerza que en este marco ha alcanzado el proyecto de centro-derecha. Para abrir paso a la democratización se necesita una concertación más amplia. De allí también que las actitudes prudentes prevalezcan en el PCCh.

Si bien es cierto que una actitud enérgica con base en la lucha de masas, por parte de los sectores revolucionarios, podría eventualmente definir la situación y arrastrar al resto de la población, ello no significa que cualquier actitud voluntarista tenga perspectivas de triunfo. Es necesario, pues, hacer un planteamiento acorde con la evolución concreta de la lucha de clases de tal forma que la política y el discurso revolucionarios no se presenten independientes de las vivencias subjetivas del pueblo y sean capaces de eludir las maniobras aislacionistas de la centro-derecha.

En este contexto resulta de primordial importancia impulsar una actitud rupturista en las masas para la cual la creación de hechos político militares efectivos podría contribuir a crear un nuevo estado de ánimo basado en la credibilidad y la confianza hacia una vanguardia que demuestre en la práctica que la política de rebelión popular es viable.

Esto, claro, debe considerarse sin dejar de lado el hecho que el PCCh no se hace ilusiones de derrotar a la dictadura con su fuerza propia y sigue haciendo de la unidad opositora un punto clave de su política. Si bien resulta fuera de toda realidad pensar en las grandes coaliciones que alguna vez se propusieron, es posible aún intentar el logro de un mínimo consenso mayoritario que logre un fuerte apoyo de masas y que permita poner fin a la trágica situación presente.

En este plano, la coalición de la izquierda, el MDP, puede jugar un importante rol. Con una homogeneidad ideológica

más clara que la que existía en la UP, posee también un alto nivel de acuerdo en cuestiones tácticas y programáticas. La unidad de las fuerzas allí agrupadas puede significar un arma política de consideración en el complejo panorama chileno, dado que poseen una fuerte capacidad de convocatoria hacia los sectores populares. Pero su importancia debe proyectarse más allá de la lucha antidictatorial. Portador del proyecto más intransigentemente defensor de los intereses populares, este conglomerado podría impedir que, en la construcción de una nueva democracia, se repitieran los fatales errores que en el pasado condujeron a la falta de una clara y fuerte dirección revolucionaria.

De este modo, como vemos, la situación política chilena que se abre a partir de los últimos años de nuestro análisis, es sumamente compleja. Es indudable que las dificultades para alcanzar la democracia en Chile están relacionadas con la fuerza que aún poseen las reivindicaciones populares en el concierto político nacional. Una salida que no las considere se vislumbra como improbable y, en todo caso, portadora de una poderosa carga de inestabilidad. Los desafíos del futuro son inmensos. Las interrogantes del presente también.

BIBLIOGRAFIA

- Allende, Salvador et al: *La vía chilena al socialismo*. Siglo XXI Editores. México, 1973.
- ALTAMIRANO, Carlos: *Dialéctica de una derrota*. Siglo XXI Editores. México, 1977.
- ANGEL, Alan: *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. Ediciones ERA. México, 1974.
- ARISMENDI, Rodney: *Lenín, la revolución y América Latina*. Editorial Grijalbo. México, 1976.
- BOBBIO, Norberto et al: *¿Existe una teoría marxista del estado?* Editado por la Universidad Autónoma de Puebla. México, 1978.
- BRUNA, Susana: *Chile, la legalidad vencida*. Serie Popular ERA/42. México, 1976.
- CASTILLO, René et al: *Los 1000 días de revolución. Dirigentes del PC de Chile analizan las enseñanzas de la experiencia chilena*. Editorial Internacional Paz y Socialismo. Praga, 1978.
- CONVALAN, Luis: *Camino de victoria*. Sociedad impresora Horizonte. Santiago, 1971.
- *Chile 70-73*. Sofia Press. Imprenta del estado Balkam. Bulgaria, 1978.
- *Tres períodos en nuestra línea revolucionaria*. Verlag Zeit im Bild. República Democrática Alemana, 1982.
- et al: *Desde Chile hablan los comunistas. Recopilación de documentos desde el 11 de octubre de 1973 al 20 de noviembre de 1975*. Ediciones Colo Colo. Sin lugar de edición, 1976.
- CUEVA, Agustín: *Teoría social y procesos políticos en América Latina*. Edicol. México, 1979.
- GARRETON, Manuel Antonio: *El proceso político chileno*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Segunda edición. Talleres gráficos de Ediciones Minga. Santiago, 1983.
- GRAMSCI, Antonio: *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno*. Juan Pablos Editor. México, 1975.

- GRUPPI, Luciano: *El concepto de hegemonía en Gramsci*. Ediciones de Cultura Popular. México, 1978.
- HARNECKER, Marta: *Pueblos en armas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua*. Entrevistas. Serie Popular Era/84. México, 1984.
- KUDACHKIN, M.: *Chile: la experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias*. Editorial Progreso. Moscú, 1978.
- LABARCA, Eduardo: *Corvalán 27 horas*. Entrevista. Editorial Qui mantú. Santiago, 1972.
- LENIN, Vladimir Illich: "Apreciación del momento actual" En: Lenin, *Obras Completas*. Tomo XI. Editorial AKAL. Madrid, 1977.
- "Dos tácticas de la socialdemocracia rusa en la presente revolución". En: *Obras Escogidas* (en doce tomos). Tomo III. Editorial Progreso. Moscú, 1976.
- "El imperialismo, fase superior del capitalismo" En: *Obras escogidas* (en doce tomos). Tomo V. Editorial Progreso. Moscú, 1976.
- *Entre dos revoluciones*. Editorial Progreso. Moscú, 1974.
- Macciochi, María Antonietta: *Gramsci y la revolución de Occidente*. Siglo XXI Editores. México, 1980.
- Maira, Luis: *Chile, autoritarismo, democracia y movimiento popular*. Ediciones del CIDE. México, 1976.
- Marx, Carlos: "El dieciocho brumario de Luis Bonaparte". En: *Obras escogidas* (3 tomos). Editorial Progreso. Moscú, 1978.
- "La lucha de clases en Francia". *Obras escogidas*. (3 tomos). Editorial Progreso. Moscú, 1978.
- Portelli, Hugues: *Gramsci y el bloque histórico*. Siglo XXI Editores. México, 1983.
- Prats González, Carlos: *Memorias*. Pehuén Editores. Chile, 1985.
- Villalobos, Sergio et al: *Historia de Chile* (en cuatro tomos). Editorial Universitaria. Chile, 1983.
- Zavaleta, René: "Notas sobre la democracia burguesa, la crisis nacional y la guerra civil en Chile". En: Vuscovic, Pedro et al: *El golpe de estado en Chile*. Coedición del Fondo de Cultura Económica y la UNAM. México, 1975.

HEMEROGRAFIA

- Aldunate, José et al: "Chile: informe económico". *Chile informativo* # 129/130 Anexos. Boletín oficial de la Secretaría ejecutiva para América de solidaridad con el pueblo chileno. México, 1978.
- Aliaga, Raimundo: "Entrevista a un miembro de la Comisión Política del PCCh". PCCh: *Boletín del exterior* # 44, noviembre/diciembre 1980.
- Cáceres, Gonzalo: "En Chile germina un nuevo estado de cosas. Entrevista a Luis Corvalán". PCCh: *Boletín del exterior* # 70, marzo/abril 1985.
- Cantero, Manuel: "Los comunistas y las Fuerzas Armadas". *Revista Principios* # 127, septiembre/octubre. Chile, 1968.
- Caputo, Orlando et al: "La nueva modalidad de acumulación y la política económica en Chile". *Chile informativo* # 145/146 Anexos. Boletín oficial de la Secretaría ejecutiva para América de solidaridad con el pueblo chileno. México, 1978.
- Corvalán, Luis: "Acerca de la vía pacífica". *Revista Principios* # 77, Chile, enero 1961.
- "La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta". *Revista Principios* # 86, Chile, octubre 1961.
- "Aseguremos el camino pacífico". *Revista Principios* # 101, mayo/junio 1964.
- "Combatir los rasgos reformistas dentro de la Unidad Popular y el gobierno". Entrevista otorgada a la revista *Chile-Hoy*, Año I # 43, Chile, 1972.
- "Nuestro proyecto democrático". *Boletín del exterior* # 37, septiembre/octubre 1979.
- "Nadie nos apartará del deber de luchar por la unidad de todas las fuerzas antifascistas". *Boletín del exterior* # 39, enero/febrero 1980.
- "El derecho del pueblo a la rebelión es indiscutible". Discurso pronunciado en Moscú el 3 de septiembre de 1980. *Boletín del exterior* # 43, septiembre/octubre 1980.
- "Se gesta la acción común contra la tiranía". *Boletín del exterior* # 43, septiembre/octubre 1980.

- _____ "Pinochet no logra engañar con su farsa plebiscitaria". *Boletín del exterior* # 43, septiembre/octubre 1980.
- _____ "Avanzar por el camino de la unidad y de la lucha domi-
nando las más diversas formas de combate". Discurso pronun-
ciado en Estocolmo el 16 de noviembre de 1980. *Boletín del
exterior* # 45, enero/febrero 1981.
- _____ "La rebelión popular, política de nuestro partido".
Boletín del exterior # 54, julio/agosto 1982.
- _____ "Unidad y lucha, clave de la victoria". Artículo en
dos partes. Diario *Uno más Uno* del 17 y 18 de diciembre de
1982. México.
- _____ "La tarea es echar a Pinochet". Intervención en la au-
dición "Escucha Chile" de Radio Moscú el 27 de noviembre de
1982. *Boletín del exterior* # 57, enero/febrero 1983.
- _____ "Debe imponerse la unidad del pueblo". *Boletín del ex-
terior* # 68, noviembre/diciembre 1984.
- Carrasco, Alfonso: "La vanguardia de la clase obrera". *Boletín
del exterior* # 58, noviembre/diciembre 1979.
- Castro, Manuel: "Dictadura, democracia y crisis". *Boletín del
exterior* # 65, mayo/junio 1984.
- Comisión Política del PCCh: "La tarea de las tareas es echar
abajo la dictadura. Informe al Pleno del Comité Central rea-
lizado en enero de 1985. *Boletín del exterior* # 71, Extraor-
dinario. 1985.
- Comité Central del PCCh: "Manifiesto del PCCh. *Principios* #
149, enero/febrero 1973.
- _____ "Convocatoria al XV Congreso Nacional del PCCh". *Princi-
pios* # 151, mayo/junio 1973.
- _____ "Democracia ahora !Fuera Pinochet!" emitido en Santiago
en marzo de 1984. *Boletín del exterior* # 65, mayo/junio
1984.
- _____ "Manifiesto del Comité Central del PCCh" emitido en San-
tiago en marzo de 1984. *Boletín del exterior* # 65, mayo/ju-
nio 1984.
- Chacón, Manuel: "Aclaración a la Alianza Democrática". *Boletín
del exterior* # 64, marzo/abril 1984.
- Fuenzalida, Daniel: "Sobre algunos problemas del desarrollo ca-
pitalista de Chile: 1973-1983". *Boletín del exterior* # 65,
mayo/junio 1984.

- Gustavino, Luis: "Nuestra línea revolucionaria". Revista *Principios* # 116, noviembre/diciembre 1966.
- Gutiérrez, Claudio: "La concepción marxista del estado". *Boletín del exterior* # 63, enero/febrero 1984.
- Insunza, Jorge: "Nuevos problemas tácticos". *Principios* # 138, marzo/abril 1971.
- "La cuestión del poder: tarea de masas". *Principios* # 140, septiembre 1971.
- "Las tareas actuales del partido de Recabarren". *Boletín del exterior* # 59, mayo/junio 1983.
- "La crisis política general y la creación de una situación revolucionaria". *Boletín del exterior* # 67, septiembre/octubre 1984.
- Insunza, Sergio: "La Constitución fascista de Pinochet". *Boletín del exterior* # 45, enero/febrero 1981.
- Marín, Gladys: "Declaraciones al Periódico El día del 23 de marzo de 1980, México", *Boletín del exterior* # 41, mayo/junio, 1980.
- Martínez, Enrique: "Lucha por el ejército y gobierno popular". *Boletín del exterior* # 34, marzo/abril 1979.
- Millas, Orlando: "A defender la victoria del pueblo!" *Principios* # 135, Chile, julio/septiembre 1970.
- "Los acuerdos de El Arrayán". *Principios* # 144, Chile, enero/febrero 1972.
- "Dialéctica del antifascismo y la lucha antimperialista y antioligárquica". *Boletín del exterior* # 40, marzo/abril 1980.
- "Las reivindicaciones democráticas actuales del pueblo de Chile". *Boletín del exterior* # 65, mayo/junio 1984.
- Montes, Jorge: "Acerca de las Fuerzas Armadas". *Boletín del exterior* # 62, noviembre/diciembre 1983.
- Ottone, Ernesto: "Nuestra propuesta a la Juventud Democrata-cristiana: Entendámonos hoy y mañana". *Boletín del exterior* # 31, septiembre/octubre 1978.
- PCCh: "Convocatoria al XI Congreso Nacional del PCCh". *Principios* # 49, julio/agosto 1958.
- : "Convocatoria al XIII Congreso Nacional del PCCh". *Principios* # 108, agosto 1965.

- : "Manifiesto al pueblo de Chile". *Boletín del exterior* # 75, agosto 1975.
- : "Para salvar a Chile hay un sólo camino: La unidad de todas las fuerzas antifascistas". *Boletín del exterior* # 19, septiembre/octubre 1976.
- : "Patriotas: sólo unidos derrotaremos al fascismo!". *Boletín del exterior* # 20, noviembre/diciembre 1976.
- : "Manifiesto del PCCh de mayo de 1977". *Boletín del exterior* # 24, julio/agosto 1977.
- : "Declaración del PCCh del 4 de noviembre de 1977". *Boletín del exterior* # 27, enero/febrero 1978.
- : "Manifiesto de mayo de 1979". *Boletín del exterior* # 36, julio/agosto 1979.
- : "Declaración de septiembre de 1980". *Boletín del exterior* # 44, noviembre/diciembre 1980.
- : "Programa común que propone el PC para unir a toda la oposición". *Boletín del exterior* # 50, noviembre/diciembre 1981.
- : "Mesa redonda con la Dirección clandestina del PCCh". *Boletín del exterior* # 56, noviembre/diciembre 1982.
- : "Manifiesto al pueblo de Chile de agosto de 1983". *Boletín del exterior* # 61, septiembre/octubre 1983.
- : "Posición del PC frente a las Fuerzas Armadas. Respuestas entregadas en Santiago en vísperas de Fiestas Patrias a la prensa capitalina". *Boletín del exterior* # 68, noviembre/diciembre 1984.
- Rojas, Rodrigo: "El fascismo: de septiembre de 1970 a mayo de 1973". *Principios* # 151, mayo/junio 1973.
- Rojas, Sergio: "La relación entre la línea política y la política militar del movimiento popular". *Boletín del exterior* # 44, noviembre/diciembre 1980.
- Rufz-Tagle, Jaime: "El poder adquisitivo del salario mínimo en 1983". *Revista Mensaje*, volumen XXXII, # 325. Chile, diciembre de 1983.
- Teitelboim, Volodia: "Más sobre el caso chileno". *Boletín del exterior* # 21, enero/febrero 1977.
- Varela, Andrés et al: "La economía chilena en cifras. 1969-1978". *Cuadernos Casa de Chile* # 22. Edición especial, Casa de Chile en México. Sin fecha de edición.

Vuscovič, Pedro et al: "Chile: milagro o fracaso económico?"
Cuadernos Casa de Chile # 1, Casa de Chile en México, 1976.

Yañez, Alejandro: "Algunos problemas de estrategia y táctica en el proceso revolucionario chileno". *Boletín del exterior* # 24, junio/agosto 1975.

—— "El origen y el carácter de la llamada ultraizquierda".
Boletín del exterior # 31, septiembre/octubre 1978.

Vocelevsky, Ricardo: "La crisis política de la dictadura". *Casa del tiempo Volúmen IV, # 41*, Universidad Autónoma Metropolitana. México, junio de 1984.

Zavaleta Mercado, René: "Movimiento obrero y ciencia social".
Historia y sociedad # 3. Imprenta Juan Pablos. México, otoño de 1974.

—— "Clase y conocimiento". *Historia y sociedad* # 7. Imprenta Juan Pablos. México, 1975.

* Datos hemerográficos que no tienen autor:

"Exposición Cáceres: las cuentas del Gran Capitán". Revista *Cauce* # 4, del 3 al 16 de enero de 1984. Sociedad editorial La República Ltda. Chile, 1984.

"Chile: de la resistencia a la rebelión/ II. Entrevista a un dirigente del FPMR". Periódico *La Jornada*. México, 12 de septiembre de 1985.

"La rebelión es el único camino de victoria. Entrevista a Eduardo Contreras". Revista *Nuestro siglo* # 19, Editada por CECOPE. México, tercer trimestre de 1982.

DOCUMENTOS

Banco Central de Chile: "Indicadores económicos y sociales. 1960-1982". Santiago, 1983.

Caputo, Orlando: "Notas sobre la crisis del capitalismo". Cuadernos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. México, 1983.

_____ et al: "Comentarios sobre la mesa redonda de la Dirección clandestina del PC en Chile". Mimeografiado. Sin lugar de edición, 1983.

Comisión nacional de propaganda del PC mexicano: "Documentos de las conferencias de los partidos comunistas y obreros celebradas en Moscú en 1957 y 1960". Ediciones del Comité Central. México, 1963.

Comité Central del PCCh: "El Pleno de agosto de 1977". Ediciones Colo-Colo. Sin lugar de edición, 1978.

Consejo Ejecutivo del Comando Nacional de Trabajadores (CNT): "Reivindicaciones mínimas del CNT". Mimeografiado. Santiago, sin fecha de edición.

Corvalán, Luis: "Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con el pueblo chileno efectuado en La Habana el 7 de junio de 1977. *Un año en libertad*. Sin editorial ni lugar de edición. Diciembre de 1977.

_____ "Respuestas a Chile-América". Sin editorial ni lugar de edición. Diciembre de 1977.

Estay, Eduardo: "Formas de funcionamiento del capitalismo en Chile y su inserción en la economía internacional". Tesis de Licenciatura en Economía. Universidad Autónoma de Puebla, México, 1983.

Gobierno de Chile: "Constitución Política de la República de Chile". Editora Cumbres. Santiago, 1980.

Gómez, María Soledad: "Partido Comunista de Chile. Factores nacionales e internacionales de su política interna (1922-1952)". Documento de trabajo. Programa FLACSO # 228. Chile, 1984.

Millas, Orlando: "La clase obrera en el gobierno popular". Cuadernillo de propaganda #4. Impresora Horizonte. Chile, sin fecha de edición.

Movimiento Democrático Popular: "El manifiesto que dio vida al MDP". Mimeografiado. Santiago, 1983.

Osorio, Jaime: "El estado y la economía bajo la dictadura militar". Informe de investigación # 1 de Centro de información, documentación y análisis sobre el movimiento obrero latinoamericano, CIDAMO, de la Universidad Autónoma de Guerrero. México, sin fecha de edición.

Palma, Patricio: "Presencia del imperialismo norteamericano en la economía chilena". Síntesis estadística # 70. Documentos y materiales económicos # 42. Mimeografiado. Sin lugar de edición, junio de 1982.

PCCh: "Programa del PCCh aprobado por el XIV Congreso Nacional realizado en 1969". Impresora Horizonte, Chile, 1972.

— "Llamamiento al pueblo de Chile a formar un Frente Antifascista para derrocar a la dictadura". Mimeografiado. Sin lugar de edición, 1º de mayo de 1974.

— "Carta del PCCh a las Fuerzas Armadas y Carabineros". Mimeografiado. Sin lugar de edición, septiembre de 1974.

— "La lucha de masas derribará al fascismo". Mimeografiado. Sin lugar de edición, octubre de 1978.

— "Informe al Coordinador". Mimeografiado. Sin lugar de edición, 15 de noviembre de 1980.

— "Curso sobre algunos aspectos de la política militar del partido". Guía para trece clases. Mimeografiado. Sin lugar ni fecha de edición.

Rojas, Rodrigo: "Intervención en el acto conmemorativo del 54 aniversario del PCCh efectuado en La Habana el 9 de enero de 1976". Mimeografiado. Sin lugar ni fecha de edición.

Yocolevsky, Ricardo: "El Partido Socialista de Chile bajo la dictadura militar". Mimeografiado. Sin lugar ni fecha de edición.

— "La izquierda chilena en 1982". Programa de Maestría en Sociología. Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Iberoamericana. Documentos de trabajo. México, octubre de 1982.

— "La Democracia Cristiana chilena: trayectoria de un proyecto". Facultad latinoamericana de ciencias sociales, FLACSO, México, 1985.

INDICE

| | |
|--|-----|
| INTRODUCCION | VI |
| CAPITULO PRIMERO: EL PROGRAMA DEL PCCh Y LA CUES- TION DEL PODER (1956-1973) | 1 |
| 1. Los planteamientos programáticos del PCCh | 2 |
| 2. La crisis nacional general y la irreso- lución del poder | 19 |
| Notas al capítulo primero | 40 |
| CAPITULO SEGUNDO: EL IMPACTO DE LA DERROTA Y LAS TACTICAS CONTRA LA DICTADURA (1973-1980) | 45 |
| 1. Caracterización general del periodo | 46 |
| 2. El PCCh y su evaluación de la derrota | 59 |
| 3. El PCCh y su caracterización del régi- men | 77 |
| 4. Estrategia frente al régimen | 83 |
| 4.1- Política de alianzas | 83 |
| 4.2- La acción política del PCCh | 92 |
| Notas al segundo capítulo | 105 |
| CAPITULO TERCERO: LA POLITICA DE REBELION POPULAR Y SU TRASCENDENCIA (1980-1985) | 112 |
| 1. La política de rebelión popular: algu- nas definiciones | 113 |
| 2. La irrupción de las masas | 132 |
| 3. Algunos problemas nuevos y el Pleno de 1985 | 152 |
| Notas al capítulo tercero | 166 |

| | |
|--------------|-----|
| | 191 |
| CONCLUSIONES | 171 |
| SIBLIOGRAFIA | 181 |
| HEMEROGRAFIA | 183 |
| DOCUMENTOS | 188 |
| INDICE | 190 |